

**CEDE****DOCUMENTO CEDE 2005-2  
ISSN 1657-7191 Edición Electrónica  
ENERO DE 2005****DEL CAMPO A LA CIUDAD EN COLOMBIA.  
LA INFILTRACIÓN URBANA DE LOS SEÑORES DE LA GUERRA.\*****GUSTAVO DUNCAN****Resumen**

Para sorpresa de la opinión en Colombia, la mafia en el sentido de la definición tradicional de ‘empresarios de la protección’, asociada a la imagen de los mafiosos sicilianos, rusos o los japoneses de la *yakuza*, es un fenómeno muy reciente en la historia de las ciudades del país. Más de una década posterior al apogeo de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Su principal objetivo es el logro del monopolio de la coerción y la protección de una serie de actividades susceptibles al control del crimen organizado como los mercados de abastos, la extorsión, el narcotráfico, y como logro de un nivel superior, la apropiación del poder político en las ciudades. El siguiente documento es una descripción de lo que ha sido el proceso evolutivo de la mafia en Colombia, de carteles de narcotraficantes a redes de crimen organizado que basan su mayor o menor grado de poder en la capacidad de regular violentamente una serie de transacciones de alto valor estratégico en las ciudades. La tesis central del documento es que la irrupción masiva de redes mafiosas en las ciudades sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar y financiero recibido por los jefes de las autodefensas desde el campo.

Las consecuencias de la infiltración urbana de la mafia rebasan el tema de la crisis de seguridad y se enmarcan en transformaciones estructurales del Estado. Tras los intereses de una nueva élite de *señores de la guerra* está la tensión entre fuerzas urbanas que pretenden construir una sociedad regida por principios democráticos con un capitalismo moderno *versus* fuerzas rurales que quieren dispersar el poder del Estado para construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales. En el nuevo contexto de la disputa por la configuración del Estado, la connotación de lo *del campo* deja de estar vinculada a la imagen tradicional de economías y sociedades campesinas. Ahora se trata de las áreas de influencia de municipios e incluso ciudades intermedias que de la mano de su historia rural han experimentado procesos de urbanización y terciarización de la economía, en gran parte gracias a los excedentes del narcotráfico.

**Palabras clave:** crimen organizado, construcción de Estado, violencia, relaciones intragubernamentales, Colombia.

**Clasificación JEL:** D74, H77, K14, N46.

---

\* gusduncan@yahoo.com. Este artículo ha sido realizado gracias al apoyo económico recibido por la Cámara de Comercio de Barranquilla y la colaboración de la Secretaría de Gobierno del Atlántico. El autor desea agradecer a Enrique Berrío y Augusto García.

# FROM THE COUNTRYSIDE TO THE CITIES IN COLOMBIA. THE URBAN INFILTRATION OF WARLORDS.

## Abstract

To the astonishment of Colombian opinion, mafia in the traditional sense of 'entrepreneurs of protection', associated to the Sicilian, Russian or Japanese *Yakuza* mafia, is a very recent phenomena in Colombia's cities, and is more than a decade subsequent to Pablo Escobar and the Medellin Cartel. The main objective of the Colombian mafia is to achieve the monopoly over a set of activities that are susceptible to the control of organised crime, such as wholesale food markets, racketeering, drug trafficking and, as a superior goal, the appropriation of political power in the cities. This paper describes the evolution of the Colombian mafia, from drug-smuggling cartels to networks of organised crime that base their power on their capacity to regulate a set of high-value strategic transactions in the cities. The document's central thesis is that the irruption of mafia networks in cities has only been possible because of logistic, military and economic support received by paramilitary bosses from the countryside.

The consequences of urban mafias exceed the issues linked to the security crisis and reach a level of structural transformations of the State. The interests of the new *warlord* elite reflect the existing tension between urban forces that aim to build a society ruled by democratic principles and modern capitalism, *versus* rural forces that want to disperse the State's power in order to build regional governments based on criminal project immunity. In the new context of confrontation for the configuration of the State, the connotation of *from the countryside* is no longer related to the traditional view of peasant-like societies and economies. The countryside is now a notion of areas of influence for municipalities, and even small cities, that have experienced processes of urbanization and economic diversification towards the tertiary sector, to a great extent attributed to revenues from drug trafficking.

**Key words:** organised crime, state building, violence, intra-governmental relationships, Colombia.

**JEL Classification:** D74, H77, K14, N46.

## **DEL CAMPO A LA CIUDAD EN COLOMBIA. LA INFILTRACIÓN URBANA DE LOS SEÑORES DE LA GUERRA.**

En los municipios de Colombia donde ejercen su dominio, los jefes de las autodefensas son los dueños absolutos del Estado. Regulan y extraen tributos a las transacciones económicas, amenazan y protegen a las comunidades, moldean la justicia y el orden político de acuerdo a su conveniencia, y poseen el control, y por consiguiente las mayores ganancias, del tráfico de drogas. Durante más de una década la expansión geográfica de estos ejércitos de *señores de la guerra* ha ido en ascenso, hasta llegar a convertirse en parte importante de la estructura de poder político en las zonas semiurbanas y rurales del país.

Sin embargo, existe un fenómeno que no es tan perceptible pero que al igual que las estructuras de poder político impuestas por los señores de la guerra marcará la historia de Colombia durante los próximos años. Se trata de la infiltración de redes mafiosas desde las zonas semiurbanas y rurales de las autodefensas hacia las ciudades más grandes de Colombia. Si en los ochenta las mafias de las ciudades centraban sus actividades en asociaciones y disputas para traficar drogas, las actuales mafias urbanas tienen un modo de operar más parecido a las mafias tradicionales. Su principal objetivo es el logro del monopolio de la coerción y la protección de una serie de actividades susceptibles al control del crimen organizado como los mercados de abastos, los *Sanandresitos*,<sup>2</sup> la extorsión a los pequeños comerciantes, el sicariato, el narcotráfico, el contrabando, y como logro de un nivel superior, la apropiación del poder político en las ciudades. La infiltración de los cargos de elección popular (alcaldías y concejos) genera enormes ganancias producto de la corrupción en la contratación pública, la impunidad frente a las instituciones del Estado y la capacidad de crear una red clientelista propia.

Paradójicamente, es la debilidad económica de la clase política tradicional una de las principales causas de la infiltración de las redes mafiosas en las ciudades. Bajo un grado mínimo de modernización del sistema económico de una ciudad y de un tamaño de población con acceso a servicios del Estado sin necesidad de mediación clientelista, la mayor riqueza de los políticos locales para financiar una campaña electoral incidirá en un menor riesgo de infiltración mafiosa en el gobierno.

El siguiente documento es una descripción de lo que ha sido el proceso evolutivo de la mafia en Colombia, de carteles de narcotraficantes a redes de crimen organizado que basan su mayor o menor grado de poder en la capacidad de ejercer coerción y protección sobre una serie de transacciones económicas, políticas y sociales de alto valor estratégico en las ciudades. La tesis central del documento es que la irrupción masiva de redes mafiosas en las ciudades sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar y financiero recibido por los grupos de autodefensa desde el

---

<sup>2</sup> Los Sanandresitos son centros comerciales donde se ofrece mercancía de contrabando. En teoría violan las leyes por evadir impuestos y traficar con mercancías, pero en la práctica existe toda una tolerancia legal por parte de las autoridades y cultural por parte de los consumidores que a pesar de estar al tanto del carácter ilegal de los negocios compran los bienes que se ofrecen.

campo. Los señores de la guerra son los verdaderos ‘jefes a la sombra’ de las redes, quienes transformaron la visión de las mafias de contrabandistas de drogas a ‘empresarios de la protección’.

Las consecuencias de la infiltración urbana de la mafia rebasan el tema de la crisis de seguridad y se enmarcan en transformaciones estructurales del Estado. Tras los intereses de una nueva élite de señores de la guerra está la tensión entre fuerzas urbanas que pretenden construir una sociedad regida por principios democráticos con un capitalismo moderno *versus* fuerzas rurales que quieren dispersar el poder del Estado para construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales. En el nuevo contexto de la disputa por la configuración del Estado, la connotación de lo rural o del campo deja de estar vinculada a la imagen tradicional de zonas agrestes bajo el orden de economías y sociedades campesinas. Ahora se trata de las áreas de influencia de municipios e incluso ciudades intermedias que de la mano de su historia rural han experimentado procesos de urbanización, terciarización de la economía e integración con otras regiones, en gran parte gracias a los excedentes que el narcotráfico le provee a estas sociedades.

Pero la interpretación del fenómeno de los señores de la guerra en Colombia es incompleta si se mira como un simple efecto del narcotráfico. Existe un antecedente histórico anterior a los traficantes de cocaína de los años ochenta, que se remonta a la aparición de facciones de *pájaros*,<sup>3</sup> bandoleros y guerrilleros que se independizaron de la ascendencia de los líderes de los partidos políticos desde finales del período de la *Violencia*. Por lo tanto su descripción implica retroceder hasta los primeros años de la década del cincuenta, cuando las élites urbanas dispararon la violencia de unas bases rurales que se habían salido de su control, pero que cuatro décadas más tarde con la explosión del narcotráfico y el fin de la guerra fría evolucionarían en señores de la guerra, capaces de incidir en la configuración nacional del Estado. Otro antecedente importante se encuentra en el proceso de globalización. La evolución hacia señores de la guerra y redes mafiosas no se trata de un fenómeno exclusivo de Colombia. El debilitamiento del Estado Nación y las oportunidades de lucro a través de delitos transnacionales, que caracterizan al momento histórico actual, ha influido en la proliferación de milicias y organizaciones criminales que desdibujan el poder del Estado según sus intereses. Por lo que se hace necesario comparar el caso colombiano dentro de un contexto de causas que trascienden lo local.

El documento consta de cuatro partes. La primera describe el proceso histórico de formación de redes mafiosas en las ciudades. El relato se inicia con la aparición de los pájaros, bandoleros y guerrilleros en el final de la *Violencia* clásica, sigue con la instalación del Frente Nacional –que sometió momentáneamente la insurrección en el campo y ayudó a modernizar el país-, la explosión del narcotráfico, y las reformas políticas y económicas de la Constitución de 1991 que revertieron la

---

<sup>3</sup> *Pájaro* era el término con que se hacía referencia a las bandas armadas afiliadas al partido conservador, que con la tolerancia de las autoridades, asesinaban y desterraban a los miembros del partido liberal durante el período de la *Violencia*. Todavía en las regiones esmeraldíferas del país se usa este término para señalar a los guardaespaldas de los jefes locales.

ascendencia que los sectores urbanos tenían sobre las élites del campo en el desarrollo de la estructura de poder nacional. Culmina con la irrupción de los señores de la guerra, una nueva clase rural de facciones armadas, que sacando provecho de las circunstancias históricas anteriores se instalan en el poder local y se proyectan al nivel nacional controlando los cuerpos legislativos e infiltrando las ciudades mediante redes mafiosas. Estas redes se explican como un fenómeno inédito en la historia de Colombia porque se trata de un proyecto verdaderamente mafioso, en el sentido que su propósito es el monopolio de la protección de determinadas transacciones.

En la segunda parte se clasifican los niveles de infiltración de las redes mafiosas de acuerdo a tres categorías de actividades que son estratégicas para la proyección de los señores de la guerra en las ciudades: la criminalidad urbana, que tiene que ser eliminada o sometida a las redes para asegurar el dominio sobre la producción de violencia extra-estatal en la sociedad; el control mafioso de empresas lícitas, que provee los recursos que sostienen a la red; y el apoderamiento de las instituciones públicas (gobiernos, justicia y fuerzas de seguridad), que aparte de las ganancias por corrupción en la contratación del estado, garantiza la impunidad y la influencia social de las redes. Los niveles de infiltración están dados entonces por el grado de control que una red ejerce sobre cada una de las anteriores actividades.

En la tercera parte se analizan los factores que explican por qué las redes mafiosas han logrado infiltrar diferentes niveles de criminalidad, negocios e instituciones en las ciudades. El argumento principal que explica la infiltración urbana se basa en la debilidad del Estado central, que es una manifestación recurrente en la historia de Colombia. También se sostiene que influyen las características económicas y sociales de las ciudades, la riqueza de la clase política tradicional y los cambios propios del proceso de globalización. Finalmente, en la cuarta parte se discuten algunos efectos de la estructura de poder de las redes mafiosas en la dinámica del Estado, como una organización que busca poseer una configuración del estilo de las modernas democracias liberales. Lo que abarca facetas que van más allá de los procedimientos democráticos (elecciones libres y periódicas), y se interesa por el desarrollo de una sociedad civil capaz de controlar a los gobiernos, la aparición de un capitalismo dinámico y moderno, el acceso universal a los servicios sociales y el monopolio de la violencia por parte del Estado.

## **I. DE LOS BANDOLEROS A LOS SEÑORES DE LA GUERRA Y SU INFILTRACIÓN EN LAS CIUDADES A TRAVÉS DE REDES MAFIOSAS.**

La escalada actual del conflicto en Colombia es el resultado de la transformación de luchas insurgentes y contra-insurgentes tradicionales en una estructura más compleja de violencia, donde la aparición de ejércitos paramilitares, el narcotráfico, los sembrados de cultivos ilícitos y la criminalidad organizada, entre otros, han conducido a una disminución progresiva del control del Estado sobre la mayor parte del territorio del país. Los orígenes del conflicto pueden trazarse a finales de los años cincuenta, en las postrimerías del periodo conocido como *La Violencia* en que facciones armadas identificadas con los dos partidos políticos tradicionales se asesinaban por el predominio en las zonas menos urbanizadas del país. El fanatismo de este período dejó un total de muertes que oscila entre 100.000 y 200.000, de acuerdo a las diferentes fuentes.<sup>4</sup> Cuando finalmente los partidos liberal y conservador pactaron la paz mediante la alternación en el poder y la repartición equitativa de la burocracia pública bajo la figura del Frente Nacional (1958-1974), aparecieron los primeros movimientos guerrilleros de izquierda y se consolidaron cuadrillas de bandoleros dedicadas al robo, extorsión, asesinato y demás violencia criminal en las áreas rurales.<sup>5</sup>

### **El final de *La Violencia* clásica y el principio de la nueva violencia.**

En forma paralela a la gestación de las guerrillas, el fenómeno del bandolerismo y los pájaros amenazó con alterar las jerarquías tradicionales en que se basaba el poder político en las zonas rurales (Guillén 1996). Con la influencia y el aprendizaje de las luchas partidistas de los años de *La Violencia*, numerosos campesinos formaron bandas o cuadrillas criminales que se dedicaron a saquear pueblos, robar a los comerciantes y extorsionar hacendados. En un principio, estas cuadrillas estaban aliadas a gamonales locales que los utilizaban para amedrentar a sus competidores políticos y para adquirir tierras a bajos precios, dentro del modelo de luchas partidistas. Sánchez y Meertens calculaban que en 1964:

Había más de cien bandas activas, constituidas por grupos de campesinos armados, que más o menos organizadamente, y desconociendo los acuerdos de paz entre las directivas oficiales de los dos partidos tradicionales, prolongaron la lucha bipartidista. En primer lugar, con el apoyo militante o pasivo de las comunidades rurales de su misma identidad partidaria y, segundo, con la protección y orientación de gamonales que, utilizándolos para fines electorales, los empujaba a una guerra de exterminio,

---

<sup>4</sup> Fernando Gaitán. *Una Indagación sobre las Causas de la violencia en Colombia*. En Malcolm Deas y Fernando Gaitán, *Dos Ensayos Especulativos sobre la Violencia en Colombia*, (1995). FONADE. Bogotá. Pp. 188- 190.

<sup>5</sup> Ramsey estimó que a finales de 1960 existían en el país 58 bandas entre criminales y políticas, capaces de reunir 1383 hombres bien armados. Russel W. Ramsey, (2000) *Guerrilleros y Soldados*, Tercer Mundo Editores (2a. Ed.), Bogotá, p. 293.

debilitamiento o contención de sus adversarios en la estructura de poder local o regional.<sup>6</sup>

Luego, los bandoleros se independizaron del control político de las jefaturas partidistas locales y a través del terror impusieron su dominio en ciertas áreas rurales del país. Guillén (1996) sostiene que en las fases finales de la violencia la estructura de poder asociativa, basada en una alianza vertical entre las élites rurales, capataces y campesinos, que cada tanto se armaban y entraban en conflicto contra asociaciones similares, entró en una fase de disolución y dio paso a una nueva clase de poder en el campo. El sistema de lealtades verticales de los gamonales fue suplantado por el predominio de los guerrilleros, bandoleros y pájaros, quienes comenzaron a construir una estructura de poder independiente a través del robo de tierras, la extorsión y la usurpación del poder político.

La estructura del liderazgo campesino cambió con la implantación de la violencia. Los líderes carismáticos de la vereda adquirieron una importancia muchas veces mayor que la de los líderes del 'pueblo' o cabecera municipal. Y debilitando de esta suerte el enlace con el 'patrón' – hacendado y con el 'doctor' que dirigía la lucha política desde Bogotá y las capitales departamentales, la nueva estructura asociativa del campesino no sólo resultó ya inútil a los fines elitistas de los partidos sino que se postuló como una amenaza aún más grave que la que había originado la violencia como un método para conjurar el populismo clasista urbano.<sup>7</sup>

Una investigación de un caso particular, el texto *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 1946-1953* de Mary Roldan (2003), relata cómo durante el transcurso de *La Violencia* la primacía sobre el poder político evoluciona de los hacendados tradicionales a una nueva clase de guerreros. Para Roldan la segunda fase de la violencia en Antioquia (1949-53) que ocurrió en los municipios periféricos del departamento, es un fenómeno opuesto al de la primera fase (1946-1949) en que lo que se disputaba era el control de los puestos públicos por parte de la clase política afiliada a uno u otro partido. La violencia del segundo período estuvo marcada por el predominio de facciones armadas que bajo la excusa de los ideales liberales y conservadores, revolucionaron la estructura de derechos de propiedad de hacendados y colonos. La descripción que Roldan hace de los hechos sucedidos en el municipio del Tigre (Antioquia) ilustra el cambio en el sentido del conflicto que tuvo lugar con la nueva primacía de grupos armados por fuera de las alianzas políticas tradicionales:

Lo que había empezado como una lucha por la propiedad de la tierra entre los colonos y propietarios había abierto el camino para que grupos armados (inicialmente financiados con los terratenientes con la finalidad de desalojar a los disgustados colonos que desafiaban su autoridad) asumieran gradualmente el control sobre la hacienda y actuaran por su cuenta. Los grupos de "autodefensa" sin duda desalojaron a los colonos, pero también provocaron ataques de la guerrilla liberal en la zona y en última instancia

---

<sup>6</sup> Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, (1983), *Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El Caso de la Violencia en Colombia*, El Áncora Editores, Bogotá, Colombia. Pp.42.

<sup>7</sup> Fernando Guillén Martínez, (1996). *El poder político en Colombia*. Editorial Planeta, Colombiana S.A., Bogotá, Colombia. Pp -456.

crearon una situación de violencia tan grave que los propietarios originales no pudieron ni volver a tomar posesión de sus tierras ni atraer mano de obra para trabajarlas. Para los terratenientes locales, la lección de El Tigre era clara: habilitar a grupos armados, especialmente a aquellos que podían justificar sus actividades violentas mostrándose como aliados del gobierno departamental en una zona caracterizada por luchas por la propiedad y la mano de obra, era sencillamente una estrategia demasiado arriesgada para ellos, incluso a pesar de ser conservadores.<sup>8</sup>

La amenaza de insurrección de los bandoleros, guerrilleros y demás grupos armados por fuera del mando de los partidos fue uno de los motivos que propició la conciliación de las élites liberales y conservadoras del país en un acuerdo político conocido como el Frente Nacional, que consistía en la repartición equitativa de la burocracia pública entre los dos partidos. Fue en este período que Colombia experimentó las tasas de crecimiento económico más altas de su historia, la industria y el sector servicio ganaron peso sobre el total de la producción nacional, se construyó la base de la infraestructura vial, la población se urbanizó y en general se dio un proceso de modernización de la sociedad. El poder político desde las ciudades ganó primacía sobre las élites del campo. Los votos y la riqueza de lo urbano marcaron una tendencia hacia la consolidación de un Estado central con mayor capacidad de controlar lo que sucedía en las regiones y de definir las leyes y el modelo económico que configuraban la naturaleza de la sociedad.

Las luchas partidistas en el plano regional, sin que se extinguieran del todo, dejaron de tener las connotaciones tan violentas y de odios tan sectarios de las décadas previas. Las lealtades entre los electores y los políticos profesionales se definían ahora por la capacidad de éstos de mediar ante el nivel central por inversiones en sus clientelas particulares, en esa medida el Estado ganaba capacidad de incidir instrumentalmente en lo local. Leal y Dávila (1990) y Archer (1998) identifican en este momento de la historia una evolución cualitativa en el clientelismo y en la naturaleza de la clase política de las regiones. Se dio el salto del clientelismo agrario tradicional al clientelismo de comisión. De una mediación basada en la subordinación a los terratenientes como fuente de trabajo, territorio y acceso al Estado, paulatinamente se pasó a un clientelismo más moderno, basado en un intercambio de votos por parte de la comunidad y de bienes funcionales por parte de una nueva generación de políticos profesionales. Las lealtades partidistas que configuraban las relaciones entre patrono y clientes fueron atenuadas por el Frente Nacional, lo que causó que los intercambios tomaran un auge aun más instrumental, donde las lealtades clientelistas estaban sujetas a la compra directa de votos, favores personales y a la gestión de inversiones públicas en determinados proyectos o servicios. Además de la votación recibida, la ganancia de los candidatos elegidos estaba en el porcentaje de recursos que lograban apropiarse por mediar en la

---

<sup>8</sup> Mary Roldan, (2003). *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 1946-1953*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología. Colombia. Pp. 197-198.



gestión de los recursos para su clientela<sup>9</sup>, lo que permitió así mismo la expansión de una clase de políticos profesionales ahora capaces de autofinanciar sus campañas.

A la estructura de organización del poder basada en el clientelismo, hay que sumarle la tradición de *capitalismo político*<sup>10</sup> de las élites nacionales y regionales (Guillén 1996). La forma como la economía ha sido orientada para generar rentabilidad se relaciona más con la producción de riqueza a través de las oportunidades que ofrecen los procesos políticos, que con un *capitalismo racional* donde existen empresas que compiten en mercados con sistemas legales independientes y libre acceso de capitales y mano de obra. El poder político ha sido la herramienta clave para asegurar el éxito de las empresas económicas. Tal como lo describe Revéz (1997):

Muchas de las fortunas de los colombianos han surgido de la ambigüedad del Estado entre lo público y lo privado, de la imbricación entre lo político y lo económico. Se han hecho controlando el Estado y no desde la sociedad civil. El Estado como sistema de contratación es el núcleo central para entender la dinámica política y económica.<sup>11</sup>

Los gremios como los cafeteros, los industriales y los comerciantes, y luego los grandes conglomerados, hicieron de la negociación política de privilegios en el mercado la fuente de su riqueza. Desde antes del Frente Nacional la especialización regional en la producción de ciertos bienes, conformó una estructura geográfica y política donde el predominio sobre la sociedad civil se fraguó en el marco de decisiones favorables para las élites gremiales – regionales.

La violencia por el poder político tuvo así un fuerte incentivo en el consecuente control del poder económico a escala nacional y regional. En muchos casos fue notoria la coacción armada por parte de los caciques políticos contra la clientela de sus opositores. Atehortua (1995) en su descripción del caso de Trujillo (municipio del Valle del Cauca), muestra que desde finales de la violencia, los jefes políticos locales del conservatismo usaban bandoleros y pájaros contra miembros del mismo partido para consolidar su poder y alterar los resultados de las elecciones. Incluso en momentos ya bien entrado el Frente Nacional, las disputas al interior de la jefatura

---

<sup>9</sup> Lo que se conoce como *comisión clientelista*. Ronald P. Archer, 'The Transition from Traditional to Broker Clientelism in Colombia: Political Stability and Social Unrest', Working Paper No. 146, July 1998, Kellogg Institute for International Studies.

<sup>10</sup> El concepto de capitalismo político que se usa aquí está basado en las descripciones de Weber sobre los seis modos de la economía de acuerdo a su forma de generar rentabilidad. Los seis modos pertenecen a tres tipos: capitalismo racional (que se basa en la generación de empresas), capitalismo político (que se basa en la apropiación de riqueza a partir del poder político) y capitalismo comercial tradicional (que se basa en el comercio tradicional, la usura y las primeras formas de banca). El capitalismo político esta subdividido en tres modos: depredación sobre procesos políticos, asociados a la financiación de la guerra y los consiguientes botines; rentabilidad a través de la fuerza y la dominación de la economía; y rentabilidad proveniente de tratos inusuales con las autoridades políticas. El caso de Colombia muestra presencia de los tres modos de capitalismo político. El clientelismo tiene todos los rasgos del último modo, al tiempo que el enriquecimiento de los actores armados en las últimas dos décadas de conflicto está más relacionado con los dos primeros modos. Tomado de Richard Swedberg. *Max Weber and the idea of economic sociology*. Princeton University Press. 1998. Ver también Max Weber (1997). *Economía y sociedad*. Bogotá. FCE.

<sup>11</sup> Edgar Revéz, (1997). *El Estado como mercado*. FONADE. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia Pp-45.

nacional del partido conservador se tradujeron en alianzas con los bandos de reconocidos jefes locales de Trujillo que basaban su poder en la violencia. No era ya la identificación con el partido liberal o conservador lo que motivaba las luchas políticas en las regiones, sino que el mismo trasfondo de control del poder y de la economía local aparecía en la superficie como el objeto real de la razón de ser de la violencia.

El fin del bandolerismo se produjo según los informes oficiales en 1965 cuando la Policía Nacional ejecutó una intensa ofensiva contra las cuadrillas por la presión política en el Congreso de terratenientes afectados por sus acciones. Pero la realidad mostraría que en muchas áreas del país bandoleros y pájaros seguirían siendo los verdaderos dueños del Estado en lo local, o al menos su influencia persistiría representada en el uso de la violencia criminal como mecanismo de regulación de transacciones sociales. El caso más relevante de la implantación de un Estado por parte de bandoleros puede rastrearse en las zonas esmeraldíferas de Boyacá, donde primero Efraín González y luego Humberto ‘el Ganso’ Ariza, ambos reconocidos bandoleros, harían del control territorial de las minas un laboratorio de lo que luego sería el modelo de dominación de los señores de la guerra en zonas de economía extractiva. Muchos años antes que estuvieran disponibles los cuantiosos recursos del narcotráfico:

A Efraín González no le tenían miedo sino respeto, porque era él quien se encargaba de mantener el orden en la zona. [...] Organizó todo eso, apaciguó la violencia bipartidista, cuidaba a todos los esmeralderos. [...] Se reunía mucho con los comerciantes y esmeralderos, le preguntaban que cómo estaba la región, él les respondía que trabajaran tranquilos. Los esmeralderos lo patrocinaban, no habían robos cuando él cuidaba la zona, la gente lo quería mucho, y si se robaban algo él no permitía que el delito se quedara impune. Uno podía andar sin problema por toda la zona esmeraldífera.<sup>12</sup>

A pesar del modesto crecimiento de las guerrillas y de la extinción de las cuadrillas de bandoleros, entre el final de *La Violencia* y principios de los ochenta se gestó una parte considerable de la estructura de violencia que predominaría hasta ahora. Pecault en vez de describir este periodo como de verdadera paz, utiliza el término de violencia larvada al manifestar: “que para diversos sectores colombianos la política y las luchas sociales no pueden ser dirigidas por un sistema de regulación democrática, sino que pasan por el uso de la fuerza”.<sup>13</sup> Gaitán (1995) corrobora con cifras la tesis de Pecault al mostrar cómo en las dos décadas subsiguientes a 1958, las tasas de homicidio permanecieron a niveles superiores a los de los años previos de *La Violencia*.

---

<sup>12</sup> Jeison Cifuentes Pérez. Testimonio de guaquero sobre “La guerra verde”. Bajado de la página de Internet de la Universidad Central de Colombia:

<http://www.uccentral.edu.co/acn/articulos/f130904/art053.htm>

<sup>13</sup> Daniel Pecault, (2001). *Guerra Contra la Sociedad*. Editorial Planeta Colombiana, S.A., Pp. 27.

## El narcotráfico.

Desde la década de los setenta con la bonanza *marimbera* y el tráfico menor de cocaína y otras drogas, se formó en Colombia una nueva clase de empresarios de lo ilegal. Pero es a principios de los ochenta que las ganancias por tráfico de cocaína alcanzaron cifras sin antecedentes en las actividades delictivas del país, lo que representaría un quiebre histórico en la dinámica del conflicto colombiano.

En 1987 los ingresos repatriados por narcotráfico llegaron a ser el 6.7% del PIB nacional (Rocha, 1999). Aunque la nueva clase de empresarios de lo criminal serían los principales beneficiarios de la nueva bonanza, sus repercusiones alcanzarían todas las esferas de la sociedad. El sector de la construcción, el comercio y los bancos, gozaron de cuantiosas utilidades con los nuevos inversionistas. En las zonas rurales los narcotraficantes compraron el 11% de los predios, lo que dio lugar a un fenómeno de concentración de la propiedad en el campo conocido como la *contra-reforma agraria*.<sup>14</sup>

El desafiante estilo del líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, generó una cultura de criminalidad al armar y financiar una generación de jóvenes de los barrios marginales sin mayores perspectivas laborales. Las tasas de homicidio se incrementaron progresivamente desde 1980 y en 1991 se situaron a la vanguardia mundial, ¡86 asesinatos por cada cien mil habitantes! De paso, la explosión de delincuencia hizo colapsar el ya ineficiente sistema de justicia mediante asesinatos, sobornos y amenazas. Las tasas de impunidad alcanzarían niveles por encima del 95% quince años más tarde.<sup>15</sup> Los narcotraficantes del Cartel de Cali, los competidores de Escobar, hicieron uso de un perfil más discreto. Se infiltraron en la clase política a todos los niveles de Estado. En 1996, se comprobó que la campaña del entonces presidente Ernesto Samper había recibido recursos del narcotráfico. Aunque el presidente logró mantenerse en el poder al culpar a otros mandos de la campaña de lavado de activos, quedó claro que la democracia en Colombia a todas las escalas estaba permeada por los intereses de los 'capos' de la droga.

La guerrilla supo aprovechar la llegada del narcotráfico y se independizó de la escasa asistencia logística de la Unión Soviética, China y Cuba. Las FARC crecieron a ritmos sin precedentes al negociar con los narcotraficantes la protección de los laboratorios de cocaína. El ELN literalmente resucitó al extorsionar los hallazgos petroleros en Arauca y carboníferos en Cesar. El capital de conocimiento en guerra de guerrillas, los combatientes y los cuadros formados durante dos décadas fue canalizado entonces hacia una nueva fase estratégica.<sup>16</sup> Si en un principio los

<sup>14</sup> El término *contrarreforma agraria* ha sido citado en numerosos textos, pero sin duda la investigación más seria sobre la apropiación de tierras por parte de narcotraficantes es la realizada por Reyes. Alejandro Reyes. *Compra de tierras por narcotraficantes*. En *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*. Editado por Ariel, PNUD y DNE. 1997. Pp. 279 – 346.

<sup>15</sup> Departamento de Planeación Nacional, Justicia y Desarrollo 1994. Las cifras de impunidad disponibles en Colombia son debatidas en el artículo *Impunidad penal: mitos y realidades* de Elvira María Restrepo y Mariana Martínez Cuéllar (Documento CEDE 2004-24). Sin embargo, en el propio artículo se puede inferir que la impunidad medida como delitos ocurridos sobre delitos resueltos con culpables condenados y encarcelados se halla en niveles exageradamente altos.

<sup>16</sup> Alfredo Rangel, (1999). *Colombia: Guerra en el Fin de Siglo*, Tercer Mundo Editores, Bogotá. Marco Palacios, 'La Solución Política al Conflicto Armado, 1982-1997'. En *El Siglo Pasado. Colombia:*

grupos guerrilleros se asentaron en las regiones rurales, pobres y sin presencia de Estado, a partir de los ochenta se expandieron hacia regiones más ricas, donde a través del terror, la extorsión y el secuestro comenzaron a extraer tributos a la producción económica. Adicionalmente, empezaron a copar importantes espacios de poder en lo local. Crearon bases de apoyo social en la población marginada al apropiarse de las funciones de Estado. Administraban justicia, resolvían disputas de propiedad y organizaban a la comunidad. Incluso, cuando se reglamentó la elección de alcaldes en los municipios, hicieron elegir candidatos propios o aliados. Se configuró así un nuevo mapa político de Colombia con mayor control territorial de la guerrilla.

Si en el sur del país el narcotráfico y la guerrilla mantenían una alianza basada en la protección de los laboratorios de droga, en el norte y occidente prevalecía una guerra a muerte por el control de los nuevos latifundios adquiridos por los narcos.<sup>17</sup> En los albores de esa guerra, los narcotraficantes se asociaron con los capitalistas rurales, y en alianza con las fuerzas armadas formaron los grupos paramilitares en la primera mitad de los ochenta.<sup>18</sup> A pesar que la mayoría eran empresarios honestos, los grandes y medianos hacendados, los comerciantes, políticos tradicionales y demás clase pudiente optaron por financiar grupos armados ilegales porque habían sido las principales víctimas de la expansión guerrillera. Muchos de ellos sufrieron en carne propia de secuestros y extorsiones sistemáticas, y en ocasiones tuvieron que abandonar sus tierras y lugares de origen por la imposibilidad de disponer de algún tipo de protección. Estos primeros paramilitares funcionaban como grupos armados que garantizaban la seguridad de los miembros de las nuevas élites rurales conformadas en el proceso de contra-reforma agraria, como lo describe Camacho:

En zonas del interior de la frontera agrícola, los procesos de adquisición de tierra por los narcotraficantes se traducen no sólo en el mejoramiento objetivo de algunas haciendas ganaderas en las que introducen nuevas variedades de insumos y productos, sino en la modificación de los patrones de dominación local. Los nuevos terratenientes son desde luego menos escrupulosos que los viejos propietarios, y no tienen reparos en organizar bandas armadas contra la Insurgencia, sus supuestos simpatizantes o quienes son definidos como delincuentes, a los que es preciso exterminar. No pocos ciudadanos aceptan esta modalidad de poder y justicia local, en la medida en que así se pretende lograr una cierta tranquilidad local.<sup>19</sup>

La estrategia inicial de estos grupos estuvo enfocada a complementar la acción del ejército, eran los encargados de realizar los *trabajos sucios* como amenazas, torturas y desapariciones. Existía una relación de relativa subordinación de las facciones paramilitares a los miembros de la fuerza pública y a la clase política

---

*Economía, Política y Sociedad*, compilación de Rafael Pardo. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 2001, Pp. 491-536.

<sup>17</sup> Rangel. Op. Cit.

<sup>18</sup> Tradicionalmente se señala el inicio de los grupos paramilitares en 1982 con la conformación del movimiento MAS (Muerte a Secuestradores), como respuesta al secuestro de una hermana del Clan de los Ochoa.

<sup>19</sup> Álvaro Camacho Guisado, "Narcotráfico, Coyuntura y Crisis: Sugerencias Para un Debate." En *El Siglo Pasado. Colombia: Economía, Política y Sociedad*, por Rafael Pardo (Compilador), Red Multibanca Colpatria, CEREC, Bogotá, Colombia, (2001), Pp 537-554. Esta Pp-541.

tradicional. Por lo que su difusión espacial estaba condicionada y supeditada a la presencia del ejército y de intereses de las élites capitalistas y narcotraficantes del campo.

### **La Constitución de 1991: descentralización y apertura económica.**

A principios de los años noventa el país se embarcó en una serie de transformaciones estructurales en lo político y lo económico. Hasta 1988 los Alcaldes de los municipios y ciudades de Colombia eran nombrados por la rama ejecutiva, producto de un cálculo milimétrico de la participación de las distintas fuerzas políticas en las votaciones presidenciales. A partir de esa fecha el sistema político entró en un proceso de descentralización. Primero se estableció la elección popular de alcaldes y gobernadores para los municipios y departamentos. Después, con la Constitución de 1991 se profundizaron las competencias y el poder político de las regiones, al delegarles la ejecución del gasto social a través de transferencias que representan en promedio el 8% del PIB.

Las estadísticas sociales del país mejoraron significativamente, pero se hizo mediante un aumento dramático de los costos de atención. Una década después de su implementación, era evidente que el esquema de descentralización en Colombia no contaba con mecanismos de control adecuados y el gasto público desbordaba la capacidad financiera del estado. El déficit fiscal pasó de 0.89% del PIB en 1990 a 5.72% en 1999. Ante la falta de incentivos y sistemas de información para garantizar una ejecución eficiente del gasto social, muchos mandatarios locales desviaron recursos a la financiación de sus campañas políticas y/o a su fortuna personal. Incluso, en municipios con bajo desarrollo institucional los recursos se desperdiciaban por pura incompetencia administrativa.

Los cambios en el sistema democrático afectaron la unidad y la disciplina de los dos partidos tradicionales. La circunscripción nacional para el Senado, el uso de votación residual para llegar a los cuerpos legislativos y la municipalización de la democracia, favorecieron a actores políticos locales que ahora no necesitaban someterse a un partido para acceder a puestos públicos. Con un capital limitado de votos podían manejar los recursos transferidos del gobierno central a los municipios e imponer una agenda legislativa independiente en los cuerpos colegiados de la nación. Se “quebró la red de lealtades y los viejos caciques electorales comenzaron a observar cómo crecía la rebelión a su alrededor. El “bolígrafo” o cualquier otro mecanismo utilizado en el pasado para la confección de las listas perecieron en el camino, siendo sustituidos por una clase política que se autoproclama a sí misma y accede a los cargos de representación política por sus propios medios”.<sup>20</sup>

Las estructuras políticas se fragmentaron y los grandes electores de los partidos tradicionales fueron suplantados por una variedad de ‘microempresas electorales’. Las nuevas fuerzas políticas agudizaron la atomización del uso de mecanismos clientelistas de articulación del poder. Gran parte del incremento de los costos en la prestación de servicios sociales se originó por el abuso en las

---

<sup>20</sup> Eduardo Pizarro Leongómez. La Atomización Partidista en Colombia: el Fenómeno de las Microempresas Electorales. Working Paper #292 – January 2002. Pp. 15.

comisiones y en la desnaturalización de los bienes ofrecidos en un sistema clientelista atomizado. En ese contexto, los grupos al margen de la ley tenían todas las ventajas dadas para montar sus propias redes clientelistas, lo que se denominó como *Clientelismo Armado*. A través de amenazas, las guerrillas y los paramilitares expulsaron a los agentes políticos que no se sometieron a su orden. Luego hicieron elegir a sus propios candidatos o se aliaron con políticos tradicionales para ocupar los cargos públicos de los municipios con sus redes de simpatizantes. La Federación de Municipios se quejaba que a finales de mayo de 2002 las FARC habían obligado a los alcaldes y concejales de 420 municipios a abandonar sus puestos.<sup>21</sup>

El sistema político impuesto a partir de la Constitución de 1991, en particular el rediseño institucional de la descentralización y el esquema de residuo electoral para llegar al Congreso, trajo numerosas ventajas para guerrillas y paramilitares, que dispusieron de mayor representación política en los cargos públicos y de nuevos recursos para la guerra. Las comisiones por el manejo de las transferencias pasaron a financiar su capacidad militar. Y en ocasiones, por el interés de expandir su base social, obligaron a los funcionarios a realizar una administración más eficiente de los recursos del estado. Las comunidades identificaron la apropiación violenta de la gestión pública con mejoras en los servicios que debía proveer el Estado, en particular la justicia y la seguridad. Lo que agravó aun más la capacidad del gobierno de controlar territorios.

De manera simultánea a las reformas políticas, se fraguaron cambios significativos en la estructura de la economía. El proceso de apertura liberó las restricciones arancelarias como una estrategia para dinamizar el sector productivo de Colombia a través de una participación más activa en los mercados internacionales. El cambio de un modelo de sustitución de importaciones a una visión de desarrollo basada en la construcción de un sector exportador fuerte, tenía su lógica en las transformaciones que acontecían en el sistema económico mundial – la globalización del comercio-, los costos por la ineficiencia productiva del proteccionismo y en el agotamiento de las posibilidades de crecimiento a partir de los mercados internos. Independientemente de lo positivo o negativo que haya sido la apertura para el desempeño económico del país, se dieron alteraciones en determinados sectores que tendrían su respectiva incidencia en el conflicto y en la distribución del poder político.

La industria y la agricultura se vieron perjudicados por la competencia internacional. Su participación dentro del empleo nacional bajó de un 43% a un 36.8% entre 1991 a 1997. El sector exportador creció levemente sin alcanzar a convertirse en un sector catalizador del crecimiento y fue la demanda interna la fuente del dinamismo económico desde 1991. Al mismo tiempo, la minería y el sector servicios se expandieron rápidamente. En particular este último sector, que emplea alrededor del 60% de la población. Los cambios sectoriales afectaron la distribución del poder económico entre y al interior de las áreas urbanas y rurales. Las ciudades fueron las grandes ganadoras porque concentraban la mayor parte de la demanda interna y del sector servicios. Gran parte de las élites regionales que

---

<sup>21</sup> Publicado en EL Tiempo – Conflicto Armado. *Alcaldes y concejales de 250 municipios de Colombia todavía gobiernan a distancia*. Marzo 29 de 2003.

basaban su poder económico en los cultivos masivos se arruinó por la importación de alimentos subsidiados del primer mundo o a precios más competitivos de otros países en desarrollo. La estructura política del campo fundada en la proyección nacional del gremio-región sufriría un debilitamiento progresivo del que nunca se recuperaría. Ocampo (2004) describió los efectos de la apertura en la estructura sectorial de la economía:

El elemento más importante de dicho proceso fue la redistribución masiva de ingresos entre la ciudad y el campo, de los cuales los grandes ganadores fueron los sectores de más grandes ingresos de las zonas urbanas y los mayores perdedores, los sectores de mayores ingresos de las zonas rurales. El deterioro moderado del coeficiente de concentración del ingreso a nivel nacional a lo largo de la década fue, así, el resultado de tendencias opuestas en la ciudad y el campo. [...] El deterioro distributivo no impidió que la pobreza se redujera en forma significativa en las zonas urbanas entre 1991 y 1997 – del 47.3% al 39.1%, de acuerdo con los datos del DNP-. Esta mejoría no tuvo, sin embargo, su correlato a nivel rural. Antes bien, como producto de la fuerte crisis agraria de estos años, la pobreza rural medida por ingresos aumentó.<sup>22</sup>

La escasa institucionalidad y desarrollo de las estructuras capitalistas en las sociedades agrarias se deshizo ante la magnitud de la crisis económica de los cultivos empresariales (en especial los sembrados transitorios: algodón, arroz, sorgo y maíz). Ese contexto de zozobra de las actividades productivas se agudizó por la expansión de guerrillas hacia las zonas integradas a los mercados agrícolas. Ganaderos, grandes cultivadores y terratenientes fueron sistemáticamente secuestrados y extorsionados. El valor de sus tierras se desplomó. La situación luego fue aprovechada por los grupos paramilitares para ofrecer sus servicios de protección. Las tierras volvieron a valorarse, pero la amenaza de expropiación de los excedentes de la producción agraria por los abusos de los paramilitares desincentivaron a muchos cultivadores, quienes prefirieron vender sus tierras a precios por debajo de su valor real. El caso del algodón en el Cesar analizado por Bernal (2004) relata los cambios acontecidos en la estructura de instituciones regionales luego de la crisis del cultivo:

Esta gran crisis marcó el inicio del debilitamiento del entorno de instituciones que la sociedad vallenata había estado construyendo, particularmente alrededor de los derechos de propiedad. Comenzaron a desaparecer todos aquellos factores y actores que habían contribuido al fortalecimiento de nuevos derechos de propiedad en el Cesar. [...] El virtual asalto sobre las propiedades, los derechos de propiedad sobre la tierra y los bienes de los individuos por parte de la guerrilla y los paramilitares ha estado claramente orientado a servir sus propios intereses por encima de los intereses individuales de los demás ciudadanos. No ha sido un conflicto generado por la escasez de la tierra, sino por la codicia de los poseedores del aparato coercitivo.<sup>23</sup>

Así, a la crisis de autoridad que experimentaron las tradicionales élites regionales frente al poder de las armas, el dinero de la droga y el auge de las

---

<sup>22</sup> José Antonio Ocampo, (2004). *Entre las reformas y el conflicto. Economía y Política en Colombia*. Grupo Editorial Norma, Bogotá. P-115.

<sup>23</sup> Fernando Bernal, (2004). *Crisis algodonea y violencia en el departamento del Cesar*. PNUD. Pp-111.

‘microempresas electorales’, se sumó la crisis económica del campo. El camino al relevo de las élites rurales que controlaban los gremios de la producción agrícola de la mano del poder político regional, estaba dado. Y no sólo fueron suplantados por el poder de la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes y los políticos profesionales, el papel de nuevas agencias institucionales diferentes al Estado influyó en el debilitamiento final de su ascendencia política sobre la sociedad.

La apertura, la reforma del Estado después de la Constitución de 1991 y la violencia inicial llevaron a que los gremios –regiones –sectores y los sindicatos dejaran de tener el monopolio de la sociedad civil. Ambos, al perder sus rentas-privilegios, disminuyeron su peso relativo en la estructura del poder. [...] Nuevos actores, tales como las ONG, los medios de comunicación, las minorías étnicas y culturales, las organizaciones de medio ambiente, las organizaciones de los derechos humanos y aquellas que buscan la paz han irrumpido en el juego político, contribuyendo a modificar las políticas del Estado.<sup>24</sup>

En el nuevo contexto político de la Constitución de 1991, de la apertura económica y de los cambios en las relaciones internacionales propios de la globalización, sucedieron tres importantes transformaciones en la evolución del conflicto. En primer lugar, el éxito de la erradicación de cultivos de coca en Bolivia y Perú y la producción de variedades de hojas de coca adecuadas a las condiciones de los bosques tropicales de Colombia, hizo que el país se convirtiera en el principal productor mundial. Rocha estimó que “para 1998 los cultivos ilícitos habrían tenido una producción valorada en US\$ 301 millones, equivalentes al 5.5% del PIB agrícola de las regiones productoras. Allí también habrían generado 57.000 empleos directos, es decir cerca del 6.7% del empleo agrícola”.<sup>25</sup> En zonas de frontera agrícola y colonización, donde las guerrillas ejercen como estado, el porcentaje era aún mayor. En Putumayo, Guaviare y Vichada representaron el 45% del empleo agrícola. Para la guerrilla el fenómeno de campesinos sembradores de coca o *cocaleros* significó no solamente una nueva fuente de ingresos, sino una poderosa base social desde donde articular su lucha contra el Estado. Los paros campesinos de 1996 auspiciados por las FARC mostraron que su fuerza social era capaz de inmovilizar tres departamentos.<sup>26</sup>

Las autodefensas también han reconocido en la base social de los cocaleros, un elemento de dominio indispensable para ampliar su poder regional. Aunque el telón de fondo de la guerra es la agudización del problema agrario en Colombia, entre ejércitos de narcotraficantes que concentran las mejores tierras<sup>27</sup> y guerrillas

---

<sup>24</sup> Edgar Revéz (1997). Op. Cit. P-81.

<sup>25</sup> Ricardo Rocha, (1999). *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico*. UNDCP. Bogotá, Colombia. Pp. 33.

<sup>26</sup> Rangel. *Op. Cit.*

<sup>27</sup> Durante las últimas dos décadas las mejores tierras se han concentrado en pocos propietarios y en actividades de baja productividad. Bejarano et al. argumentan que: “las organizaciones de justicia privada creadas a nivel rural por estos nuevos propietarios con intereses en el sector agropecuario cumplen adicionalmente con la función de amparar la compra de las mejores tierras, que en este momento puede aproximarse a cuatro millones de hectáreas localizadas en 409 municipios. Esta superficie sería más o menos la mitad de la tierra que el país dedica a la actividad agrícola, que en total es de alrededor de ocho millones de hectáreas. El incremento de los niveles de concentración de la tierra en pocas manos ha ocasionado el desplazamiento de campesinos hacia la frontera agrícola y



que asumen los intereses de los campesinos expulsados fuera de la frontera agrícola, dentro de la estrategia de las autodefensas juega un papel importante la lealtad de los cocaleros, así sea instrumento del terror o de conveniencia. La matanza de la Gabarra de 34 campesinos *raspachines* por parte de las FARC, porque trabajaban en una hacienda *cocalera* de un jefe paramilitar, advierte la importancia que tiene para ambos bandos el control mediante la violencia y la disuasión económica de este campesinado pobre. En su autobiografía *Mi confesión*, Castaño relató cómo se apoderó de los sembrados de coca del sur de Bolívar:

El ELN también perdió el control de la zona con esa rapidez, a raíz de la condonación de la deuda que tenían los campesinos con la guerrilla. Al llegar la Autodefensa, reuní a los cultivadores de coca de la región y les dije: “Por favor se organizan y por cada vereda se presenta un delegado para una reunión importante”. A la cita asistieron unos sesenta representantes. Según las cuentas les debían al ELN más de cinco mil millones de pesos. La guerrilla los había prestado para sembrar los cultivos ilícitos. En la zona obraba un comandante subversivo con el alias de “Gallego” al que conocían por “el gerente del Banco Agrario” Aproveché la situación y les dije a todos: “Señores, les dicen a todos los campesinos de la región que la deuda ha quedado condonada”. La gente hizo tremenda algarabía y festejó varios días. Entérese, que tampoco todo es color de rosa y que el campesino no nos quiere porque sí.<sup>28</sup>

Por su crecimiento y exclusión de los servicios básicos del Estado, los cocaleros y demás base social pobre que se gana la vida alrededor de la producción de narcóticos, pasó a constituirse un elemento importante para definir los resultados del conflicto. Dado que el Estado no puede encargarse de regular actividades criminales, que serían condenadas por la comunidad internacional, las oportunidades están servidas a facciones armadas del estilo de guerrillas y autodefensas. En adelante, contarían con una población que superaba el millón de habitantes ubicadas en la frontera agrícola del país en busca de un agente que haga las veces de Estado. Lo que equivalía a cuidar la seguridad de las comunidades, aplicar justicia, organizar los servicios básicos y evitar la especulación de los precios de la coca, a cambio del pago de un tributo periódico.

El mejor ejemplo de la incapacidad del Estado para regular las transacciones y los proyectos colectivos de las sociedades cocaleras son las declaraciones de los propios miembros de las fuerzas armadas, que reclaman la acción de otras agencias al realizar operaciones de recuperación de territorios que fundamentan su existencia en la producción y comercio de la coca. El 7 de septiembre de 2002 en un artículo del periódico *El Tiempo* el comandante de la Brigada Móvil Número 7, Coronel Jairo Rodríguez Sarmiento, aseguraba que la recuperación de Miraflores, un municipio dominado por las FARC-EP, no se hacía por la falta de acción integral de otras agencias del estado. Él argumentaba: “si fuera por llegar a Miraflores, ya lo

---

las ciudades. Las tierras se han sobrevalorado, lo cual desestimula la entrada de empresarios agrícolas y ganaderos al mercado. Asimismo, se ha apuntalado la tendencia hacia la extensión de la ganadería en el país en detrimento de la agricultura y de los bosques”. Bejarano et. al, (1997) *Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales*, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- y Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 85.

<sup>28</sup> Mauricio Aranguren, (2001). *Mi Confesión*. Carlos Castaño Revela sus Secretos, Editorial Oveja Negra, Bogotá, Pp- 254.

habríamos hecho. El problema es permanecer allá y eso se debe hacer en conjunto con el Gobierno. Junto con la tropa deben llegar obras sociales e instituciones como la Defensoría, el ICBF, los jueces. Hay que retomar la confianza de la población civil”.<sup>29</sup> En operaciones realizadas durante el primer semestre de 2004, el Ejército finalmente recuperó el dominio militar de Miraflores. Pero tal como lo advirtió el Coronel Rodríguez la recuperación del territorio fue incompleta en la medida que el resto del Estado no llegó. Lo más preocupante es que la población local, que depende exclusivamente de la coca, ha empezado a abandonar el municipio. El 9 de junio de 2004, El Tiempo tituló un reportaje con el encabezado “El ocaso de Miraflores”, donde narra cómo con la llegada de las fuerzas militares a reprimir el negocio de la coca se había producido una quiebra económica general de la población, al punto de tramitarse una iniciativa legal para reducir la categoría de Miraflores a corregimiento. Y en un reportaje posterior (agosto 21 de 2004) titulado “Miraflores pasó de ser la opulenta capital mundial de la coca a un municipio que se muere de hambre”, los habitantes le solicitaron al gobierno que: “nos flete un avión para salir de aquí y nos haga un canje por la coca que tenemos enterrada. Si nos la compran o la canjean, la desenterramos.”

En segundo lugar, la muerte de Pablo Escobar y la captura de los Rodríguez Orejuela causó el desmantelamiento de los grandes carteles de la droga. Los grupos dedicados al tráfico de drogas pasarían de una estructura organizada jerárquicamente a una estructura de redes atomizada, menos visible a la persecución de las autoridades pero más vulnerable a la violencia ejercida por grupos armados de izquierda o de derecha.<sup>30</sup> Sus intereses políticos han cambiado de influir en las decisiones nacionales a integrarse en las redes violentas de poder local que, junto con la clandestinidad de células operativas fragmentadas, ofrece mayores ventajas de protección frente a las autoridades. De alguna manera, hasta cuando el Cartel de Cali mantuvo su vigencia como organización criminal, los narcotraficantes mediaron como terceros en la lucha a muerte que existía entre guerrilla y paramilitares. En adelante estarían subordinados a quien ejerciera el control territorial.

De otro lado, el proceso de búsqueda y eliminación de Pablo Escobar auspició el establecimiento de estrechas alianzas entre miembros de la fuerza pública y narcotraficantes y cabecillas de grupos paramilitares. Los ‘pepes’ o ‘perseguidos por Pablo Escobar’ era un grupo heterogéneo de narcotraficantes que liderados por el paramilitar Fidel Castaño, se dieron a la tarea de colaborar con la persecución de la fuerza pública entregando inteligencia y asesinando sicarios, abogados, socios y testaferros del capo del Cartel de Medellín. Ante la amenaza que suponía el líder del Cartel de Medellín, la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) no reparó en que la Policía y el Ejército colombiano aceptarían la ayuda de reconocidos

---

<sup>29</sup> El Tiempo - Conflicto Armado. *Las FARC instituyeron un ‘paraestado’ en Miraflores (Guaviare)*. Bogotá, sábado 7 de septiembre de 2002.

<sup>30</sup> Andrés López y Álvaro Camacho Guizado. *From smugglers to drug-lords to “traquetos”: changes in the Colombian illicit drugs organizations*. Bajado de: <http://www.nd.edu/~kellogg/pdfs/LopeCama.pdf>.

narcotraficantes y criminales para dar de baja a Escobar.<sup>31</sup> Con el tiempo, la ayuda se transformaría en vínculos que corromperían a muchos funcionarios encargados de perseguir a los señores de la guerra y las redes mafiosas. Muchos de ellos terminarían incluso haciendo parte de las filas de las autodefensas.

En Colombia, a diferencia de México, donde el poder de los narcotraficantes está subordinado al poder de las élites políticas y económicas mediante cadenas verticales de mando, las alianzas entre delincuentes y miembros de las agencias de seguridad no presentan una estructura jerarquizada (Resa, 2001). La captura del cartel de Cali, junto a la explosión de denuncias por sobornos de los narcotraficantes a la clase dirigente conocida como el proceso 8000, agudizó el carácter desorganizado de la relación mafia y grupos de poder en los cuerpos de seguridad. A partir de ese momento las alianzas se dieron entre actores que coincidían en una zona, un operativo o un corredor geográfico determinado en la lucha contra un enemigo común (guerrilla y/o delincuentes menos organizados), al tiempo que se pactaba la renuncia a perseguir determinada criminalidad, básicamente narcotráfico y extorsión por protección, a través de sobornos a miembros de la fuerza pública.

### **Los señores de la guerra.**

Y en tercer lugar, la transformación de los grupos paramilitares en ejércitos privados al servicio de señores de la guerra. Ahora no se trataba de grupos armados subordinados a las Fuerzas de Seguridad o al poder de narcotraficantes, eran ejércitos de combatientes con una doctrina, identidad simbólica (uniformes, escudos, himnos, etc.) y armamento de guerra, que garantizaban la primacía de sus jefes sobre el poder local. En el propio discurso de sus miembros se hace manifiesto el cambio, se hacen llamar autodefensas y niegan su carácter de paramilitares. En las escuelas de formación del Bloque Central Bolívar, por citar sólo un caso, le repetían a los nuevos reclutas en las clases de formación política: “Las autodefensas son un grupo político, militar, antsubversivo, al margen de la ley, anticomunista, antiterrorista que busca la paz del país. Las autodefensas no son paramilitares; ellos eran los de antes, los que hacían masacres y mataban gente inocente. Nosotros solo matamos guerrilleros”.<sup>32</sup>

Fue así que desde la supuesta muerte de Fidel Castaño en 1994, y la llegada al liderazgo de las ACCU<sup>33</sup> de su hermano Carlos, los grupos paramilitares adquirieron su verdadera dimensión de propietarios del Estado en muchas ciudades pequeñas, municipios y zonas rurales del país. Su naturaleza de facciones armadas de los capitalistas rurales y narcotraficantes evolucionaría hacia ejércitos que imponen la seguridad, capturan los excedentes de la producción lícita e ilícita, administran la justicia y garantizan la supremacía de sus comandantes en lo local. Las élites rurales continuaron su proceso de transformación y ahora son los dueños

---

<sup>31</sup> En el best seller *Matar a Pablo Escobar* agentes de la DEA en Colombia reconocieron haber ‘vendido el alma al diablo’ al propiciar la alianza con paramilitares y narcos durante la operación que dio de baja a Escobar. Bowden, Mark. *Matar a Pablo Escobar*. Editorial INTEGRAL. 2002.

<sup>32</sup> Publicado en EL Tiempo – conflicto armado. *Las Autodefensas Unidas de Colombia entregaron a 13 menores de edad en Santander*. Bogotá, diciembre 14 de 2002.

<sup>33</sup> Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

de los ejércitos quienes dominan el orden político, económico y social. De ningún modo la transformación de las élites del campo se trató de la evolución de unos mismos actores que previamente se hallaban en el tope de la estructura de poder. En la mayoría de los casos la figura de los señores de la guerra proviene del ascenso en la sociedad de personalidades de clases medias y bajas, expuestos al aprendizaje de prácticas criminales propias del narcotráfico o a procesos de movilización de grupos a partir de experiencias de proselitismo político.

Las individualidades podían ser eliminadas, y de hecho lo siguen siendo por la misma dinámica violenta como mafiosos y señores de la guerra acceden y mantienen el control sobre los territorios. Pero detrás de cada asesinato y relevo de un gran jefe hay toda una cosecha de competidores con aspiraciones de arrebatarse los espacios de poder. La desaparición de Carlos Castaño probó que no bastaba ni el carisma ni el liderazgo para preservarse en el poder. Si se es superado en excedentes económicos y poder político la maquinaria de guerra se somete a los jefes más fuertes. Más aún, el asesinato de Miguel Arroyave demostró que a pesar de ser un jefe fuerte, con 5000 hombres y una fortuna personal incalculable, las circunstancias pueden atacar contra los individuos en un momento dado.

La movilidad para ascender en la escala de poder es una de las características asociadas a las manifestaciones mafiosas. Gambetta sostiene que una de las causas de la aparición de la mafia Siciliana fue la oportunidad de movilidad social: “Las oportunidades de movilidad social deben ser consideradas como una tercera causa concomitante [...] la evidencia sugiere que las zonas en el sur de Italia donde el crimen organizado ha prosperado tradicionalmente son aquellas que por diferentes razones la movilidad social era factible.”<sup>34</sup> Hobsbawm en su clásico texto *Rebeldes Primitivos* señala que al igual que en la mafia Siciliana tras los motivos ideológicos de la Violencia clásica yacía un interés de ascenso en la escala de poder de actores tradicionalmente subordinados:

En cierto modo desde luego se trata de una expresión de hambre de tierras, aunque se presente como campesinos conservadores asesinando y arrojando a los liberales de sus propiedades, o viceversa. Distintamente, en el curso de 15 años de anarquía, ha sido utilizada por una clase media rural ascendente (que por otra parte difícilmente hubiese encontrado forma de ascensión social en una sociedad casi feudal) para adquirir riqueza y poderío. Este aspecto de la Violencia se ha desarrollado en formas que recuerdan extraordinariamente a la Mafia siciliana, en especial en Caldas, el departamento productor de café por excelencia. Allí la réplica de los *gabellotti siciliani*, los administradores de los fundos y los burgueses han llegado a establecer una organización formal para hacer chantaje a los propietarios y aterrorizar a los campesinos, la *Cofradía de Mayordomos*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Gambetta, Diego (2000) ‘Mafia: The Price of Distrust’, En Gambetta, Diego (ed.) *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Departamento de Sociología, Universidad de Oxford, capítulo 10, pp. 158-175. Pp. 164. Traducción de: “The opportunities for social mobility should be considered as a third concomitant cause. [...] evidence suggests that the areas in southern Italy where organized crime has traditionally evolved are those where for different reasons social mobility was feasible.”

<sup>35</sup> Eric J. Hobsbawm, (2001). *Rebeldes Primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Libros de historia*. Barcelona, España. Crítica. P-235.

En el momento actual no deja de sorprender que el narcotráfico además de volver al país más inequitativo haya ampliado las oportunidades de movilidad social para individuos de ciertos grupos sociales en clara desventaja, que en otras circunstancias no podrían ni haber imaginado las fortunas y el poder que efectivamente han alcanzado. Al tiempo que la concentración del ingreso ha alcanzado cifras que colocan a Colombia en el grupo de los países más inequitativos del mundo, para un grueso de población de origen relativamente humilde existe la oportunidad de poseer riquezas que superan el billón de dólares.

En un intento por organizar los grupos paramilitares bajo una misma doctrina y proyecto político, Carlos Castaño creó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Creadas oficialmente en abril de 1997, las AUC funcionaban como una confederación de grupos paramilitares bajo un propósito nacional antiguerrillero. En este punto de la historia quedó claro que los paramilitares dejaron de ser un apéndice de las fuerzas de seguridad del gobierno. Más allá de los acuerdos explícitos y tácitos que desarrollan con las fuerzas militares, los ejércitos de las autodefensas, con más de 15.000 hombres en armas para el año 2004, responden a los intereses concretos de sus jefes. Su capacidad de incidir en lo político es enorme debido al sistema electoral colombiano, que les permite mediante el uso de *clientelismo armado* acceder a representaciones de poder importante en los cuerpos legislativos de la Nación y dominar los gobiernos locales de sus zonas de influencia. Además, cuando el contrabando de drogas no es monopolizado por ellos, extorsionan a las células de narcotraficantes locales que por su atomización son muy vulnerables a contrincantes organizados en ejércitos que en ocasiones superan los cinco mil hombres:

Los grupos paramilitares, organizados por los carteles para defender sus propiedades rurales en zonas guerrilleras, crecieron hasta convertirse en enormes bandas armadas que pronto sobrepasaron los intereses de los narcotraficantes terratenientes. Luego de ser entrenados por mercenarios británicos e israelíes en aspectos como la resolución de disputas y la eliminación de enemigos, las numerosas organizaciones paramilitares comenzaron a unificarse alrededor de una disputa despiadada contra las organizaciones guerrilleras. Aunque algunas de esas bandas están todavía al servicio de narcotraficantes, algunas otras han asumido una dinámica que las ha tornado en grandes ejércitos relativamente independientes de los barones de la droga.<sup>36</sup>

Así como las guerrillas consolidaron un Estado paralelo en las zonas de colonización agrícola y en regiones con amplia tradición de movimientos agrarios de izquierda, las autodefensas impusieron su Estado en las regiones de grandes latifundios, con alta disposición de capital, y sobre todo, en los espacios geográficos que constituyen corredores y refugios estratégicos para el narcotráfico (González et

---

<sup>36</sup> Andrés López y Álvaro Camacho Guizado. Op Cit., Pp. 27. Traducción del autor de: "Paramilitary groups, organized by the cartels in order to defend their rural properties in guerrilla zones, grew to become enormous armed bands that soon surpassed the agrarian interests of land owning drug-lords. After being trained by British and Israeli mercenaries in aspects such as settling disputes and eliminating enemies, the numerous paramilitary organizations started to unify around the ruthless struggle against guerrilla organizations. Though some of these bands are still at the service of drug-lords, some others have assumed a dynamics that has turned them into big right wing armies relatively independent from the drug-lords."

al. 2000). De esa forma surgieron unas nuevas élites rurales, que actuando como colectivos *de Señores de la Guerra* se agrupan con respecto a asuntos de interés común frente al gobierno y amenazas externas, como la política de extradición y las ofensivas de la guerrilla, pero que cada tanto entran en disputas internas por el dominio de territorios.

A manera de un renacer de los bandoleros, los señores de la guerra, como nuevas élites locales, suplantaron a la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales. Salvo en las regiones esmeraldíferas de Boyacá, en las décadas posteriores a la violencia clásica los bandoleros no contaron con una fuente de riqueza en el mundo criminal que les permitiera romper el equilibrio de poder. El narcotráfico permitió a las facciones armadas de los señores de la guerra no sólo establecerse en la estructura de poder regional sino también nacional. Los votos para el Senado y la Cámara de Representantes pasarían por la aprobación de la agenda política nacional que fuera del interés de los señores de la guerra. Los candidatos que no pactaran con las AUC no podrían realizar campañas ni contabilizar votos en sus zonas de dominio. El propio Salvatore Mancuso en una entrevista reveló que las fuerzas de las autodefensas dominaban un 35% del Senado colombiano.

En el mediano plazo el proyecto inicial de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- fracasaría, de acuerdo a la opinión de varios de sus comandantes históricos como Carlos Castaño y Doble Cero, por la renuncia de muchas de sus facciones a abandonar los vínculos con el narcotráfico. Pero una razón de peso más importante para explicar por qué las AUC no optaron por convertirse en un movimiento político unificado, y prefirieron continuar su existencia de colectivos de señores de la guerra, fue porque sus líderes con una visión integradora no pudieron imponer al grueso de las demás facciones un verdadero proyecto estructurado a escala nacional. No existían las condiciones para ello. Las características de las facciones de autodefensas respondían a intereses muy personalistas y localistas, que afectaban su viabilidad como un proyecto unificado a nivel nacional. El propio Castaño reconoció la disolución del movimiento como una consecuencia de la primacía de los intereses individuales: “la destrucción de las Autodefensas fue porque se narcofeudalizaron en su crecimiento, y es imposible para el Gobierno diferenciar unas de otras y ya casi ni nosotros”.<sup>37</sup>

Desde mediados de 2001 las fricciones entre los distintos bloques han sido tan intensas que aparecen en los medios de comunicación. La más violenta de estas fricciones fue quizás la que libraron las Autodefensas Campesinas de Casanare – ACC- contra el bloque Centauro de las AUC por la defensa de sus territorios históricos en el sur del Casanare y el oriente del Meta. Una disputa anterior, la de Hernán Giraldo contra alias ‘Jorge 40’ por el dominio de la Sierra Nevada, también trascendió a los medios de comunicación.

El establecimiento de una élite de señores de la guerra dentro de la estructura del poder político colombiano, no puede entenderse como un fenómeno coyuntural motivado exclusivamente por la codicia de guerreros y/o criminales. Más importantes

---

<sup>37</sup> Publicado en EL Tiempo – conflicto armado. *Paramilitares están en 'conmoción interior' ad portas de iniciar negociaciones formales con el Gobierno*. Bogotá, martes 10 de junio de 2003.

que la extracción de rentas son las consecuencias en la organización política de las comunidades dominadas por los señores de la guerra. El apoyo de la población que se ha acomodado al nuevo orden, aunque sea producto de la amenaza y la protección, explica la continuación del conflicto de la misma forma como lo hace la apropiación violenta de excedentes económicos de la extracción petrolera o del tráfico de cocaína. Si algo distingue la nueva estructura de poder político en las zonas semiurbanas y rurales de las autodefensas, es la paradoja de ejércitos privados al servicio de señores de la guerra, que al mismo tiempo establecen un orden y una dinámica política propia en las comunidades que controlan. No solo no hay incompatibilidades entre desviar las rentas propias hacia el gasto en la organización de los servicios locales, sino que éste es un requerimiento para el éxito y la durabilidad de los señores de la guerra. Reno (2000) considera que los hombres fuertes en lo local asumen la provisión de bienes y servicios públicos para debilitar las instituciones del Estado. Ellos temen que “empresarios rivales usen el control sobre instituciones exitosas para desafiar su dominio. Administradores que proveen servicios populares [...] ganarían apoyo de los agradecidos beneficiarios de los bienes públicos”.<sup>38</sup> Y es por esta razón que se constituyen en un gran desafío a la construcción de estructuras políticas sujetas a los propósitos y procedimientos de los modernos estados democráticos.

En muchos municipios de Colombia los señores de la guerra han asumido las funciones de protección, definición de los derechos de propiedad, tributación y organización de ciertos servicios sociales propios de los Estados. En otras palabras, además de extraer rentas mediante medios criminales los hombres fuertes de las autodefensas se han hecho responsables de administrar las funciones elementales que definen un Estado. Salazar y Castillo (2001) se refieren a estas formas de Estados como ‘Estados Primitivos’:

En los niveles tan bajos de orden y en las condiciones de anarquía extensa reinantes en muchas regiones de Colombia, las organizaciones paramilitares, las pandillas y demás formas de organización espontánea y delictiva en las ciudades, y las organizaciones guerrilleras se convierten en gérmenes de orden y en mecanismos para mejorar las ventajas competitivas de cada uno en la lucha por la obtención y conservación de los recursos escasos en disputa. [...] Al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el Estado renuncia a ser el garante de las interacciones entre los habitantes. Los derechos de propiedad, los contratos, los intercambios quedan en el limbo. Sin ellos, sin embargo, no puede haber vida social. Es apenas natural que un nuevo tipo de orden primitivo surja en esas condiciones.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> William Reno, (2000). *Shadow States and the Political Economy of Civil Wars*. Published in Greed and Grievance - Economic Agendas in Civil Wars. Edited by Mats Berdal and David Malone. IDRC/Rienner. Pp-53. Traducción del autor de: “[...] enterprising rivals use control over successful institutions to challenge their rulers. Administrators who provide popular services [...] would gain support from grateful beneficiaries of the public goods”.

<sup>39</sup> Boris Salazar y María del Pilar Castillo, 2001. La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia. Colección Sociedad y economía No.1 Centro de Estudios de la Realidad Colombiana – CEREC- y Facultad de Ciencias Económicas y Sociales –CIDSE- Universidad del Valle. Bogotá. Pp-43.

El hecho que los señores de la guerra organicen los servicios del Estado en las comunidades, tampoco niega la realidad de un abuso permanente sobre los excedentes de la producción privada y de la administración pública. En el mediano plazo su dominio aleja las iniciativas empresariales de individuos y grupos que estén por fuera del modelo de sociedad de las autodefensas.<sup>40</sup> Sin embargo, no hay que olvidar que la base de la economía de los señores de la guerra en Colombia es el narcotráfico, que comparado con las posibilidades de producción de riqueza de las regiones semiurbanas y rurales constituye una fuente de capital muy superior a cualquier alternativa lícita de negocios. Los individuos que no fueron eliminados o expulsados de su territorio terminan por las buenas o por las malas adaptándose a los nuevos patrones de la economía política local.<sup>41</sup> En las regiones no se han producido mayores manifestaciones de rechazo a la estructura económica que imponen los señores de la guerra. Los actos de rebelión de la comunidad contra las autodefensas, como las asonadas en San Pablo (Sur de Bolívar) y Concordia (Magdalena), se produjeron ante abusos violentos de poder, en concreto el asesinato de un comerciante y de un candidato a la Alcaldía.

El sentido de la apropiación desmedida de tierras por parte de los señores de la guerra guarda una racionalidad política antes que económica. La rentabilidad de los grandes latifundios es pobre cuando se compara con otros negocios de las autodefensas como el narcotráfico y la extorsión. La ganadería, los cultivos industriales y la finca raíz en el campo, no son empresas que se distinguen por su dinamismo al evaluar su tasa de retorno, el riesgo de la inversión y demás indicadores económicos. Pero la rentabilidad del control de tierras es invaluable desde el punto de vista de la inmunidad ante la justicia nacional e internacional. Duffield (1998) considera que en los nuevos conflictos internos, a los que califica como *conflictos postmodernos*, el objetivo de las facciones lideradas por señores de la guerra o redes de crimen organizado no es la toma del Estado sino la posibilidad de disponer de santuarios inmunes al control de los modernos Estados Nación desde donde negociar con los grandes mercados internacionales.

El éxito del poder político de los señores de la guerra en Colombia es que han logrado disponer de santuarios de inmunidad en las zonas rurales desde donde articular sus operaciones criminales. La reclusión y la eliminación física de la generación de los narcotraficantes de los carteles de Medellín y Cali, demostraron que las ciudades eran lugares vulnerables para los jefes del crimen organizado. Su presencia en un territorio no controlado del todo, donde la protección de escoltas y

---

<sup>40</sup> Jesús Bejarano, Camilo Echandía y Rodolfo Escobedo. (1997) *Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales*, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE- y Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

<sup>41</sup> En los relatos de Betancourt puede hallarse incluso una connotación de rebeldía ante las autoridades del gobierno central y a la política internacional de Estados Unidos en la especialización en el narcotráfico de la economía regional: “Yo creo que lo que ha favorecido para que la mafia se desarrolle, es el atractivo que produce la plata, la manera “fácil” y rápida de conseguirla; no todo el mundo, pero la gente camina detrás de esa ilusión, pues si los ricos tienen derecho a conseguirla, ¿por qué el pueblo no?; además son los únicos que han hecho progresar estos pueblos, y eso parece dolerle al gobierno, pero sobre todo al papá yanqui.” Darío Betancourt, (1998). *Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos*. Ediciones Antropos. Colombia. Pp-170.



los lujos resaltaba su visibilidad, proporcionaba un blanco atractivo para las autoridades. El aislamiento del campo proporciona un mejor refugio para los jefes del crimen si cuentan con facciones armadas propias, influencia sobre las autoridades políticas y militares locales, y los respectivos contactos vía soborno de instancias centrales de gobierno. Pero no se trata de la connotación tradicional del campo de territorios aislados, ordenados bajo la lógica de economías y sociedades agrarias, sino de las áreas de influencia de municipios e incluso ciudades intermedias que a pesar de su historia rural han generado aglomeraciones de población, mercados locales, servicios básicos e importantes fuentes de trabajo no agrícola. Son regiones que han superado el relativo atraso de sus economías primarias gracias a los excedentes del narcotráfico. Y fue en estos territorios, mezcla de cabeceras urbanas en crecimiento con su respectiva área de influencia rural, que los señores de la guerra montaron la estructura de su poder político, basados en la inmunidad de empresas criminales, y lo proyectaron a la escala nacional.

La prueba del éxito de la inmunidad de los santuarios rurales ha quedado plasmada en los resultados de las fuerzas de seguridad del Estado contra las facciones de autodefensa, que aunque muestran bajas de combatientes y decomisos de armas y de drogas, raras veces incluyen la captura de altos mandos de facciones. Quizá la captura más importante sea la de Juan Prada, fundador de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar.<sup>42</sup>

### **El paso hacia las redes mafiosas desde los santuarios rurales.**

En diversos documentos sobre el conflicto colombiano se reconoce a las autodefensas como facciones fragmentadas de señores de la guerra. La desaparición de Castaño, la persistencia de sus acciones criminales y la forma tan desarticulada con que los diferentes bloques paramilitares han afrontado el proceso de paz en Santafé de Ralito, extienden la apreciación de señores de la guerra a instancias más cotidianas de la opinión pública. Incluso los principales medios de comunicación del país se han referido a los jefes de las autodefensas como 'los señores'.

Lo que no está claro para la opinión pública, ni ha sido tratado a profundidad por investigaciones académicas o periodísticas, es la infiltración urbana de los señores de la guerra colombianos a través de redes mafiosas. El nuevo frente de las autodefensas en Colombia lo constituye el dominio de actividades estratégicas en las ciudades más grandes e importantes del país. Mediante una extensa estructura de redes que se extiende desde sus santuarios rurales, los señores de la guerra extraen cuantiosas sumas de dinero por amenazar y proteger actividades urbanas que van desde los populares mercados de contrabandos hasta la corrupción en la contratación pública. El enfoque tradicional de la geografía del conflicto como una disputa entre dos fuerzas que se contraponen en los límites de las zonas periféricas -plataforma de la guerrilla- y las áreas semiurbanas integradas a la economía -plataforma de las autodefensas-, no encaja en la estrategia de infiltración en las

---

<sup>42</sup> Ver noticia en página Web del Ejército Nacional de Colombia:  
[http://www.ejercito.mil.co/detalleArticulo\\_Periodico.asp?numDocumento=7621&idPagina=](http://www.ejercito.mil.co/detalleArticulo_Periodico.asp?numDocumento=7621&idPagina=)

ciudades. Se trata de un nuevo terreno en la crisis de seguridad, y más grave aún, en la incapacidad del Estado por imponer su hegemonía en zonas que se pensaba su dominio era casi invulnerable.

Si bien, es evidente que alrededor de guerrillas y paramilitares se tengan estrechas relaciones con la criminalidad organizada, de hecho constituye la raíz de su financiación, es necesario hacer distinciones más precisas entre las diferencias conceptuales de lo que es el crimen organizado, la mafia y los señores de la guerra, para precisar en que ha consistido la infiltración urbana de los señores de la guerra. Crimen organizado hace referencia a actividades delincuenciales llevadas a cabo por varios individuos. La carta de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional define crimen organizado como: “[...] un grupo estructurado de tres o más personas que durante un período de tiempo, actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más crímenes serios u ofensas establecidas conforme a esta convención, para obtener, directamente o indirectamente, ventajas financieras o materiales.”<sup>43</sup>

No todas las expresiones del crimen organizado clasifican dentro de la definición de mafia. La mafia es una forma más sofisticada de crimen organizado. Su concepto hace referencia a la protección y coerción de determinadas transacciones en una sociedad. Gambetta define a los mafiosos como ‘empresarios de la protección’.<sup>44</sup> Es decir, organizaciones criminales que cobran un ‘impuesto’ por proteger a individuos y/o organizaciones y a sus actividades económicas. Detrás de la protección mafiosa está todo un elemento de coerción. El incumplimiento del pago de la extorsión implica la violencia sobre los deudores de transacciones ilegales, que presentan mayor probabilidad de ser reguladas por agentes mafiosos, e igualmente de las actividades legales que son susceptibles a la regulación.<sup>45</sup>

La manifestación del fenómeno mafioso en Colombia adquiere una característica de red por la estructura que vincula el centro, que es el santuario rural desde donde se posee el control real, con los nodos, que son las células operativas encargadas de regular las transacciones en la sociedad. La estructura de los nodos y los vínculos de la red es más compleja que una relación directa del centro de la red con cada una de las células operativas. Las células de las redes mafiosas están interconectadas entre sí, y de hecho existen numerosos nodos que se vinculan con el centro de la red luego de pasar por varios nodos.<sup>46</sup> Por ejemplo, los nodos periféricos de la red constituidos por las transacciones que generan el excedente económico, como las organizaciones que lavan activos o venden mercancías de

---

<sup>43</sup> Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional. [Art. 2 bis (a)]. Traducción de: “a structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offence established pursuant to this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.”

<sup>44</sup> Gambetta (2000) Op. Cit.

<sup>45</sup> John C. Cross and Sergio Peña, 2001. “Risk and Regulation in Informal and Illegal Markets”. Florida State University. Working Paper No. 01-09c.

<sup>46</sup> La forma de la estructura de red de la mafia urbana en Colombia podría clasificarse como red multi-canales (all-channel network) de acuerdo a la definición de Arquilla y Ronfeldt en su artículo “The advent of netwar”. En “Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy”. John Arquilla, David Ronfeldt (editors). Rand Corporation. 2001. Pp. 1-25.

contrabando, son controlados o protegidos por otros nodos que a su vez necesitan de mediación de otros nodos para solicitar al centro de la red permiso de ejecutar violencia contra las células que incumplan los contratos o apoyo político en caso de presión por parte de las autoridades.

Según las anteriores definiciones, el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero, de la forma como han sido practicados por los carteles colombianos en los 80 y 90 y luego por organizaciones atomizadas, tienen una clasificación más cercana a los términos de crimen organizado que de mafia. Sólo el intento de Pablo Escobar por establecer un control monopólico sobre los grupos de traficantes de cocaína en Colombia a finales de los ochenta, podría clasificarse como un proyecto mafioso. De otra parte, el secuestro, como una operación delictiva en la que se planea y se ejecuta la retención de un individuo para luego cobrar un rescate o vender a la víctima a otra organización, es en esencia una actividad del crimen organizado. El control en un área de las organizaciones que secuestran por un actor que define a quien se puede secuestrar y la comisión que hay que pagar por el derecho a hacerlo, en cambio, sí es una actividad mafiosa.

La infiltración urbana de los señores de la guerra, por consiguiente, constituye un verdadero proyecto mafioso en la medida que su objetivo es el monopolio de la regulación de determinadas actividades económicas, e incluso de actividades políticas y sociales. Para sorpresa del grueso de la opinión en Colombia, la mafia en el sentido de la definición tradicional asociada a la imagen de los mafiosos sicilianos, rusos o los japoneses de la *yakuza*, es un fenómeno muy reciente en la historia de las ciudades del país. Más de una década posterior al apogeo de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

El término de señores de la guerra hace referencia a la coerción y protección en una sociedad por parte de facciones armadas, superior a la capacidad del Estado democrático de ejercer un grado mínimo de monopolio de la violencia. A diferencia de las redes mafiosas, que regulan determinadas transacciones y actividades, la escala en que los señores de la guerra amenazan y protegen las comunidades es tan extensa que alcanzan a constituirse en verdaderos Estados. Robinson (2001), a partir del caso de Charles Taylor en Liberia, precisa cinco distinciones para diagnosticar a los señores de la guerra: i) operan en estados colapsados o que están colapsando, ii) están interesados en explotar ganancias para si mismos, iii) tienen ejércitos propios, iv) desprecian el derecho internacional y los derechos humanos, y v) no son democráticos ni rinden cuentas a sus gobernados.<sup>47</sup> En busca de dar mayor precisión y de ilustrar acerca de las implicaciones en la evolución del conflicto que se exponen en este artículo, se sugieren las siguientes distinciones sobre el término de señores de la guerra colombianos: i) cuentan con un aparato armado con capacidad suficiente para amenazar y proteger a la población de una región durante períodos de tiempo prolongados. Sus ejércitos no tienen que estar en capacidad de adelantar combates abiertos con las fuerzas del Estado –en realidad trazan una

---

<sup>47</sup> Major T.P. Robinson. "Twenty -First Century Warlords: Diagnosis and Treatment?" Defense Studies, Vol.1, No.1, Spring 2001, pp.121-145.

forma conveniente de intervención mediante sobornos políticos y económicos,<sup>48</sup> el objetivo es imponer un ambiente de seguridad de acuerdo a sus intereses; ii) explotan los excedentes de economía lícita e ilícita, ya bien sea por posesión directa o mediante tributación por medios criminales; iii) ejercen una influencia directa sobre la organización y la dinámica política de la región. Controlan las elecciones, definen quiénes ocupan los cargos públicos en los municipios y cómo y en qué se ejecutan los recursos que el Estado invierte en la región; iv) regulan los derechos de propiedad y administran justicia; y v) controlan los flujos demográficos al decidir quiénes y qué tipo de población pueden habitar en sus áreas de influencia.

Por consiguiente, la principal distinción entre los señores de la guerra y la mafia es el alcance de su dominio político. La máxima aspiración de los señores de la guerra es convertirse en el Estado en las zonas semiurbanas y rurales del país, mientras que el logro máximo de los agentes de las redes mafiosas es infiltrar el gobierno de una ciudad. Un ejemplo de la diferencia es la función de vigilancia. En muchos pueblos pequeños del país son los miembros de las autodefensas quienes cuidan de la seguridad cotidiana. Se han hecho al monopolio de la violencia y en esa medida han suplantado al Estado central. Mientras que en las ciudades, salvo algunos vecindarios problemáticos, la institucionalidad de la Policía prevalece como agente encargado de cuidar del orden en las calles. En las áreas más urbanizadas la mafia sólo alcanza a regular ciertas funciones del gobierno y otras instituciones públicas. El Estado aún estando infiltrado por las redes mafiosas, guarda la estructura definida por procesos políticos concebidos a una escala nacional y que están representados por la constitución, las leyes y demás normas institucionales.

La mafia urbana en Colombia<sup>49</sup> comenzó cuando los jefes de las autodefensas, sin que existiera un movimiento sincronizado o coordinado, proyectaron su orden hacia las ciudades aledañas a sus zonas de dominio. En principio, la infiltración urbana se trazó en dos categorías de espacios susceptibles al control mafioso: los negocios legales vinculados a transacciones ilícitas y los vecindarios marginados. En ambos espacios el proceso de dominio implicó el asesinato selectivo de los delincuentes del área o su sometimiento a la hegemonía de la red, como condición indispensable para el logro del monopolio de la criminalidad.

Los *Sanandresitos*, los mercados de abastos y los juegos de azar, entre otros, son negocios que necesitan de algún grado de transacciones ilícitas -en el caso de los *Sanandresitos* se recurre al contrabando, en los mercados de abastos a la especulación con los precios y en los juegos de azar a la evasión de impuestos-, por lo que el Estado queda descartado como agente regulador. Antes de la llegada de las redes mafiosas, el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad

---

<sup>48</sup> Las autodefensas sobornan a los miembros de las fuerzas de seguridad tanto para no ser perseguidos como para recibir apoyo en su guerra contra la guerrilla. Incluso algunas autodefensas han sobornado a Ejército y Policías para recibir apoyo militar en sus disputas contra otros grupos de autodefensa.

<sup>49</sup> Aunque previamente han existido actividades ilegales y cuasilegales que han experimentado formas de protección de estilo mafioso en las ciudades, sólo hasta hace pocos años la función de protección por agentes distintos al Estado ha alcanzado niveles de masificación tan extensos. El atributo de lo masificado y extenso constituye uno de los fundamentos conceptuales del término "mafia urbana" que se utiliza en este artículo.

dependía de los guardaespaldas de los propietarios de los negocios, las 'oficinas de cobros',<sup>50</sup> o asesinos independientes. La ausencia de un monopolio sobre el poder de coerción, incidía en constantes y violentas disputas entre diversos grupos que no eran capaces de derrotar definitivamente a sus contrincantes. Cuando arribaron los señores de la guerra eliminaron a los grupos violentos que predaban de manera desorganizada y disminuían la rentabilidad de las actividades comerciales, e impusieron su monopolio de la coerción y la protección. El nuevo orden implicaba el pago periódico de extorsiones a cambio de suficientes garantías en las condiciones de seguridad para que los negocios prosperaran.

Las redes mafiosas de los señores de la guerra también encontraron asidero en los barrios marginales de las grandes ciudades donde habita la población urbana que no recibe los servicios del Estado o que los recibe incompletos. El grueso de esta población está conformada por individuos recurrentemente excluidos en los acuerdos nacionales y desplazados de áreas violentas, cuyo imaginario cultural poco ha desarrollado una relación de confianza en los principios de bienestar, tolerancia y respeto de la democracia. Las redes de los grupos de autodefensa aprovecharon la debilidad del Estado para apropiarse de las rentas directas e indirectas que genera el dominio de estas comunidades a cambio de prestar servicios de protección y de justicia. Las rentas directas provienen del cobro de impuestos a los habitantes de la comunidad por todas las actividades económicas que se llevan a cabo. Fue así que se volvieron comunes en las ciudades colombianas las noticias sobre asesinatos de tenderos y transportistas por no pagar las *vacunas*.<sup>51</sup> Las rentas indirectas provienen de la apropiación y creación de ganancias externas que genera el dominio de la comunidad, como son las transferencias del gasto social del Estado, la votación en las elecciones, la disponibilidad de una población joven para disponer de soldados y criminales, y el refugio que se obtiene al ser un actor político dominante de un grupo de población.

Los logros de la guerrilla en la conformación de redes mafiosas en las ciudades han sido muy limitados. En parte por la estructura rural de su ejército que hace más difícil infiltrar los complejos entramados sociales de grupos urbanos poco proclives a la ideología y a los sacrificios que implica la causa guerrillera. Y en parte por su diametral antagonismo con los postulados de libre empresa y propiedad privada del Estado central, que impide cualquier acuerdo para relajar la presión de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, eso no impide que adelanten operaciones del corte de crimen organizado y que controlen algunos barrios o comunas marginales a través de grupos de milicianos que progresivamente se han visto desplazados por los frentes de autodefensas. En artículos de El Tiempo aparece información sobre *oficinas de cobros*<sup>52</sup> manejadas por las FARC e incluso relaciones con bandas de

---

<sup>50</sup> Las oficinas de cobros son sitios donde se puede contratar asesinos a sueldo o comisionar a delincuentes para amenazar a individuos que incumplen los contratos.

<sup>51</sup> Vacunas es el nombre que se le da a las extorsiones que se cobran periódicamente. Un ejemplo de la problemática de extorsión a los tenderos se encuentra en el artículo de El Herald. Sección Judicial: *Tendero había sido retenido por grupo armado*. Barranquilla, martes 27 de julio de 2004.

<sup>52</sup> Ver artículo de periódico El Tiempo, sección conflicto armado: *Autoridades buscan las oficinas de cobro del ex negociador de las FARC 'Fabián Ramírez'* en Bogotá. Mayo 4 de 2004.

secuestradores con los que negocian rehenes.<sup>53</sup> Mientras las autodefensas han sido exitosas en el proceso de construir redes mafiosas, los grupos guerrilleros apenas han logrado armar redes de células encargadas de ejecutar operaciones criminales y/o terroristas muy específicas.<sup>54</sup> La operación más famosa de estas redes fue el atentado en Bogotá al exclusivo Club El Nogal el 7 de febrero de 2003, donde fallecieron casi medio centenar de personas. La razón del atentado al Nogal parece estar relacionada a una supuesta entrevista que tuvo lugar allí entre varios jefes de autodefensas y funcionarios del gobierno.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ver artículos de periódico El Tiempo, sección judicial: *Capturada banda de secuestradores que pedían rescates después de asesinar a sus víctimas*. Julio 24 de 2004, Bogotá. *Desarticuladas cuatro bandas delincuenciales conformadas por desertores de las Farc*. Mayo 20 de 2004. *Condena de 30 años para jefe de las FARC señalado de ser el 'zar' del secuestro en Cundinamarca*. Agosto 26 de 2004.

<sup>54</sup> La información disponible en prensa sugiere que las redes de las FARC en Bogotá no constituyen una estructura con complejas interacciones. Más bien, pareciera estar compuesta por nodos independientes entre sí vinculados por aparte a los frentes de las FARC en las zonas rurales. Se trataría así de una red en forma de estrella siguiendo la definición de Arquilla y Ronfeldt (2001).

<sup>55</sup> Como dato anecdótico hay que decir que la dirección electrónica de las Autodefensas Unidas de Colombia estaba registrada con la dirección física del mismo Club El Nogal.

## II. NIVELES DE INFILTRACIÓN DE LAS REDES MAFIOSAS EN LAS CIUDADES.

En la sección previa se han realizado dos importantes distinciones acerca del carácter de las nuevas redes mafiosas. Que se trata de la evolución de asociaciones que colaboraban y competían por el tráfico de narcóticos hacia la forma tradicional de la mafia: la disputa por el control monopólico de la coerción y la protección de determinadas actividades, entre ellas el mismo narcotráfico. Y que las redes mafiosas están soportadas en la jefatura de las autodefensas. Es decir, desde una posición ventajosa por su impunidad en los territorios rurales, los señores de la guerra regulan ciertas transacciones de alto nivel agregado en las sociedades urbanizadas y modernas del país.

Existe otra distinción clave para comprender el fenómeno de las redes mafiosas: su nivel de infiltración en la sociedad. No todas las redes mafiosas han alcanzado a controlar los altos cargos de gobierno como una alcaldía o un comando de policía. Algunas sólo han podido crear una estructura de protección de transacciones puramente criminales como las oficinas de cobros o el transporte de drogas. Y otras, poseen ciertas células que en vez de cobrar por protección, sobornan a las instituciones de justicia o de policía para que no persigan sus actividades. Estas células cobran a su vez una comisión de protección a las células encargadas de explotar económicamente las actividades amparadas por la impunidad de las instituciones del Estado. En vez de monopolio de la protección violenta funciona un monopolio de la protección por soborno.

La razón para referirse a la estructura mafiosa como una en red es por la forma de su organización, compuesta por células con funciones especializadas conectadas por vínculos de mando independientes entre sí pero subordinados a una célula superior. De acuerdo a las necesidades de la red las células independientes pueden actuar coordinadamente, pero siguen haciendo parte de una estructura fragmentada y difusa. Como contraejemplo de estructura en red puede citarse a las propias formas de los ejércitos de los señores de la guerra en lo rural, compuestos por organismos cohesionados jerárquicamente, visibles para sus miembros, con canales de mando claramente definidos y con unidad de acción.

El inicio de las redes mafiosas yace en el vínculo entre la estructura de poder de los señores de la guerra y la organización central en la ciudad responsable de regular el monopolio de la protección sobre las transacciones infiltradas. Alrededor de la organización central existen otros tres tipos de células que están conectados directa e indirectamente con el centro.<sup>56</sup> El primer tipo de células, *células soldados*, se encarga de la violencia que se ejerce contra individuos u organizaciones que no acepten someterse a los contratos de protección de la red, y otras redes, grupos o individuos que compiten por el monopolio de la protección. El segundo tipo de células, *células operativas*, está constituido por las células que ejecutan las actividades lícitas e ilícitas de las propias redes y/o predan sobre transacciones de terceros bajo contratos de protección. Las células operativas son las que generan las ganancias económicas de las redes. El tercer tipo de células, *células de*

---

<sup>56</sup> Debido a la forma multi-canales de las redes mafiosas colombianas, muchos nodos pueden estar conectados directamente con los señores de la guerra e indirectamente con la organización central.

*intercambio*, se encarga de intercambiar bienes y conductas con agentes de alto poder en una sociedad como la clase política, los administradores de justicia, los agentes del sistema financiero o las fuerzas de seguridad del Estado. La naturaleza de las transacciones consiste en el intercambio entre ambas partes de dinero, protección, influencia, violencia y persecución contra rivales.

Todas las redes disponen de los dos primeros tipos de células. Las células del tercer tipo en cambio sólo están presentes cuando los niveles de infiltración llegan a afectar el gobierno de una ciudad o a sectores influyentes de la sociedad. Eso no quiere decir que la rentabilidad de las ciudades para las redes mafiosas esté determinada por la infiltración de todo tipo de células. De hecho, existe un efecto de oposición entre la facilidad de infiltración de una ciudad y la rentabilidad de sus potenciales actividades mafiosas. En los grandes centros urbanos corromper un alcalde o un juez es mucho más complejo que en una ciudad intermedia, pero al mismo tiempo las ganancias que genera son abrumadoramente superiores, incluso en la escala de transacciones puramente ilegales.

Las redes mafiosas pueden clasificarse por el mayor o menor nivel de infiltración que poseen sobre tres tipos de actividades que regulan en una ciudad: las transacciones criminales, las actividades legales y las instituciones gubernamentales. A partir del uso de información de prensa sobre dos grupos de ciudades se ilustrará las diferencias entre los niveles de infiltración de los tres tipos de actividades. El primer grupo está compuesto por Bogotá, Medellín y Barranquilla. La población de estas ciudades es de más de un millón de habitantes, y en el caso particular de Bogotá supera los seis millones. El segundo grupo está compuesto por Cúcuta, Riohacha y Barrancabermeja. La primera cuenta con alrededor de setecientos mil habitantes, la segunda con cien mil y la tercera con doscientos cincuenta mil. Mientras que en el primer grupo no hay mayor evidencia de que la gobernabilidad de los altos funcionarios dependa de acuerdos a la sombra con las redes mafiosas, en Cúcuta, Riohacha y Barrancabermeja varios alcaldes han sido detenidos por asociación con grupos paramilitares.

### **Regulación de transacciones criminales.**

Debido a su riqueza y a su complejo entramado social donde pasar desapercibido, las ciudades proveen a los delincuentes de toda una gama de oportunidades para violar la estructura de derechos de propiedad establecida por las normas legales. Muy superior en número que el promedio urbano de países equivalentes en la región como Perú o Ecuador, en las ciudades colombianas existe una alta proliferación de individuos y organizaciones que compiten por los diferentes segmentos de la actividad criminal. Estas actividades van desde carteristas y atracadores hasta delitos más sofisticados como robo de valores, contrabando, narcotráfico, lavado de activos y corrupción de cuello blanco.

La estrategia de las redes mafiosas en el contexto de posibilidades que ofrece la criminalidad urbana, se divide en eliminar a delincuentes de baja reputación para crear una sensación de seguridad en la ciudadanía y en regular la criminalidad más sofisticada al punto de construir un monopolio sobre determinados delitos. Se trata de cobrar un impuesto por protección contra la delincuencia o por entregar



franquicias para delinquir a células operativas que se ocupan de actividades criminales. Quienes no cumplan los términos impuestos por las redes mafiosas son físicamente eliminados por las células soldados o son perseguidos por la autoridad pública que ha sido infiltrada.

En los barrios marginales de ambos tipos de ciudades las células de las autodefensas eliminan sistemáticamente a los delincuentes comunes y a individuos 'indeseables' del estilo de atracadores de esquina, drogadictos e indigentes. Lo que en medios de comunicación se ha referido en términos de 'operaciones de limpieza', en realidad son acciones de grupos criminales dirigidas a obtener el monopolio de la violencia sobre un vecindario y de paso enviar un mensaje psicológico de protección y justicia a sus habitantes. Después de las matanzas, las células de la red comienzan un trabajo político y militar de organización de la comunidad. Se capacita a las juntas de acción comunal en la gestión de obras sociales y se crean grupos de vigilancia con los jóvenes del vecindario. Este territorio se convierte en la base popular de las redes mafiosas, donde disponen de asesinos y personal de confianza, votos para las elecciones, refugio contra la justicia y otros competidores, y en muchos casos, corredores estratégicos que conectan las ciudades con las áreas rurales.

Delitos como atracos callejeros, venta al detal de drogas y robos menores, disminuyen y dan paso a un modelo de criminalidad basado en la extorsión sistemática de todas las transacciones económicas que se realizan en la comunidad y en el asesinato selectivo de quienes no pagan las *vacunas* o incumplen las nuevas reglas del juego. También aumentan los asesinatos por disputas de poder entre redes competidoras y al interior de las células por el control del vínculo con otros nodos de la red.

Las encuestas de percepción de criminalidad del DANE revelan el preocupante incremento de la extorsión como tecnología delincencial en las grandes ciudades. En el caso particular de Medellín:

[...] la ciudad donde hay "la mayor presencia de bandas, milicias y paramilitares", una de cada 100 personas de estrato 1 fueron extorsionadas el último año y en un poco menor proporción -pero aún a niveles altos- lo fueron los de estratos 2 y 6. Según el estudio, nadie denuncia este crimen por los "efectos intimidatorios". Esto confirmaría que la intervención militar en la ciudad y la posterior desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas no lograron desactivar del todo el paramilitarismo en la ciudad pues aún hay demasiados de sus antiguos integrantes extorsionando e intimidando a los ciudadanos como bandas criminales.<sup>57</sup>

De manera paralela al control de la criminalidad en los barrios marginales, las redes mafiosas infiltran formas delincuenciales de mayor valor agregado. En las ciudades grandes, el proceso de infiltración se centra en la obtención del monopolio sobre el asesinato a sueldo, el secuestro y las bandas de asaltantes de valores, y lo más rentable, el transporte y almacenamiento de narcóticos y el lavado de dinero. La evidencia en artículos de prensa es abundante. Andrés Camilo, jefe político del

---

<sup>57</sup> Revista Semana. *El que es Caballero renuncia. La salida del director del DANE, César Caballero, despierta graves dudas sobre cómo se está manejando la información en el gobierno.* Septiembre 19 de 2004.

Bloque Centauros,<sup>58</sup> el grupo que montó la red de las autodefensas en Bogotá conocidas como el Frente Capital, respondió en una entrevista al diario El Espectador sobre las 'oficinas de cobro':

Nosotros nunca hemos tenido oficinas. Pero sí han existido, eso todo el mundo lo sabe. Esa pugna entre unos y otros genera violencia y entonces, cuando llegamos a Bogotá, lo hicimos como reguladores, mediadores y para tratar de bajar esas posibilidades de conflicto. De alguna manera, nosotros nos convertimos en una especie de control de esas oficinas.<sup>59</sup>

Otra evidencia de actividades criminales ejecutadas por redes mafiosas con soporte en la estructura de las facciones de autodefensa, se encuentra en el caso de las dos toneladas y media de cocaína que decomisaron miembros de la Policía en Barranquilla y que luego fueron devueltas a sus dueños por el pago de un soborno. El cargamento al parecer pertenecía a narcotraficantes del norte del valle pero era transportado y protegido por miembros del Bloque Norte de las autodefensas. Ellos fueron quienes negociaron el soborno y el nombre de los tres informantes que denunciaron el transporte de la carga.<sup>60</sup> Dos ya han sido asesinados.

En las ciudades con menor población, la infiltración en las industrias criminales alcanza niveles superiores al regular delitos de cuello blanco. El objetivo principal es la corrupción en la contratación pública, lo que implica tener acceso a información sobre los proyectos, los funcionarios involucrados, el presupuesto y los pagos. El acceso al nivel de delitos de cuello blanco se logra mediante la inversión en las campañas de aspirantes a cargos de elección popular, y la amenaza contra funcionarios, organizaciones y periodistas que denuncien la entrega irregular de contratos o simplemente que se interpongan en su adjudicación.

La criminalidad orientada a la captura de las rentas públicas mediante el uso de la violencia contra la clase política que se atreve a desafiar el poder de las redes, no sólo tiene un antecedente en la forma como los señores de la guerra se apropian de las transferencias de la nación en los municipios semiurbanos y rurales del país, sino en momentos muy anteriores, durante el final de *la Violencia*. Atehortúa (1995) reconstruye las historias de la violencia en Trujillo (Valle del Cauca) después del triunfo de los conservadores en el pueblo, como la lucha por el poder político para el enriquecimiento individual:

Leonardo Espinosa pudo convertirse en la figura al lado de la cual se alineó la dirección política y el aparato militar de los pájaros. [...] Al dispararse la violencia sin control ni sujeción a las esferas gubernamentales y sin distingo de partido, ésta podría ser encausada con absoluta libertad para algo más que hacer política o ganar las elecciones; para desarrollar aquello que generaba resistencia en el escrúpulo de los "conservadores patiamarillos": para hacerse rico. [...] Aunque existían pretextos políticos suficientes con la ruptura definitiva entre Alzate Avendaño y el designado Roberto

<sup>58</sup> El Bloque Centauros posee alrededor de 5000 hombres equipados con fusil y controla territorios en al menos Bogotá, Casanare y Meta.

<sup>59</sup> El Espectador. Sección Bogotá, en artículo *Desmontaremos el Frente Capital*. Bogotá – Colombia. Domingo 1 de agosto de 2004.

<sup>60</sup> Revista Semana. JUDICIAL. *El general en su laberinto*. 2003 en: <http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=70993>

Urdaneta [candidatos conservadores a la presidencia de Colombia], las acciones en Trujillo se enredaban cada vez más en el escenario común del enriquecimiento. Los meses con mayor número de muertes no eran ya los prelectorales y el propio secretario de gobierno departamental, Rafael Navia Varón, negó que la violencia fuera política: se trata de “delitos comunes” que “han guardado un triste ritmo ascensional de pretensiones tenebrosas”, “abusando de las circunstancias anímicas que vive el país”.<sup>61</sup>

Como una replica de lo sucedido medio siglo antes, las redes mafiosas despliegan a sus soldados para que intimiden y eliminen si es necesario a cualquier competidor político. Instalan sus propias células operativas compuestas por políticos a sueldos, firmas contratistas de fachada y todo un número de servicios, que pagan comisiones a la organización central de las redes para poder hacerse a una tajada del presupuesto público. La diferencia entre los sucesos de principios de la década de los cincuenta con el fenómeno mafioso actual, es que mientras antes la apropiación violenta y descontrolada del presupuesto público sucedía en pequeños municipios ubicados en la frontera de la colonización, ahora se establece en ciudades de varios cientos de miles de habitantes. En Cúcuta, ciudad de más de 600.000 habitantes, el alcalde fue detenido por la Fiscalía por la evidencia encontrada de asociación con grupos paramilitares para asesinar potenciales delatores de la corrupción pública. De acuerdo a la revista Semana:

El último avance de la investigación, que dio soporte a la orden de captura de Suárez, fue la detención el pasado 17 de junio de Giovanni Enrique Buelvas, alias 'El Zarco' o 'Jerry'. Este hombre, que trabajaba para las autodefensas, confesó ante las autoridades haber sido el autor material del homicidio de Alfredo Enrique Flórez, asesor de la Alcaldía de Cúcuta, ocurrido el 6 de Octubre de 2003. Reconoció también que la orden fue impartida por el comandante 'Andrés', quien le dijo que Suárez había pagado por eliminar a un hombre que se había convertido en un potencial peligro para él y sus aspiraciones electorales ya que iba a denunciar irregularidades en las que estaría comprometido Suárez.<sup>62</sup>

Producto de la infiltración de las redes mafiosas, la criminalidad urbana en Colombia experimenta un agudo proceso de transformación. Así, dos hechos en apariencia contradictorios que vienen sucediendo en Barranquilla, como son la reducción de las tasas de delitos contra la propiedad y el incremento en los asesinatos, estarían advirtiendo un proceso de competencia por el monopolio criminal propio de las redes mafiosas. El aumento en las tasas de homicidio esconde el hecho que en la mayoría de los casos se trata de la eliminación de asesinos viciosos, ladrones de barrio, drogadictos e indigentes, que son eliminados como exigencia de un contexto libre de amenazas para la hegemonía del crimen según los intereses de las células mafiosas y de las necesidades de protección de sus clientes. Las bajas cifras de delitos, además de ser consecuencia del asesinato de los criminales de poca monta, se explican porque los grupos criminales generan tecnologías delincuenciales más eficientes y discretas, cometen muchos menos

---

<sup>61</sup> Adolfo León Atehortúa Cruz. (1995) El poder y la sangre (Las historias de Trujillo (Valle)). Cinep. Universidad Javeriana, Colombia. P-202.

<sup>62</sup> Revista Semana. JUDICIAL. *Tras un efecto dominó*. 2003 en: <http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=79983>

crímenes pero estos generan mayores ganancias. Y porque el terror que inspiran las redes mafiosas y la desconfianza en los cuerpos de seguridad, hace que los delitos no sean denunciados por las víctimas.

### **Regulación de actividades legales.**

La infiltración de actividades legales por parte de las redes mafiosas es un salto cualitativo indispensable para asentar su dominio sobre una sociedad. De lo contrario, los señores de la guerra y demás jefes no podrían disponer de nodos operativos ubicados en la periferia de la red, que se encarguen de funciones vitales como el lavado de activos, la inversión de las ganancias ilícitas, la ampliación de la influencia política, económica y social de la mafia, y la plataforma para ciertas conexiones nacionales e internacionales. El proceso de diversificación en lo lícito disminuye el riesgo de desmantelamiento de la red, en la medida que se trata de una estructura compartimentada.<sup>63</sup> Entre más distante esté ubicada una célula periférica de la red, menor es la posibilidad de destrucción del centro cuando la célula sea anulada. Más aún, entre más distante una célula, menos costoso y riesgoso resulta su reconstrucción si son altos los niveles de diversificación de la red mafiosa. Williams (2001) argumenta que el éxito de la estructura de redes criminales está en su capacidad de traspasar barreras geográficas, físicas y de orden legal:

Le permite a ellos surtir mercados donde los márgenes de rentabilidad son más grandes, operar desde y en países donde los riesgos son menores, complicar la labor de las agencias de justicia que tratan de combatirlos, cometer crímenes que desbordan las jurisdicciones y por consiguiente incrementan la complejidad y adaptan su comportamiento para contrarrestar o neutralizar las iniciativas de aplicación de la ley. Una importante frontera para cruzar, por supuesto, es entre el mundo criminal y el 'mundo de arriba'.<sup>64</sup>

Los niveles de infiltración de las redes mafiosas en las actividades legales se diferencian de acuerdo a la intensidad que se den ciertas situaciones de dominio de actividades lícitas en una ciudad. En el caso de negocios vulnerables a la *regulación* de tipo mafioso, los niveles están dados por la proporción de firmas que establecen contratos de protección con nodos de la red. Con respecto a la *posesión* de negocios por las propias estructuras mafiosas, las diferencias provienen de la capacidad que tienen las células operativas de afectar su mercado y de ganar influencia sobre las autoridades que lo regulan. A partir de estas dos categorías, la

---

<sup>63</sup> En el caso de las redes criminales compartimentada quiere decir que un conjunto de nodos y vínculos de una red luego de ser desconectados pueden ser reemplazados por estructuras similares, a manera de piezas o repuestos de un sistema más complejo.

<sup>64</sup> Phil Williams. *Transnational criminal networks*. Publicado en *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. John Arquilla, David Ronfeldt (editors) Rand Corporation. 2001. Pp. 78. Traducción del autor de: "It enables them to supply markets where the profit margins are largest, operate from and in countries where risks are the least, complicate the tasks of law enforcement agencies that are trying to combat them, commit crimes that cross jurisdictions and therefore increase complexity, and adapt their behavior to counter or neutralize law enforcement initiatives. One important boundary crossing, of course, is that between the criminal world and the 'upperworld'."

regulación y la posesión, se presentan combinaciones que determinan la forma de infiltrar las empresas legales.

En la primera categoría de negocios, es decir aquellos negocios en principio lícitos pero que requieren de un agente que se encargue de hacer cumplir los contratos y definir los derechos de propiedad, se encuentran los ya mencionados *Sanandresitos*, mercados de abastos y juegos de azar. Negocios que son vulnerables por las fallas del Estado para regular ciertas transacciones cuando aparecen agentes que compiten violenta y desorganizadamente por la captura de excedentes, al punto de volverlos inviables.

Dentro de esta categoría de negocios habría que agregar los tenderos y los transportadores. En Barranquilla, por ejemplo, desde hace una década los propietarios de las tiendas de barrio vienen siendo sistemáticamente extorsionados y asesinados. En un primer momento, los asesinatos de tenderos eran más frecuentes porque existían demasiados agentes extorsionando por protección y ejerciendo violencia contra quienes no cumplían los pagos. En ese entonces operaban en la ciudad células de las FARC, el ELN, delincuencia común y autodefensas. Sólo cuando las redes de las autodefensas consolidaron un dominio superior al de otras organizaciones<sup>65</sup> y la industria de protección a tenderos se estabilizó, los asesinatos se redujeron, aunque cada tanto se dan casos de eliminación de aquellos tenderos reacios a pagar la extorsión. Una de las principales tecnologías que disponen de los empresarios de un monopolio de protección es el terror que permite mantener e incrementar los flujos de pagos, por lo que es necesario cometer asesinatos periódicos cuando se reduce el efecto de persuasión sobre los tenderos 'protegidos'.

La apropiación del monopolio de la protección por redes mafiosas soportadas en el mando de señores de la guerra, es disputada con mayor intensidad en las grandes ciudades por la proliferación misma de células armadas capaces de competir por el espacio de un nodo y su vínculo a otras redes o incluso a una misma red. La sangrienta disputa entre el Bloque Nutibara contra el Bloque Metro tuvo su epicentro en el dominio de los negocios y las comunas de Medellín. Pero en un principio ambos bloques estuvieron vinculados a las AUC, y recibieron soporte de la red de Carlos Castaño.<sup>66</sup>

Una disputa del mismo tipo se desarrolla entre el Frente Capital, célula paramilitar vinculada al Bloque Centauro de Miguel Arroyave, y el Bloque República vinculado a la autodefensa de Martín Llanos, por el control de ciertos negocios y zonas de Bogotá. Según un reportaje de la revista Cambio:

---

<sup>65</sup> Referencias a la situación de los tenderos en Barranquilla se encuentran en revista Cambio *Infierno en Barranquilla* 5 al 12 de Julio de 2004, y revista Semana *Por la puerta de atrás* Julio de 2004.

<sup>66</sup> Un buen relato de esta guerra lo hace Doble Cero, comandante del Bloque Metro, que perdería la guerra con Don Berna, primero al mando del Bloque Cacique Nutibara, en un documento que estuvo disponible en la página Web: [www.bloquemetro.org](http://www.bloquemetro.org). (Actualmente deshabilitada por el asesinato de Doble Cero en Santa Marta). Obviamente en su relato el autor niega todo vínculo con el narcotráfico y la extorsión, lo que le resta credibilidad. Otras fuentes que pueden consultarse son los artículos de prensa: *Ex jefe paramilitar 'Doble cero' cree que a Carlos Castaño lo asesinó el narcotráfico*. El Tiempo. Abril 26 de 2004. *El primer paso*. Revista Semana. Noviembre de 2003. *Adiós a las armas*. Revista Cromos. Noviembre 19 de 2003. *Sicarios asesinaron a alias Doblezero*. El Colombiano. Mayo 30 de 2004.

Con Miguel Arroyave a la cabeza, el frente Capital de las Auc, el más importante en Bogotá, fue ganando terreno y desplazando a las milicias de las FARC no sólo en Ciudad Bolívar, sino en sectores comerciales de la ciudad. Sin embargo, las autoridades aseguran que su reinado fue corto porque se encontró con que Martín Llanos, al mando de una célula del Bloque República, también de las Auc, estaba dispuesto a ganarle de mano su predominio en la ciudad. Con cerca de 120 hombres, Llanos logró dominio en sectores como Suba, Los Mártires, Germania y Usme, mientras Arroyave, al frente de cerca de 400 hombres, se hizo a sectores como el barrio Restrepo, Kennedy, Puente Aranda, Las Ferias, 7 de Agosto, Bosa y Cazucá, entre otros. A punta de amenazas y extorsiones, uno y otro fueron sumando jugosos ingresos a cambio de dar seguridad a industriales, comerciantes y tenderos, ingresos que recaudaban a través de las llamadas oficinas de cobro en los Sanandresitos, Corabastos y el 7 de Agosto.<sup>67</sup>

El sólo control de los Sanandresitos, incluyendo los negocios lícitos e ilícitos, genera alrededor de 7.4 billones de pesos al año (2.500 millones de dólares al cambio de 2003).<sup>68</sup> Lo que da una idea del poder económico que está en disputa.

En las ciudades pequeñas el logro del monopolio de la coerción y la protección es menos intenso porque hay menos competidores que dispongan de recursos y tecnología criminal suficiente para hacerse a un espacio en las redes mafiosas. La entrada de las células soldados es directa e involucra solamente un corto período de tiempo en que son eliminados los delincuentes o especuladores que predan sobre los negocios legales. Miembros de la policía, políticos y jueces, que antiguamente exigían sobornos a los Sanandresitos o empresas de juegos de azar para obtener permisos de funcionamiento, son amenazados para que se unan a las redes como un nodo operativo o para que se mantengan al margen del negocio.

La segunda categoría de negocios marca el proceso de modernización capitalista de las redes mafiosas, debido a que implica la posesión de activos lícitos y la producción de rentabilidad en empresas honestas. A diferencia del establecimiento de monopolios por la fuerza de actividades que requieren de un agente regulador diferente al Estado, el propósito de estos negocios es el lavado de activos y la inversión de ganancias ilícitas en actividades legales que funcionan en mercados demasiado dinámicos para ser controlados por un solo competidor. La definición de mafiosos como 'empresarios de la protección' adquiere una connotación diferente. La violencia contra empresarios honestos que tradicionalmente han trabajado en sectores sin problemas de regulación de transacciones y de derechos de propiedad, incluso la violencia indiscriminada contra firmas vinculadas con otras redes mafiosas, resultaría difícil de tolerar para las autoridades. Las redes perderían gran parte de la ventaja de invisibilidad frente a la opinión pública, que entonces presionaría a las instituciones del Estado para que desmantelaran las organizaciones criminales. La lucha en este caso no es por el monopolio de la coerción y la protección, sino por el monopolio de: i) la invulnerabilidad frente a amenazas de intervención de la fuerza pública y ii) del

---

<sup>67</sup> Revista Cambio. Sección Nación. ¿Ciudad perdida? Abril 2004. En: <http://www.cambio.com.co/html/pais/articulos/2181/>

<sup>68</sup> Diario el Espectador. *Control de Sanandresito vale 7,4 billones*. Bogotá - Colombia 12 de octubre de 2003.

acceso a instancias del sector privado nacional y transnacional estratégicas para la rentabilidad de las redes.

El éxito de la legalización de las ganancias criminales depende de células operativas que tengan experiencia en empresas y economías lícitas. Las características de alta rotación de inventarios y dificultad para controlar la veracidad de las transacciones declaradas, hacen vulnerables a la infiltración a sectores como la finca raíz, la construcción, los casinos, las cajas de cambio, las comercializadoras, los servicios financieros, entre otros. La apertura del comercio valoriza también los nodos capaces de establecer vínculos con servicios legales y organizaciones criminales en las redes transnacionales. Las ciudades grandes ofrecen, en ese sentido, un mayor abanico de opciones de nodos periféricos que conviertan en dinero limpio las ganancias criminales y le abran un espacio en la legalidad económica a los señores de la guerra y los jefes de las redes. Mientras que las ciudades pequeñas, si bien poseen menores cantidades de activos, ofrecen oportunidades menos riesgosas de lavado por la susceptibilidad de las autoridades a ser intimidadas o sobornadas.

La función de las células encargadas de la violencia en este ámbito se torna más sutil. Las actividades de protección se revierten hacia la vigilancia de las posesiones de la red, a evitar actos de sabotaje, robos y crímenes por parte de competidores. La parte ofensiva se limita a asesinatos selectivos de miembros de otras redes, traidores o individuos de la sociedad que denuncien a la red. Adquieren especial importancia los contactos con las autoridades que previenen acciones de la fuerza pública que involucrarían las ganancias lícitas con su trasfondo ilegal, con todos los riesgos de expropiación.

La capacidad de infiltración de negocios legales varía mucho entre el tipo de ciudades. Se presentan casos de actividades legales infiltradas por redes mafiosas en grandes ciudades donde les es imposible aspirar a una participación mayoritaria sobre un sector del mercado, mientras que en ciudades de menor tamaño su monopolio es absoluto, tanto que podría clasificarse dentro de la categoría de negocios controlados por un monopolio violento. Las empresas constructoras en Medellín o Bogotá, por ejemplo, en muy pocas circunstancias tienen que pagar extorsiones para ejecutar contratos de obras civiles. En Barrancabermeja sería imposible adelantar una construcción sin antes haber negociado con los grupos de autodefensa que dominan la ciudad. La infiltración a niveles absolutos de un sector legal, en especial si el control del mercado es influenciado por la coerción, es entonces una señal que la clase mafiosa junto con las condiciones de la ciudad no son proclives a desarrollar economías modernas. Todo lo contrario, entre más pequeña e infiltrada por las redes más renuentes serán los agentes honestos de invertir en los proyectos empresariales de la ciudad.

Está claro que en ambos tipos de ciudades, las de alta y baja concentración de habitantes, las redes mafiosas infiltran actividades lícitas. La diferencia en los niveles de infiltración se expresan en la rentabilidad que se genera y en la capacidad de establecer un monopolio. En las grandes ciudades las ganancias que producen los negocios lícitos son mucho mayores que en las pequeñas, pero es mucho más difícil construir alguna clase de dominio monopólico. Sin embargo, es difícil predecir el tamaño mínimo que debe tener la economía de una ciudad para absorber los

capitales de las redes mafiosas y potenciar el crecimiento de un sector productivo eficiente, sin que dependan del consumo y la inversión *ficticia* de los grupos criminales. Aún en ciudades grandes y con sectores de industria y comercio relativamente desarrollados, la caída de la demanda que generan los capitales del narcotráfico es capaz de afectar la economía en su conjunto. Así lo puso de manifiesto la crisis de la ciudad de Cali luego del desmantelamiento del Cartel de los Rodríguez Orejuela:

La postración de la economía del Valle del Cauca vista a través de las crecientes tasas de desempleo y del nivel de actividad económica, tras la desactivación del cartel de Cali, pone de presente la vulnerabilidad de una economía regional, así ésta sea relativamente grande y moderna.<sup>69</sup>

### **Regulación de instituciones gubernamentales.**

El máximo nivel de infiltración de una red mafiosa en una ciudad se da cuando acceden al control de sus instituciones de gobierno. Las ganancias por el dominio de lo público trascienden lo económico y se enmarcan en bienes imprescindibles para la supervivencia de las redes como la impunidad, la inmunidad, la información, la seguridad y la influencia sobre las decisiones políticas. De acuerdo a Williams (2001):

Para las redes criminales, cruzar dominios estructurales es particularmente beneficioso cuando implica atravesar de un mundo a otro. Al cruzar de un submundo criminal a un ámbito de gobierno, negocios y finanzas, las redes criminales no sólo potencian su capacidad de identificar y explotar nuevas oportunidades criminales, sino también su capacidad de proteger las actividades y las oportunidades existentes. Las conexiones específicas que facilitan la entrada criminal en el mundo lícito se pueden entender como entradas o portales, mientras que las relaciones en los límites de la red criminal y del mundo del gobierno y/o de negocios lícitos pueden probar ser vitales para toda una serie de operaciones y actividades criminales.<sup>70</sup>

Pero en la medida que aumenta su importancia estratégica, más difícil es para las células de las redes acceder y mantener el control de una institución de gobierno. Las agencias del Estado en las ciudades colombianas están lejos de ser instituciones homogéneas, tampoco son estructuras que en la práctica estén configuradas jerárquicamente, donde las decisiones y los intereses de los mandos superiores son cumplidos a cabalidad, sin cuestionamientos y sin que medien los intereses de mandos inferiores y de otras instituciones. La Alcaldía, los Concejos, los tribunales de Justicia, la Fiscalía, el CTI, la Policía, el DAS y las Fuerzas Armadas,

<sup>69</sup> Ricardo Rocha García, (2000). Op. Cit, p-150.

<sup>70</sup> Williams (2001). Op. Cit. Pp. 79. Traducción del autor de: "For criminal networks, spanning structural holes is particularly beneficial when it also involves crossing from one domain into another. By crossing from the underworld into the worlds of government, business, and finance, criminal networks not only identify and exploit new criminal opportunities, but also enhance their capacity to protect existing activities and opportunities. The specific connections that facilitate criminal entry into the licit world can be understood as gateways or portals, while the relationships at the boundaries of the criminal network and the world of government and/or licit business can prove vital to a whole series of criminal operations and activities."



son instituciones donde los procesos para definir quién gobierna y cómo se gobierna responden a lógicas distintas e intereses de muchas fuentes. El alcalde y los concejales son escogidos por elección popular. Los jueces y los fiscales son funcionarios de carrera, mientras que los miembros del CTI y del DAS son nombrados desde el nivel central de gobierno por el Fiscal General y la Presidencia de la República respectivamente. Los procesos de selección de la Policía y las Fuerzas Armadas son más complejos. Dependen de la interacción del poder político de diversos actores que sobrepasan las decisiones internas de la institución. El Presidente y los Congresistas tienen en la práctica ascendencia sobre los ascensos de personal y su destinación a áreas geográficas y posiciones específicas. Infiltrar instituciones se trata entonces de un asunto bastante complejo para las redes mafiosas. Implica la negociación con diferentes instancias de los gobiernos nacionales y locales para asegurar la influencia sobre una institución, donde los acuerdos y los intercambios que se pactan entre ambas partes tampoco guardan un carácter único.

Lo que entrega y lo que recibe un funcionario por negociar con la mafia varía sustancialmente de acuerdo a las ciudades y las características de las instituciones. En ciudades grandes el intercambio puede ser entre un contrato o la 'vista gorda' ante un tipo específico de delito por una suma de dinero. Al tiempo que en una ciudad pequeña la misma suma de dinero alcanzaría para acceder al manejo de una cartera de la Alcaldía. Los términos de los acuerdos también son variables. En un lugar se puede exigir que las células soldados ejerzan la violencia de manera selectiva y discreta, mientras que existen ciudades en el país donde la presencia de miembros armados de las redes es descarada.

El proceso de infiltración de las instituciones de gobierno puede ocurrir durante dos instancias: antes que los candidatos sean elegidos para el cargo de gobierno o después que son elegidos. Cuando los funcionarios son infiltrados antes de su posesión y su elección depende en su mayor parte de los recursos y de la influencia de las redes, los términos del intercambio y de los acuerdos por lo general son favorables a las células mafiosas. La gobernabilidad de los funcionarios termina basándose en el apoyo de las redes. Un grupo de células operativas con el apoyo de los soldados y el dinero de la estructura de los señores de la guerra se convierte en el poder real tras el gobierno de una ciudad. Cuando la infiltración sucede después de su posesión los términos de las transacciones y los acuerdos son menos asimétricos. La negociación se basa en aspectos muy puntuales, en que determinados bienes o conductas de la red mafiosa se comprometen por otros bienes o conductas de los gobiernos de las instituciones públicas.

Para efectos del análisis de los niveles de infiltración de las redes mafiosas, se dividirán las instituciones de gobierno en tres tipos: políticas, judiciales y de seguridad.

Las instituciones políticas están constituidas por la rama ejecutiva y legislativa del Estado en las ciudades, es decir la Alcaldía y el Concejo. El acceso al poder en estas instituciones se decide mediante campañas electorales, que a su vez dependen de votos en conciencia y de votos mediados por mecanismos clientelistas. Los votos en conciencia, o 'votos de opinión' como se refieren a ellos en los medios de comunicación, representan la decisión de los habitantes de una ciudad por las

propuestas de gobierno de los candidatos sin que exista un incentivo particular tales como dinero o promesas de un cargo público. El hecho que estos votos sean en conciencia tampoco significa un mejor gobierno de por sí, más bien significa que existe un grueso de la población que ha alcanzado cierto grado de bienestar que no necesita de ganancias individuales para sacrificar los alcances de la opción de elegir colectivamente. Las aspiraciones colectivas por lo general son poco precisas y se refieren a temas comunes de la administración pública, del estilo de mejores vías, menos impuestos, más educación y de mayor calidad, salud para todos, alto crecimiento económico, intolerancia frente a la corrupción, etc. La publicidad en los medios masivos es el medio más rentable para convencer a la masa de votantes en conciencia que un candidato es el apropiado para representar los intereses colectivos, bien sea porque es más honesto, más educado, más sensible, o simplemente se identifica mejor con las aspiraciones de la comunidad.

Los votos por mediación clientelista, como se explicó previamente, son producto de un intercambio por ganancias individuales o de grupos específicos en una sociedad. La suma de estos votos individuales o de grupos comprometidos por un interés particular es parte definitiva de las elecciones en Colombia, aunque su importancia es variable según las características de las ciudades. Según la evidencia inicial, se puede afirmar que a mayor desarrollo y urbanización, mayor importancia adquieren los votos en conciencia y lo contrario para la votación clientelista.

Lo que han hecho las redes mafiosas para infiltrar los gobiernos de las ciudades es financiar las campañas de candidatos que se adhieren a la red como nodos operativos o de intercambio, bien sea para obtener votación en conciencia o clientelista. Las redes tradicionales de políticos clientelistas han sido suplantadas por actores soportados por los señores de la guerra, que a través de la intimidación, la financiación sin precedentes y, en ocasiones, el trabajo social en comunidades excluidas, entraron a dominar las elecciones en ciudades donde, con todos los defectos del sistema político clientelista, funcionaba un mínimo de institucionalidad democrática. El caso de Riohacha muestra la situación tan crítica para la gobernabilidad de las democracias locales y los costos económicos para el desarrollo social, que producen los niveles de infiltración cuando son máximos. El Alcalde, el Secretario de Hacienda y la asesora jurídica de la Alcaldía, y otros once funcionarios, fueron capturados por la Dijín y la Fiscalía. Otros cuatro funcionarios, entre ellos el Secretario de Salud, son prófugos de la justicia.<sup>71</sup> El motivo de las detenciones es la desviación de los recursos públicos del sistema de salud para financiar los grupos de autodefensas de 'Jorge 40': "Todos son acusados de

---

<sup>71</sup> El Tiempo, Sección Económica. *Funcionarios públicos de Riohacha habrían desviado recursos de la salud para las arcas paramilitares*. Septiembre 2 de 2004. Apartes del artículo: "Durante más de ocho horas un comando conjunto de cerca de 45 hombres de la Dijín y la Fiscalía recorrieron las calles de Riohacha (La Guajira) en busca de 15 personas. Tras allanar varias casas y edificios, hacia las 4 de la madrugada de ayer capturaron al primer hombre en la lista: se trataba del alcalde de la ciudad, Wilder Antonio Ríos Rojas, quien fue sacado de su residencia ubicada en el barrio 15 de mayo. De manera casi simultánea fue detenido su secretario de Hacienda, Walter Jesús Córdoba Camargo, y minutos después, Doris Esther Mejía Guerra, jefe de la oficina de Descentralización de Salud Municipal. Al final de la jornada fueron 11 los capturados, incluidos Nellys Fuenmayor López, asesora jurídica del alcalde, y dos asesores externos de la entidad. Cuatro funcionarios alcanzaron a huir y actualmente son prófugos de la justicia, entre ellos Hílder Mejía, secretario de Salud."

participar en el desvío de millonarios recursos del régimen subsidiado de Salud -la de los más pobres- hacia las arcas de los paramilitares, un dinero que a la postre, según la investigación, fue usado para adquirir armas y droga. [...] Según el expediente, el 'negocio' con esta y con otras ARS de la Costa Atlántica, viene siendo coordinado por Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge Cuarenta'."<sup>72</sup>

En la operación quedó claro que la célula central de la red mafiosa en la ciudad era manejada por un señor de la guerra. El director de la Dijín, Coronel Oscar Naranjo, afirmó en el diario El Heraldó:

"Una persona directamente subordinada a 'Jorge 40' en esa zona, conocida como alias 'La tía' en toda esa investigación, que es responsable de coordinar con un grupo de delincuentes la vinculación de funcionarios y Alcaldías en la Costa Norte de Colombia para pedir comisión y defraudar al Estado, y para celebrar contratos en forma indebida."<sup>73</sup>

De esa manera un sector poco asociado a las industrias criminales como las empresas encargadas de prestar servicios de salud, ha atraído el interés de miembros de las autodefensas por la sinergia entre oportunidades de invertir en corrupción y por el hecho de poseer la suficiente capacidad de cooptación violenta para regular la asignación de contratos públicos.<sup>74</sup> A mediados de 2004 la revista Semana relató las investigaciones realizadas a las Aseguradas del Régimen Subsidiado (ARS) en Barranquilla y municipios aledaños:

El presidente Álvaro Uribe prometió tomar medidas urgentes y drásticas e indignado dijo que cerraría las ARS a las que se les comprobaran irregularidades en el sistema de salud. [...] Después de esta advertencia presidencial se conformó un equipo integrado por analistas financieros, los mejores hombres de la Policía judicial y fiscales anticorrupción, que temporalmente se fueron a vivir a Barranquilla. Su misión fue seguirles el rastro a las finanzas de la salud en los 22 municipios del Atlántico y en su capital. Las primeras pruebas indican que habría nexos de los paramilitares con algunos alcaldes, secretarios de Salud y de Hacienda, gerentes de hospitales y hasta con dueños de droguerías.<sup>75</sup>

Al margen de las generosas comisiones que extraen las redes mafiosas por la concesión de contratos públicos a células encargadas de actividades legales, la infiltración de los gobiernos locales les otorga impunidad a las células delincuentes. En la revista Semana de junio 7 de 2004 se describe como opera la relación entre la clase política y la impunidad de criminales asociados a las autodefensas en Cúcuta:

Soto era escolta del alcalde Manuel Guillermo Mora y acababa de ser trasladado a la seguridad del entonces candidato Ramiro Suárez. Desde que estaba vinculado a la

---

<sup>72</sup> *Íbdm.*

<sup>73</sup> El Heraldó. Notas Generales. *Capturado Alcalde de Riohacha*. Barranquilla, Viernes 3 de Septiembre de 2004.

<sup>74</sup> En declaraciones a la prensa el Director de la Dijín, Oscar Naranjo, aseguró que en los últimos tres años los grupos armados irregulares han desviado más de 500.000 millones de pesos del sistema subsidiado de salud. Ver en el diario El Colombiano. *Desmantelan red que desvió 500.000 millones de la salud*. Colombia, viernes 3 de septiembre de 2004.

<sup>75</sup> Semana. Sección Nación. *Virus peligroso*. Julio 24, 2004.

alcaldía, según la investigación, Soto se había convertido en un hombre importante para los paramilitares. Por ejemplo, en julio de 2003 la Policía de Cúcuta inmovilizó en inmediaciones de Cenabastos, la central de alimentos de esa ciudad, un camión con comestibles y ropa de contrabando que iba hacia Puerto Santander, un reconocido sector de operación y base de los 'paras'. [...] los paramilitares le avisaron a Soto que la carga retenida pertenecía al 'Gato'. Entonces el jefe de seguridad contactó a los uniformados que hicieron la operación para que dejaran libre el automotor, como en efecto ocurrió. Este tipo de favores y sus relaciones convirtieron a Soto en un hombre clave no sólo para los paramilitares sino también para algunos políticos de Cúcuta que vieron en él un efectivo puente con las autodefensas. Especialmente cuando se aproximaban las elecciones locales de octubre y algunos creían que era importante contar con el respaldo de los 'paras'.<sup>76</sup>

En estos casos la relación con los funcionarios de las instituciones gubernamentales está tan marcada por el sometimiento a los intereses de las redes mafiosas, que el papel de los alcaldes deja de ser de una célula de intercambio y pasa a ser una célula operativa de la red. Las estructuras de redes fundadas en nodos y vínculos que relacionan la institucionalidad con las células más poderosas de las redes mafiosas sólo a través del intercambio de bienes o conductas específicas, sin que los responsables de las agencias cedan espacios de su gobernabilidad, únicamente son posibles en ciudades con suficiente población y modernización de la economía para sobrepasar la capacidad de infiltración de los señores de la guerra. Aún así, las ganancias de las redes mafiosas por un sólo intercambio con los gobiernos de las instituciones más importantes del país demuestra ser vital para la supervivencia, la rentabilidad y la expansión de las redes. Una prueba de la importancia de la infiltración de células de intercambio en la estructura de las redes de los señores de la guerra, la registró la ONG Human Rights Watch cuando analizó la situación de los funcionarios de la Unidad Nacional de Derechos Humanos desde la llegada de Luís Camilo Osorio al cargo del Fiscal General:

A las 72 horas de su llegada al cargo, Osorio había pedido las renuncias de dos experimentados funcionarios de alto nivel que se habían ocupado de algunos de los casos de derechos humanos más importantes y complejos procesados por la institución. [...] Durante los 15 meses que Osorio ha sido Fiscal General, al menos nueve fiscales e investigadores encargados de casos de derechos humanos han sido despedidos y otros 15 han sido forzados a renunciar o se han sentido obligados a hacerlo por la presión. La mayoría de ellos trabajaban en la Unidad Nacional de Derechos Humanos. En diciembre de 2001, por ejemplo, Osorio despidió a cuatro funcionarios superiores del CTI: Fernando Niño, Jefe de la Oficina de Información y Análisis del CTI; Carmen Maritza González, Jefe de la División de Investigación del CTI; Carlos Valdés, Jefe de la División de Criminología; y Martha Janeth Pedroza, asesora del Director Nacional del CTI. Estos funcionarios -todos ellos descritos como profesionales excepcionales por otros fiscales, el ex fiscal general y gerentes del CTI- fueron despedidos poco después de participar en la captura de un destacado asesino paramilitar y familiar del líder paramilitar Carlos Castaño.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Semana. Sección Judicial. *El polvorín*. Junio 7 de 2004.

<sup>77</sup> *Un giro erróneo. La actuación de la Fiscalía General de la Nación*. New York: Human Rights Watch, Noviembre de 2002. En: [http://www.hrw.org/spanish/informes/2002/giro\\_erroneo1.html](http://www.hrw.org/spanish/informes/2002/giro_erroneo1.html).

La infiltración de las instituciones de justicia tiene lugar en dos contextos muy diferentes: las oficinas centrales y las agencias regionales. Dado que en Colombia el sistema judicial está centralizado, el nivel más complicado de infiltrar ocurre en el contexto de las grandes ciudades. Las decisiones más trascendentales, las investigaciones más delicadas y los nombramientos regionales se definen en su última instancia en las oficinas de Bogotá del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía. Por el poder que manejan sobre el resto del sistema judicial de la nación, el establecimiento de algún tipo de intercambio entre sus células periféricas y la dirección de las instituciones de justicia constituyen un activo valioso para los señores de la guerra. Este nivel de influencia no sólo reporta ganancias por la impunidad que se garantiza a la estructura de su propia red, sino que también genera comisiones por negociar la intermediación de protección judicial a células de otras redes que no poseen contacto directo con las oficinas centrales.

En las seccionales de ciudades medianas y pequeñas se falla sobre casos con menor trascendencia en los medios de comunicación, pero que también son valiosos para las redes mafiosas que operan en el lugar. El soborno y la intimidación de los funcionarios regionales de la justicia es un paso obligado para evitar que los procesos criminales traspasen la barrera de lo local y llamen la atención de las autoridades nacionales, lo que elevaría los costos de un posible arreglo e incrementaría los riesgos de persecución. Si bien es cierto que en la práctica luego de posesionados los directores de las oficinas regionales, los nombramientos se definen a partir del juego del poder local y de las restricciones de la carrera profesional de jueces y fiscales, los funcionarios de estas oficinas han resultado ser fáciles de cooptar ante la fuerza abrumadora del dinero y del aparato de violencia de las redes mafiosas. El caso más escandaloso de infiltración de las autodefensas en las instituciones de justicia de una ciudad sucedió en Cúcuta, donde la Fiscal seccional alcanzó a huir fuera del país luego que una subalterna involucrada sentimentalmente con el jefe de las AUC en la ciudad fuera detenida y denunciara la gravedad de los nexos con los paramilitares.<sup>78</sup>

Bajo niveles de dominio tan contundentes, el cobro de comisiones por la mediación ante el sistema judicial para garantizar la impunidad de los nodos de las redes y otros individuos o agrupaciones, se repite a una escala más reducida y con menos interferencia de los organismos de control del Estado.

La infiltración de las instituciones militares tiene antecedentes históricos que pesan en la naturaleza de la relación entre Policía y Fuerzas Armadas con las redes mafiosas. En 1965 la destrucción de los grupos de bandoleros y el intento de exterminio de las primeras guerrillas generó roces entre el ejército y la clase política local cuando los militares desarrollaron campañas cívicas para ganarse a la población (Ramsey 2000). Los políticos regionales manifestaron su celo a la intromisión del ejército en sus asuntos. Después de arduos debates en el Congreso de la República se pactó tácitamente que las fuerzas de seguridad del Estado tendrían autonomía para dedicarse al combate contra las guerrillas de izquierda,

---

<sup>78</sup> Ver Revista Semana. Sección Nación. *La fuga de 'Batichica'*. Con el subtítulo: "Esta es la extraña historia de la fiscal que, luego de una carrera meteórica, terminó fugitiva tras ser acusada por una infiltración de paramilitares en Cúcuta". Colombia, domingo 23 de mayo de 2004.

pero debían estar apartados de los asuntos políticos.<sup>79</sup> Dávila (1998) y Richani (2003) han definido la actitud de las Fuerzas Armadas en el Estado colombiano como de autonomía subordinada dentro de la doctrina de seguridad nacional de la guerra fría.<sup>80</sup> Un par de décadas después, la autonomía se traduciría en alianzas con terratenientes y narcotraficantes cuando los grupos guerrilleros comenzaron a secuestrar y extorsionar a las élites locales.

Dos características de estas alianzas marcarían la forma funcional del intercambio entre miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas con las células mafiosas: i) los vínculos entre autodefensas y cuerpos de seguridad no siguen una estructura jerárquica organizada (Resa 2001), dependen de los pagos que los jefes de las autodefensas realicen a oficiales y suboficiales y de los límites del poder y la jurisdicción geográfica que éstos tengan asignado en un momento dado,<sup>81</sup> y ii) los términos de separación entre lo político y lo militar se mantienen a escala local. La Policía y las Fuerzas Armadas se encargan de combatir a la guerrilla mientras que los ejércitos de los señores de la guerra se encargan de controlar el orden político local según su conveniencia,<sup>82</sup> lo que en las ciudades implica la labor de las células soldados de guardar la integridad de la estructura de nodos y vínculos, eliminar a los enemigos y amenazar y proteger a los clientes de la red.

La parte del intercambio que reciben las redes mafiosas de las fuerzas de seguridad del Estado se centra en la renuencia a perseguir las actividades ilegales que cometen sus células y en apoyar los esfuerzos por eliminar a competidores y enemigos de la red. A cambio, la Policía y el Ejército reciben cuantiosos sobornos y la oportunidad de cada cierto tiempo de mostrar resultados a partir de capturas y

---

<sup>79</sup> Russel W. Ramsey, (2000) *Op. Cit.* Pp- 293.

<sup>80</sup> Andrés Dávila, (1998). *El juego del poder. Historia, armas y votos*, Uniandes-CEREC, Bogotá. Y Nazih Richani (2003). *Sistemas de guerra*. Editorial Planeta, Bogotá. Dávila argumenta que: “El rasgo específico del caso colombiano estriba en un particular arreglo entre civiles y militares. A partir de 1958 se desarrollaron esquemas cambiantes de relaciones entre estas dos instancias, los cuales evitaban los extremos de la subordinación propia de un régimen democrático pleno, pero también la autonomía que llevó a muchos de sus similares en el continente a la toma del poder. En Colombia se ha vivido, especialmente desde 1958, una paradójica convivencia de subordinación y autonomía, alimentada y a la vez sobre efectos específicos sobre los procesos de profesionalización, politización y fortalecimiento debilitamiento institucional”. Pp-65.

<sup>81</sup> Carlos Resa. *El Estado como maximizador de rentas del crimen organizado: el caso del tráfico de drogas en México*. Instituto Internacional de Gobernabilidad. Documento no. 88. 2001. Resa afirma que la relación de los narcotraficantes con el poder estatal en Colombia se ha dado de un modo dispar, donde se establecen “patrones de interrelación que han ido desde la cooperación corruptora hasta el conflicto exacerbado” (Pp- 7). La naturaleza caótica de estas alianzas ha adquirido expresiones escandalosas en los medios de comunicación, como cuando un capitán y un teniente de la policía se agarraron a puño limpio en medio de la calle por la repartición de un soborno producto de la devolución de dos toneladas y media de cocaína en Barranquilla.

<sup>82</sup> Restrepo y Spagat (2004) y González et al. (2002) corroboraron empíricamente que los grupos de autodefensa en pocas ocasiones entablan combates con frentes guerrilleros y su accionar se enfoca más bien a la violación sistemática de los derechos humanos. Jorge Restrepo y Michael Spagat. *The Colombian Conflict: Uribe's First 17 Months*. Abril de 2004. Seminario CEDE. Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vázquez. *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. (2002), Bogotá, CINEP.

decomisos pactados con antelación.<sup>83</sup> También reciben pagos en influencia sobre mandos superiores de la institución. Así, un oficial que haya prestado servicios valiosos para la red en una ciudad, como contraprestación un señor de la guerra puede ayudarlo a tramitar un ascenso en su carrera con los contactos que posea en el alto mando de un cuerpo de seguridad.

La complejidad de la infiltración de los cuerpos de seguridad está en el entramado de poderes fuera y dentro de las instituciones militares, que en últimas definen quién ocupa los cargos y qué operaciones antidelinquenciales se llevan a cabo. El proceso de infiltración guarda ciertas similitudes con la forma de establecer vínculos con las instituciones de justicia. Existe un nivel centralizado con gran ascendencia sobre todas las ramas de la institución, aunque en la práctica la voluntad y la capacidad de los mandos locales determinan que los resultados operativos no afecten los intereses de las redes, ni trasciendan más allá de la atención regional.

Entre más población y tamaño tenga una ciudad, mayor es la presencia de los diferentes cuerpos de seguridad. Y en la medida que se necesite infiltrar más miembros de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, más costoso y difícil resulta establecer vínculos para el intercambio o la apropiación de células en las instituciones públicas de seguridad. Bogotá constituye la estructura más compleja de controlar, porque además de los comandos y brigadas de la ciudad hacen presencia los comandos centrales de las fuerzas, el Ministerio de Defensa y los representantes de las fuerzas políticas de la nación, todos con alta capacidad de incidir en lo que respecta a las decisiones en seguridad.

En las otras ciudades grandes del país la infiltración es menos compleja, pero igual está dada en términos de intercambio y no de control absoluto. Los Comandos de Policía y las Divisiones del Ejército no basan su autoridad local en los contactos con las redes mafiosas. Esto no quiere decir que no sucedan alianzas estrechas entre miembros de las fuerzas de seguridad con las autodefensas. El caso de las más de dos toneladas y media de cocaína que devolvió la policía en Barranquilla a miembros de las autodefensas del Bloque Norte y narcotraficantes del Cartel del Norte del valle, demostró que en ocasiones oficiales de la institución sirven de asesinos a sueldo de individuos que amenazan a las redes. El diario *El Tiempo* publicó un artículo con el informe de medicina legal respecto a la identificación de las balas usadas en el asesinato de Guillermo León, uno de los informantes que denunció la ubicación de la droga, en el se: “establece que una vez realizados los estudios correspondientes a las tres vainillas que cegaron la vida del informante da cuenta que fueron disparadas con la pistola bajo el número 97315242. Esa arma fue entregada como dotación al teniente Villamil González, quien para septiembre del 2002 laboraba en la Policía Judicial Sijín, en Barranquilla, tal y como lo certificó el Comando de Policía Atlántico.”<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Un caso que ejemplifica como operaciones exitosas de las fuerzas de seguridad está en la revista *Semana*. Sección Judicial. *A sangre fría*. “La Fiscalía investiga a varios militares acusados de asesinar a unos ganaderos para robarlos y aparentar un golpe a las autodefensas.” Domingo 1 de agosto de 2004.

<sup>84</sup> *El Tiempo*. Sección Justicia. *Bala de arma de teniente de la Policía estaba en cadáver de informante de la DEA*. Julio 27 de 2004.

En las ciudades medianas y pequeñas, las colusiones con las fuerzas de seguridad son más explícitas. La menor presencia de Policía y Ejército reduce los costos y la influencia política necesaria para acomodar su desempeño a los intereses de las redes. Incluso la debilidad de la sociedad civil y la prensa local puede llevar a que células soldados de la mafia operen a la vista pública en ciertos sectores de las ciudades. Lo que es reportado constantemente por organismos internacionales de derechos humanos y de políticas de asistencia. Durante una visita a Barrancabermeja funcionarios del Centro de Política Internacional de Estados Unidos, revelaron haber visto miembros de las autodefensas patrullando las calles sin que la Policía hiciera nada:

La presencia, aunque esporádica, de la Policía en los barrios “calientes” no ha sido ningún obstáculo para los paramilitares. El Presidente de CIP, Robert White, y yo vimos a muchos de ellos operando abiertamente en los barrios del este durante un recorrido organizado por la Organización Femenina Popular. Aunque al ver nuestro bus, rápidamente se retiraban los brazaletes con la sigla AUC, cualquier gringo desprevenido los identifica fácilmente con sus camisas polo, slacks y dos teléfonos celulares a la cintura parados en las esquinas de las calles, donde las viviendas están hechas de retazos de madera y zinc corrugado. Los jóvenes en motoneta y bicicleta que nos seguían – sobre todo el individuo que no nos quitaba la mirada mientras daba vueltas y vueltas alrededor del bus – eran inconfundibles.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Adam Isacson. “Los Nuevos Dueños de Barranca”. Reporte del viaje de CIP a Barrancabermeja, Colombia, 6-8 de marzo del 2001. Center for International Policy. Junio del 2001. Pp- 6.



### III. ¿QUÉ EXPLICA LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DE LAS REDES MAFIOSAS?

No existe una causa única que explique hasta donde puede infiltrarse una red mafiosa en una ciudad. Es la combinación de una multitud de factores lo que determina el nivel de infiltración urbana que las células mafiosas alcanzan en la industria criminal, las actividades legales y las instituciones de gobierno. Incluso, factores culturales como la transmisión generacional de conocimientos y hábitos delincuenciales de ciertas comunidades o factores humanos como la aparición de una figura carismática que lidere la reivindicación de grupos excluidos, pueden acelerar el proceso de infiltración mafiosa.

Pero ante todo, la aparición de las redes mafiosas en las ciudades es la consecuencia de un fenómeno constante de la historia de Colombia que se agudizó en las últimas dos décadas: la debilidad del Estado central. La migración a las ciudades, la terciarización de la economía y la pacificación de la competencia por el poder político entre el partido liberal y conservador, que trajeron los acuerdos del Frente Nacional, parecía que iban a consolidar la construcción de un Estado central más fuerte, urbanizado y moderno. Tanto así que Gouëset (1998) encontró en el período de fortalecimiento del Estado durante el frente Nacional una de las razones por la que Bogotá finalmente se convirtió en la ciudad que lleva la primacía de lo urbano en Colombia:

La debilidad histórica del Estado va a la par con la importancia de las fuerzas anticentradas existentes en el país, que se han opuesto a la vez a las prerrogativas del gobierno central y al centralismo de la capital colombiana, tanto en la esfera política como en el plano económico. Esta resistencia emana principalmente de las élites regionales (económicas y políticas), a las que a veces se califica de “oligarquías regionales”; [...] Esta situación no deja de tener consecuencias en la concentración urbana en Colombia. Y es que precisamente la debilidad del Estado es uno de los principales factores explicativos de la ausencia de la primacía de Bogotá, al menos hasta mediados de siglo, de la misma manera que su fortalecimiento posterior ha contribuido grandemente a la evolución primacial que observamos hoy.<sup>86</sup>

Sin embargo, la tendencia de la historia tropezó con la revolución en la sociedad que trajo el narcotráfico. No sólo cambiaron las élites rurales y apareció una nueva clase de empresarios de lo ilícito capaces de desafiar los modestos alcances del país en la construcción de un estado de derecho moderno, sino que los nuevos grupos sociales contaron con el poder suficiente para imponer sus condiciones en las sucesivas negociaciones políticas que configurarían el diseño institucional del Estado en la Asamblea Constituyente de 1991, y que culminaron con el triunfo de la abolición de la extradición.

Más grave aun, la historia seguiría su curso violento y los narcotraficantes como figura hegemónica en el mundo criminal serían superados por los ejércitos paramilitares que ellos mismos ayudaron a crear. Los empresarios de lo ilícito y las élites rurales continuaron su evolución hasta transformarse en todo un fenómeno

---

<sup>86</sup> Vicent Gouëset, (1998) *Bogotá, Nacimiento de una Metrópoli*. Tercer Mundo Editores., Bogota, Pp. 103.

masivo de *señores de la guerra*. Si desde principios de los ochenta hasta 1996, año del desmantelamiento del Cartel de Cali, fue considerada la época dorada de los grandes narcotraficantes en Colombia, desde 1996 en adelante el papel protagónico lo adquirirían los ejércitos de los señores de la guerra, ya no sólo en el control sobre el tráfico de drogas, sino en la proyección que ha tenido el narcotráfico en la disputa por el poder político del país.

Las élites urbanas, con una visión moderna de la sociedad y concientes de la necesidad de construir una verdadera democracia para el desarrollo del capitalismo, contarían desde 1996, año en que los narcotraficantes dejarían de mediar como un tercero en la disputa entre la guerrilla y los paramilitares y serían absorbidos por la mecánica del conflicto, con un enemigo formidable para su proyecto de Estado. Los señores de la guerra luego de apropiarse del Estado local, han construido poderosas redes de influencia en los espacios de la nación donde se definen las políticas del gobierno central. Desde el caudal electoral de sus regiones los jefes de los ejércitos de las autodefensas empezaron a decidir qué senadores y representantes ocupaban los cargos de la rama legislativa del poder. Con su elección garantizaban que la estructura política que define los equilibrios de poder entre el Estado central y su contraparte local, guardara la inmunidad indispensable para mantener la rentabilidad y la viabilidad del narcotráfico y demás economías extractivas en lo rural. La famosa entrevista de Mancuso en que se ufana de controlar el 35% del Congreso, junto con la burocracia en los altos cargos nacionales que es ocupada por funcionarios procedentes de regiones de reconocido dominio de las autodefensas, despejó cualquier duda sobre la existencia de tales redes de influencia.

Así, la tendencia del Frente Nacional hacia un Estado con capacidad de imponer su hegemonía sobre las fuerzas regionales se revirtió por la debilidad del nivel central. La estructura actual del poder político en Colombia está fuertemente influenciada por asociaciones fragmentadas y verticales de élites rurales que gozan de una lealtad instrumental de la población producto del terror, que imponen su autonomía sobre el Estado local y que utilizan su influencia sobre el Estado central para aliarse y competir por la distribución del poder político y económico del país. Por lo tanto, el paso hacia las ciudades a través de las redes mafiosas constituye un elemento decisivo en la futura configuración del Estado colombiano, que consolida la estructura social desplegada por los señores de la guerra en un espacio que por ser la vanguardia de la modernización se pensaba estaba vedado a agentes reguladores fuera de las reglas de la democracia.

Al margen de la histórica precariedad del Estado central existen tres factores que vale la pena analizar como causas de la infiltración urbana de las redes mafiosas: el grado de modernización de las ciudades, la pobreza relativa de la clase política y las transformaciones en la sociedad que trajo la globalización.

### **El grado de modernización económica y el tamaño de la población con acceso a los servicios del Estado.**

La concentración de la población en núcleos urbanos guarda toda una racionalidad económica. La aglomeración de factores disminuye los costos de producción y genera un espectro de consumidores más variado y con mayor poder adquisitivo. Lo

que a su vez atrae a mano de obra de las áreas semiurbanas y rurales en busca de mejores oportunidades laborales, bienestar social y de estilos de vidas más sofisticados. El proceso de urbanización en Colombia,<sup>87</sup> por consiguiente, ha sido tanto consecuencia de la expulsión violenta de habitantes del campo como una consecuencia normal de la evolución demográfica del país.

De la mano de la urbanización, los sectores secundario y terciario han incrementado su participación en el conjunto de la economía moldeando la naturaleza productiva de la sociedad. Las oportunidades para el comercio, los servicios y la industria, por la mayor demanda de individuos que han aumentado y diversificado su consumo, propician la creación de nuevas firmas que requieren de un agente que regule los contratos y haga valer los derechos de propiedad. Su dinámica de las actividades productivas y de las transacciones comerciales es contraria al orden impuesto por un agente regulador de corte mafioso, que desincentive la inversión y el acceso de la competencia,<sup>88</sup> sino que requieren de instituciones modernas e impersonales que garanticen la eficiencia del mercado en el diseño y la aplicación de las reglas del juego.

Las reformas en el funcionamiento del Estado de la constitución de 1991 pretendían, entre otros tantos propósitos, desarrollar la eficiencia del sistema a través de la ruptura con la tradición de capitalismo político y de mediación clientelista del país. La apertura, la descentralización, las privatizaciones y la ampliación de la participación a grupos con poco caudal de votación, en teoría estaban dirigidas a modernizar la economía y la política, para que se convirtieran en sistemas competitivos, impersonales y sin privilegios de grupos. En la práctica las aspiraciones de las reformas no cuajaron porque gran parte de las actividades legales, incluyendo las formales y las informales, fueron infiltradas por las ilegales (Revéiz 1997):

Después de la apertura y de la Constitución de 1991 prevaleció la contratación económica y política *ad hoc* en la ilegalidad. La apertura eliminó las rentas-privilegios de los gremios coaligados con el Estado. Incentivó que se hicieran coaliciones entre los grupos ilegales (narcotraficantes) con la clase política y la burocracia del Estado. Muchos empresarios comenzaron a maximizar sus utilidades en la economía cooptada e ilegal.<sup>89</sup>

Sin embargo, en las ciudades donde existía un volumen mínimo de actividades legales la infiltración de lo ilícito no alcanzó a traspasar la barrera de lo delincuencial. Al crecer las ciudades y según se insertaron en el ritmo de los cambios culturales de las sociedades globalizadas, donde son inherentes principios como el monopolio de la violencia por el Estado, la libre competencia y la igualdad ante la ley, menos tolerantes se tornaron los individuos a aceptar abusos de poder, bien fueran políticos o económicos. Por esa razón, los espacios proclives a una regulación mafiosa,

---

<sup>87</sup> En menos de un siglo la relación de la población urbana sobre la población rural en Colombia se invirtió de 3:7 a 7:3.

<sup>88</sup> Los agentes mafiosos tienden a maximizar las rentas que extraen por regular las transacciones, elevando los costos y la ineficiencia de la economía. Sólo cuando las transacciones tienen determinadas características de ilegalidad o informalidad, la regulación del estilo mafioso es rentable para los actores productivos.

<sup>89</sup> Revéiz. Op. Cit. Pp- 72.

donde fructifican las relaciones de clientelismo y la producción de rentas a través del capitalismo político, se redujeron en las ciudades de gran tamaño y con economías donde había mayor participación del sector secundario y terciario.

Aún así, y como ya se ha explicado, existen transacciones y lugares susceptibles a desarrollar redes de protección mafiosas a pesar que las ciudades continúen con éxito su proceso de crecimiento y modernización. Los *Sanandresitos*, los juegos de azar, los mercados de abastos y los vecindarios de población marginada, encuentran en las redes mafiosas agentes reguladores alternativos a las instituciones del Estado. En ese sentido, es importante considerar no sólo las características de riqueza y modernización de las ciudades, sino también la presencia de oportunidades de negocios proclives al control violento de particulares y de núcleos de población excluida de los servicios del Estado, sobre todo de los servicios de seguridad y justicia, como causas que explican la capacidad de infiltración de las redes.

### **La debilidad de la clase política.**

Un factor decisivo del triunfo de los políticos en las elecciones de una ciudad es la cantidad de dinero disponible para financiar sus campañas, lo que incluye tanto la publicidad para persuadir a los votantes en conciencia como los recursos necesarios para ganar las lealtades de las clientelas. Las redes mafiosas encuentran en las campañas electorales una oportunidad única de infiltrar los gobiernos de las ciudades. Disponen de cantidades de dinero suficientes para financiar a candidatos a cualquier posición. Y en contextos donde la fuerza pública no es capaz de proteger a los otros candidatos, hacen uso de amenazas para que desistan de participar en las elecciones.

Cuando la clase política no es lo suficientemente fuerte en recursos económicos y en legitimidad para tener ascendencia sobre la sociedad, sin que el apoyo financiero y la intimidación por las redes mafiosas desequilibre los resultados a favor de un candidato, la ciudad es vulnerable a que sus gobiernos sean controlados desde los santuarios rurales de los señores de la guerra. Pero la fortaleza de los políticos no depende solamente en sus habilidades para conseguir recursos o su liderazgo, el contexto de las ciudades ofrece los insumos que determinan el balance de poder entre candidatos infiltrados por las redes y los no infiltrados. Las características de las ciudades pequeñas favorecen la efectividad de las células de las redes mafiosas que se encargan de infiltrar las instituciones de gobierno. En las ciudades más grandes la relación de fuerzas se invierte.

La razón de la debilidad de la clase política tradicional frente a las redes mafiosas en las ciudades pequeñas proviene de las diferencias entre las economías de escala de los aparatos económicos, políticos y armados que los soportan. Los señores de la guerra, por su capacidad de acumular recursos en regiones aisladas y levantar estructuras mafiosas a través de redes, tienen una participación en el poder político opuesta al grado de modernización de las ciudades. En los municipios y las pequeñas ciudades pueden ejercer una cantidad abrumadora de influencia, la vida económica y las oportunidades de movilidad social dependen en gran parte de los recursos del tráfico de drogas y del orden político que ellos generan. Mientras que

en las grandes concentraciones de población la influencia de los señores de la guerra se apacigua, y el Estado democrático se torna más poderoso porque el entramado de la sociedad cuenta con mayores recursos provenientes de actividades lícitas y cuerpos de seguridad imparciales. Es decir, a medida que se reduce el tamaño de las ciudades la economía y la fuerza pública también disminuye, hasta el punto que los recursos que pueden extraer los políticos profesionales del sector productivo local y/o de la corrupción, así como la protección disponible para adelantar campañas, no son competencia para la fuerza de infiltración de las redes mafiosas.

El desequilibrio de fuerzas entre el poder de las autodefensas y la clase política tradicional para afrontar elecciones, se ha reflejado con mayor intensidad en el dominio absoluto que han hecho las redes mafiosas de las alcaldías y concejos en las ciudades pequeñas del país. Según se tornan más pobladas y modernas las ciudades, el respaldo en recursos líquidos y logísticos que proveen las redes mafiosas no es suficiente para garantizar el triunfo en las contiendas electorales. Adicionalmente, aún cuando la correlación de fuerzas desde el punto de vista del dinero favorezca por mucho a los candidatos financiados por los señores de la guerra, su potencial de victoria electoral tropieza con dos desventajas para alcanzar niveles de infiltración que correspondan a la riqueza disponible. En primer lugar, el control de clientelas en las grandes ciudades es menos personalista y por lo tanto es dinámico y susceptible a cambios de patronos. Desde antes de las reformas de 1991 el país experimentaba un proceso de fraccionamiento de la votación para acceder a puestos de elección popular (Gutiérrez 2003), que se explica en las sucesivas reformas que buscaban ampliar la participación democrática restringida a los dos partidos tradicionales durante el Frente Nacional (1958 – 1974):

El aumento de la fragmentación precede a la Constitución de 1991; los políticos tradicionales en la mayoría de los casos no se han beneficiado, y de hecho podrían haber perdido con ella; los pequeños grupos en los que se ha dispersado el Partido Liberal colombiano no son producto de las solidaridades clientelistas, sino de su relajación.<sup>90</sup>

La lógica de las reformas le imprimió más dinamismo al mercado de las clientelas electorales. Cualquier político que lograba construir un caudal mínimo de votos los negociaba con los candidatos a corporaciones del Estado que no compitiera con sus aspiraciones, donde las alianzas se pactaban de acuerdo a recursos de contado o a la promesa de acceso a burocracia e influencia en las decisiones de gobierno. Las redes mafiosas cuentan con ventaja en la oferta de recursos, pero a los políticos con proyección no les conviene los acuerdos con la mafia porque en muchos casos significa el estancamiento en un nodo subordinado de la red. Las redes políticas tradicionales se adhieren a una red mafiosa sólo cuando sus opciones por fuera de la alianza son inviables, bien sea porque el contexto socioeconómico no permite competir ante candidatos financiados por los

---

<sup>90</sup> Francisco Gutiérrez Sanín. *Fragmentación electoral y política tradicional en Colombia – piezas para un rompecabezas en muchas dimensiones*. Programa de Estados en Crisis. Documentos de Trabajo # 24. Marzo de 2003. Pp- 4.

señores de la guerra o porque las fuerzas de seguridad de la ciudad no ofrecen garantías mínimas frente a células violentas de las redes. Cuando las relaciones de clientela son más dependientes de los canales institucionales –y por lo tanto menos arbitraria es la asignación de los servicios sociales del estado–, y existe un cuerpo de Policía capaz de proteger a los miembros de la clase política, el mercado de las alianzas para las elecciones es más competido. Las clientelas pueden romper el monopolio con su patrono y buscar otro que ofrezca mejores precios en la relación de intercambio. Por lo que no es conveniente para un político exitoso subordinarse al dominio de una red mafiosa, donde perdería toda su independencia para ascender en la carrera política de una gran ciudad.

En segundo lugar, al haber una masa crítica de opinión pública la intolerancia a acuerdos con actores ilegales deja sin ninguna opción a candidatos cuya financiación por dineros de la mafia trascienda a los medios de comunicación o que durante su mandato realicen demasiadas concesiones a la clase delincuencia, por lo que los políticos no están interesados en utilizar todos los recursos de la mafia potencialmente disponibles para ganar las elecciones, ni los señores de la guerra están dispuestos a ofrecer dinero por acuerdos que luego serían imposibles de cumplir. La naturaleza de eventuales intercambios se limita entonces a conductas o transacciones muy puntuales, que constituyen niveles de baja infiltración.

Con todo y la crisis de legitimidad política que atraviesa Colombia, existen espacios en la sociedad donde las elecciones responden a una cultura al margen de la mediación clientelista, basada en los principios de las democracias modernas. En estos espacios, ubicados en las grandes ciudades, el potencial de infiltración de las redes mafiosas es mínimo porque:

Quando las relaciones patrono cliente son sólo un apéndice de modelos jerárquicos o universalistas, son inestables y no legitimadas, y los elementos de solidaridad, reciprocidad u obligaciones interpersonales son mucho más débiles que en las sociedades clientelistas. Pero, más importante aun, esas relaciones son percibidas por la gente, por aquellos dentro y fuera de las relaciones, como no legítimas y contrarias a las premisas generales de estas sociedades. Dichas relaciones están más segmentadas que en las sociedades clientelistas y los recursos que ellas controlan no afectan la posición predominante del centro.<sup>91</sup>

En suma, la debilidad de la clase política de una ciudad no puede expresarse solamente en los dineros disponibles para financiar las campañas a la Alcaldía o al Concejo. Es importante agregar el elemento de habilidades para gestionar protección de la fuerza pública, y de liderar procesos de modernización de la sociedad que superen estructuras de poder fundadas en relaciones clientelistas.

## **La Globalización.**

Los actuales problemas con las mafias y los señores de la guerra en Colombia además de tener sus raíces en las estructuras de poder y en etapas violentas

---

<sup>91</sup> Jesús Duarte, (2004). *Educación pública y clientelismo en Colombia*. Editorial Universidad de Antioquia. Pp- 16.

propias de su historia, presentan un interesante referente en las crisis de seguridad que se suceden en ciertos Estados desde el inicio de la globalización. La apropiación de las funciones de coerción y protección por hombres fuertes en lo local, la extracción criminal de rentas a través del comercio global de materias primas y drogas, y el uso de la violencia contra la población civil como medio de guerra, no son fenómenos exclusivos de Colombia. La fase de la violencia que experimenta el país, tiene estructuras similares -aunque no iguales- a la irrupción de milicias, señores de la guerra y crimen organizado, comunes en África Subsahariana y Europa del Este. Los mismos factores internacionales que inciden en la violencia interna de muchos países, pero ajustados a los antecedentes históricos de Colombia, han afectado la naturaleza de su conflicto.

Leander (2002) sostiene que la apertura de los sistemas políticos y de la territorialidad del Estado-Nación a las instituciones y al comercio global, en sociedades donde no estaba consolidado un grado mínimo de desarrollo capitalista y mecanismos no violentos de regulación de los derechos de propiedad, dio origen a actores armados que se apropian de las funciones de Estado en las comunidades. Cuando la función de Estado ha sido apropiada por actores diferentes al gobierno, el nuevo orden político es establecido por figuras del poder local que actúan como señores de la guerra. Hills (1997) afirma que:

Una característica de muchos estados fragmentados es una devolución del poder del centro a la periferia en la cual los agentes coercitivos del Estado dejan de proporcionar seguridad y en su lugar actúan para su propio beneficio. Mientras que la seguridad física disminuye dramáticamente, una cierta forma de protección local llega a ser necesaria porque la fuerza física proporciona la única base posible para crear estabilidad limitada en condiciones de crisis social. Es en estas condiciones que el patronaje de un individuo poderoso o de un ' hombre fuerte ' llega a ser esencial.<sup>92</sup>

Los rasgos de las sociedades resultantes de la crisis del Estado-Nación han sido calificados bajo el concepto de neomedievalismo. El cual no quiere decir que esté sucediendo un retroceso histórico a las formas de organización social y económica de dicho período, sino que desde el comienzo de la globalización ciertas características del medioevo están presentes en algunas comunidades. La razón para usar la metáfora medieval es que ayuda a: “repensar un período anterior a la monopolización de las funciones de gobierno por los Estados soberanos, un mundo que no estaba construido sobre la base de la soberanía territorial.”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Alice Hills. *Warlords, militia and conflict in contemporary Africa: a re-examination of terms*. In Small Wars and Insurgencies, Vol. 8, No. 1, 1997. Pp-35. FRANK CASS, London. Traducción de: “A characteristic of many fragmenting states is a devolution of power from the centre to the periphery in which statist coercive agents cease to provide security and instead act on their own behalf. As physical security decreases dramatically, some form of localised protection becomes necessary because physical force provides the only possible basis for creating limited stability in conditions of societal breakdown. It is in these conditions that the patronage of a powerful individual or ‘big man’ becomes essential.”

<sup>93</sup> Stephen J. Kobrin. *Back to the future: neomedievalism and the postmodern digital world economy*. The Wharton School. The University of Pennsylvania. 1998. Pp-22. Original: “think back to a period before the monopolization of governance functions by sovereign states, to a world which was not constructed on the basis of territorial sovereignty”.

Las sociedades controladas por señores de la guerra que regulan la seguridad dentro de territorios vedados a formas modernas del Estado Nación, a manera de los feudos de los señores medievales, ha sido consecuencia de dos características del proceso de globalización. En primer lugar, la construcción de un libre flujo de comercio global junto a la disponibilidad de una red digital que facilita la clandestinidad de las transacciones, permitió a pequeños ejércitos y facciones contar con cuantiosos recursos provenientes del tráfico de materias primas y bienes ilícitos para acceder al mercado negro de armas. Y en segundo lugar, la exigencia a los Estados Nación de sistemas políticos que cedieran su hegemonía sobre el territorio, posibilitó que fuerzas locales ganaran autonomía frente al nivel central de gobierno. La proliferación de agencias supranacionales y de organizaciones no gubernamentales que al velar por el cumplimiento de valores universales como los derechos humanos debilitaban los aparatos coercitivos de los Estados, del mismo modo que el desfinanciamiento de los ejércitos del tercer mundo al finalizar la ayuda militar proveniente de las grandes potencias de la guerra fría, trajeron como consecuencia indeseada el exacerbamiento de los conflictos por la definición del Estado en el contexto de ciertas comunidades.

En ese sentido, la infiltración urbana de las redes mafiosas tiene su correspondiente explicación en las oportunidades que la globalización ofrece a los señores de la guerra en Colombia. El fortalecimiento de las facciones de autodefensas es la raíz del desafío que las redes mafiosas plantean al Estado, hasta el punto de posibilitar su expansión hacia las ciudades para regular transacciones bajo el esquema de 'empresarios de la protección'.

No cabe duda que la expansión territorial de los señores de la guerra tiene uno de sus principales soportes en las nuevas facilidades del comercio transnacional de bienes y servicios, que permitió a los jefes de las autodefensas construir fortunas que sobrepasan el billón de dólares, desde áreas rurales atrasadas, donde en muchos casos no existían vías pavimentadas ni infraestructura de servicios básicos, pero que paradójicamente proveían de la inmunidad necesaria para acumular tanta riqueza. Aunque la razón de ser de los señores de la guerra es la apropiación de los excedentes económicos legales e ilegales que produce la región bajo su dominio, sólo es razonable liderar ejércitos propios en regiones extremadamente pobres si existen oportunidades de generar ganancias mediante el comercio con regiones ricas. La negociación directa con los mercados internacionales que trajo la globalización, propició que desde las zonas de dominio de los señores de la guerra se crearan sistemas económicos que, violando la normatividad internacional, estuvieran en capacidad de producir enormes fortunas personales.<sup>94</sup> Estos sistemas económicos están basados en economías de bienes naturales (petróleo, diamantes, maderas, etc.) y bienes ilegales (drogas, armas, contrabando<sup>95</sup>), y en la posibilidad de acceder a servicios financieros y telecomunicaciones desde áreas remotas. Las

---

<sup>94</sup> Richani realiza una descripción detallada de la naturaleza de los sistemas económicos de los paramilitares en su texto *Sistemas de guerra*. Richani (2003). *Op. Cit.*

<sup>95</sup> Rocha estimó el contrabando para 1998 en un 1.6% del PIB de la nación (Ricardo Rocha, 1999. *Op. Cit.*). Steiner y Corchuelo estimaron en US\$ 112 millones la evasión de impuestos por contrabando en 1996. (Roberto Steiner and Alejandra Corchuelo, (1999). *Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia*. CEDE- Universidad de los Andes).



organizaciones criminales en los países del primer mundo y las compañías multinacionales<sup>96</sup> que se lucran con los sistemas económicos de los señores de la guerra, los necesitan para garantizar los derechos de propiedad en zonas aisladas geográficamente donde no existe ejército, ni policía, ni jueces imparciales, pero donde se necesita una autoridad que garantice el flujo de bienes lícitos e ilícitos hacia las redes internacionales de comercio. De acuerdo a la conceptualización que hace Duffield de los conflictos de la globalización:

Los conflictos *Postmodernos* tratan sobre la aparición en las últimas dos décadas de proyectos políticos en el sur, incluyendo sistemas calificados como Estados, *que en adelante no buscan ni necesitan establecer autoridad política territorial, burocrática o legitimidad en el sentido tradicional* [...] más que liberal-democracia, estas alternativas contemporáneas revelan proyectos políticos en los términos de la aparición de soberanías múltiples sobrepuestas en el contexto de una autoridad central débil. Al mismo tiempo, sugieren que posibilidad que los líderes políticos del Sur puedan estar adaptando el nuevo sistema globalizado para satisfacer sus propias capacidades e intereses de largo plazo. Las innovaciones que implican una difusión de la liberal-democracia no pueden ser tomadas como infalibles [...] Un rasgo que se debe enfatizar sobre los modernos señores de la guerra, son los vínculos que forjan con la economía internacional. Los señores de la guerra exitosos de hoy piensan globalmente pero actúan localmente.<sup>97</sup>

La riqueza de estas economías de guerra es lo que permite la inversión en negocios lícitos en las ciudades. Tras numerosas empresas de fachada con complejos esquemas comerciales para burlar las aduanas y las autoridades fronterizas, se esconde un prospero negocio de tráfico de armas, drogas, extorsión, corrupción y de lavado de dinero, que es el objetivo final de las redes mafiosas que se instalan en lo urbano: producir fortunas sin precedentes que puedan trasladarse en líquido hasta las zonas rurales. No de otra manera se explica que en Montería, ciudad cumbre en el proceso de creación y consolidación del proyecto de las

---

<sup>96</sup> La actitud de las multinacionales con el fomento al comercio ilegal no puede tomarse como casual, dada la recurrente evidencia de "ceguera voluntaria" por parte de las compañías y el hecho que se realicen costosas campañas publicitarias de productos con mínimas importaciones lícitas. La compañía Chiquita, multinacional de producción bananera, ha reconocido públicamente haber pagado extorsiones a grupos armados de derecha en el marco de un juicio que se le sigue en Estados Unidos por financiar grupos terroristas. Ver en Caracol noticias en Internet (fuente Reuters): Chiquita no es la única que sufre extorsiones en Colombia. 11 de Mayo de 2004. En: <http://www.caracol.com.co/noticias/111688.htm>

<sup>97</sup> Mark Duffield, *Post-modern Conflict: Warlords, Post-adjustment States and Private Protection*, Journal of Civil Wars, Vol.1, No. 1, Spring 1998. Publicado por Frank Cass, Londres, Pp. 65-102, Pp. 76 - 77. Traducción del autor de: "Post-modern conflict addresses the emergence within the past couple of decades of political projects in the South, including qualified state systems, *which no longer seek or even need to establish territorial, bureaucratic or consent based political authority in the traditional sense.* [...] rather than liberal-democracy, these alternatives view contemporary political projects in terms of the emergence of multiple and overlapping sovereignties in the context of weak central authority. At the same time, they suggest the possibility that southern rulers may be adapting the new globalised system to suit their own capabilities and long-term interests. Innovations which imply that the spread of liberal-democracy cannot be taken for granted. [...] A factor which one should emphasise about modern warlords, however are the linkages that they forge with the international economy. Today's successful warlords think globally but act locally."

autodefensas, la tasa de cambio del peso con respecto al dólar haya alcanzado el valor más alto en Colombia pese que no existen firmas exportadoras apreciables ni se produce mayor cantidad de bienes transables en la región.<sup>98</sup>

Los señores de la guerra no solo sacan provecho del flujo de capitales, armas, drogas y materias primas, sino también de la imposición de una serie de políticas sobre modelos económicos y de organización del estado que debilitan el control del gobierno central sobre las zonas de poder periférico. Las entidades de financiación para el desarrollo, lideradas por el Banco Mundial y el FMI, condicionan la ayuda multilateral al seguimiento de políticas que en contextos de conflictos internos debilitan la capacidad del Estado de regular los territorios y la población. Leander (2002) sostiene que políticas de estas instituciones como:

La privatización, la desregulación y los bajos déficits presupuestarios, en teoría, [...] fueron diseñados sin que se dieran efectos sobre la capacidad del estado para centralizar el control de los recursos financieros. Pero en la práctica, esto tiende a ser una ilusión. Peor aún, dichas políticas se tradujeron en una reducción de la capacidad del Estado central de negociar apoyos, por ejemplo ofreciendo posiciones en la burocracia del estado, ofreciendo bienes a bajos precios desde las industrias estatales o canalizando recursos a los administradores locales. La otra cara de la moneda es el crecimiento de la capacidad de los dueños del poder local para controlar activos privatizados, burocracias empobrecidas y poblaciones dependientes. En un contexto donde es fundamental el acceso al capital internacional, no es ninguna sorpresa que los dueños del poder local utilicen la debilidad relativa de las estructuras del estado (y posiblemente de su propia fuerza cada vez mayor) para establecer relaciones autónomas con los poseedores del capital internacional.<sup>99</sup>

Un claro caso del debilitamiento del Estado en Colombia por la adopción de políticas fomentadas por agencias internacionales del desarrollo fue la descentralización administrativa que agudizó las fallas del sistema político por las fallas descritas previamente.<sup>100</sup> La descentralización en vez de modernizar las

---

<sup>98</sup> Una buena descripción de lo que ha sido el enriquecimiento de un territorio históricamente aislado fue el reportaje investigativo de la Revista Semana *El Miami costeño*, (septiembre de 2004): “La abundancia es tal que una pequeña comerciante que vende equipos para fincas de recreo asegura que tiene dificultades pues muchas cuentas inferiores a 10.000 pesos siempre se las pagan con billetes de 50.000. Y no es raro que en varios locales se paguen las cuentas con dólares en efectivo.”

<sup>99</sup> Anna Leander, (2002) *Wars and the Un-Making of States: Taking Tilly seriously in the Contemporary World*. In Stefano Guzzini and Dietrich Jung, Eds., *Copenhagen Peace Research: Conceptual innovations and Contemporary Security Analysis*. , London and New York: Routledge, p. 7. Privatisation, de-regulation and reduced budget deficits, in theory, [...] were pursued without effects on the capacity of the state to centralise the control over financial resources. But practically, that tends to be an illusion. Rather, the policy translates as a reduced capacity of the central state to buy support, for example by offering positions in the state bureaucracy, by offering under-priced goods from state industries and by channelling money to local administrators. The reverse side of the coin is growth in the capacity of local power holders to control privatised assets, impoverished bureaucracies and subject populations. In a context where access to international capital is fundamental, it comes as no surprise that local power holders use the relative weakness of state structures (and possibly their own growing strength) to establish relations of their own with wielders of international capital.

<sup>100</sup> Mason relaciona en un interesante artículo como los cambios políticos y económicos de la globalización afectaron la crisis del Estado colombiano: “Las políticas de racionalización del gasto, privatización y descentralización resultaron en una reducción significativa de la capacidad reguladora

transacciones políticas en las localidades, que era el propósito de las agencias y la tecnocracia que diseñaron los esquemas de competencias entre los niveles central y periféricos de la administración pública, catalizó el pasó hacia el 'clientelismo armado'.

Un aspecto más sutil de los cambios históricos de la globalización que ha influenciado la infiltración de los señores de la guerra en las ciudades, es la estructuración en redes de la sociedad, las empresas y, en general, de los modelos de interacción de individuos y grupos. El predominio de la organización en redes no sólo hace alusión a la proliferación de nuevas instituciones y agentes intercomunicados por potentes sistemas de información en línea fuera de control de organismos reguladores de un espacio territorial como el Estado-Nación. La forma de organizarse de los factores económicos también ha cambiado hacia la flexibilización de las partes de la estructura productiva. El modelo de funcionamiento de grandes organizaciones que por economías de escala alcanzaban las tasas más altas de eficiencia productiva, tuvo que ser revaluado por lo volátil y cambiante de los inventarios, las transformaciones tecnológicas, y por la disponibilidad de células operativas capaces de proveer ciertos servicios y bienes a precios inferiores y sin las inversiones de largo plazo que implica adecuar una parte de la estructura productiva de la gran organización. La revolución de la información condujo a un proceso de adecuación de las organizaciones en diversas tipologías de redes, sin que ello signifique la desaparición de grandes corporaciones. Castells (2000) precisa los cambios acontecidos:

Es cierto que las empresas medianas y pequeñas parecen ser formas de organización bien adaptadas al sistema de producción flexible de la economía informacional, pero, al mismo tiempo, también es cierto que su dinamismo renovado se encuentra bajo el control de las grandes empresas, que continúan en el centro de la estructura de poder económico en la nueva economía global. No estamos siendo testigos de la desaparición de las grandes y poderosas compañías, pero sí de la crisis de su modelo de organización tradicional, basado en la integración vertical y la gestión funcional jerárquica: el sistema que presenta un organigrama de jerarquización intermedia con una estricta división técnica y social del trabajo dentro de la firma.<sup>101</sup>

Las formas como los agentes violentos organizan la guerra en Colombia se han adaptado a la lógica de las estructuras de redes. Guerrillas y autodefensas mantienen el grueso de su ejército -la gran corporación- a salvo en las zonas rurales, conservando estructuras jerárquicas donde la incertidumbre es manejable y permite concentrar su fuerza. En las ciudades moldean su organización en forma de redes cuasi-invisibles que filtran las actividades ilegales, legales y las instituciones de gobierno, según sea posible a través del modelo mafioso de 'amenazar y proteger'.

---

y administrativa del gobierno central. La correspondiente contracción del gasto público causó disparidades generalizadas entre la sociedad más pobre y vulnerable de Colombia, con lo cual se crearon de nuevo espacios que fueron llenados por grupos tales como la guerrilla." En Ann Mason. *La crisis de seguridad en Colombia: causas y consecuencias internacionales de un Estado en vía de fracaso*. REVISTA COLOMBIA INTERNACIONAL (número 49/50). Universidad de los Andes. 2000. Bajado de: <http://www.lablaa.org/blaavirtual/colinter/mason.htm>

<sup>101</sup> Manuel Castells, (2000). *La sociedad red*. Alianza Editorial, S. A, Madrid. Capítulo 3. Pág. 5.

El ejemplo más dicente de la efectividad de este sistema de redes es su contraste con el fracaso de Pablo Escobar cuando trató de someter bajo su jerarquía a la clase política y a la clase criminal del país. Sin que tuviera una corporación criminal sólida, por estar situado su centro de operaciones en áreas urbanas vulnerables a las fuerzas del Estado y de criminales enemigos, se tranzó en una guerra frontal que quebró las lealtades de sus células no combatientes (políticos, lavadores, otros narcos), y que conllevó a que se diferenciaron qué sectores estaban con el terrorismo y cuáles con el Estado, así estuviera infiltrado mediante acuerdos 'bajo la mesa' con el resto de narcotraficantes.<sup>102</sup> Por pretender unificar un sistema de redes bajo el mando de una estructura jerárquica su centro de operaciones colapsó.

El paralelo entre la organización de la guerra y de la sociedad no tiene nada de novedoso. La historia muestra que es normal que se produzcan relaciones estrechas entre la estructura económica, política y social de la sociedad y la naturaleza de la guerra. Esta influencia se reproduce en los dos sentidos, la guerra influye sobre la forma de organizarse de la sociedad, y la estructura social determina la naturaleza de la guerra. De acuerdo a Duffield (2002):

La forma como las sociedades están económica, social y políticamente organizadas, ha sido moldeada y ha influenciado la conducta de la guerra. La formación del Estado Nación, la expansión colonial y el advenimiento de la producción industrial en masa, por ejemplo, estuvieron íntimamente ligados a la naturaleza cambiante de la violencia organizada. La guerra en red está similarmente asociada con cambios contemporáneos en la naturaleza de la vida social. En este caso, cambios en la estructura organizativa del capitalismo, la nueva fase de la globalización y el rediseño de la arquitectura del estado, especialmente la refocalización del gobierno hacia redes más amplias de agentes no estatales.<sup>103</sup>

Lo importante del análisis del paralelo de la organización de la sociedad y de la guerra en estructura de redes, son las ventajas que encuentran las redes mafiosas y los señores de la guerra con relación a la capacidad de las democracias para imponer su orden sobre las transacciones urbanas. Williams (2001) resume las ventajas de las redes criminales sobre las fuerzas de seguridad en la clandestinidad, la dispersión, la flexibilidad, la redundancia y la resistencia. Todas estas características están presentes en las redes mafiosas que infiltran las ciudades colombianas. La clandestinidad está en la invisibilidad de las redes, las células operativas no son inmediata ni evidentemente identificables. Más aún, la capacidad

---

<sup>102</sup> Como evidencia de estos acuerdos bajo la mesa basta nombrar las declaraciones de Castaño sobre su actuación en el grupo de los pepes (perseguidos por Pablo Escobar). O los sobornos pagados por el Cartel de Cali que luego serían revelados durante el proceso 8.000.

<sup>103</sup> Mark Duffield. *War as a network enterprise: the new security terrain and its implications*. En Cultural Values, Vol. 6, Nos. 1 & 2, 2002, 153-165. Pp- 154. Traducción de: "The way societies are economically, socially and politically organised has historically both shaped and been influenced by the conduct of war. The formation of the nation-state, colonial expansion and the advent of industrial mass production, for example, were intimately connected with the changing nature of organised violence. Network war is similarly associated with contemporary shifts in the nature of social life. In this case, changes in the organisational structure of capitalism, the new phase of globalisation and the reworking of the architecture of the state, especially its repositioning within wider governance networks of non-state actors."

de sobornar a los organismos de inteligencia del Estado le permite a las redes observar con antelación el despliegue de las fuerzas de seguridad. La dispersión ayuda a aislar las células vulnerables a la persecución policial y la flexibilidad permite readecuar la función de los nodos operativos eliminados o amenazados. La red acomoda la forma de sus nodos y vínculos en las posiciones menos riesgosas ante los potenciales ataques de la legislación internacional y nacional. La redundancia consiste en la multiplicación de células independientes entre sí que cumplen las mismas funciones. Cuando una célula redundante es suprimida por las autoridades, inmediatamente otra toma su lugar. Y finalmente, la resistencia de los vínculos y los nodos a desaparecer está en su proclividad a reciclarse. Nada parece indicar que los casos de corrupción recopilados en la sección anterior no vayan a volver a ocurrir, bien sea usando los mismos esquemas de infiltración mafiosa o sofisticando su esquema operativo.

#### IV. LOS EFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA.

El logro de una sociedad verdaderamente democrática no sólo pasa por la parte procedimental, es decir la celebración periódica de elecciones libres (Dahl 1998). Las sociedades liberal-democráticas exigen logros más ambiciosos que se reflejan en un verdadero control de la sociedad civil sobre los gobiernos, un monopolio de la violencia y una justicia imparcial por el Estado, el acceso a servicios sociales básicos y el desarrollo de un capitalismo moderno y competitivo. El estado de las cosas muestra que Colombia aún está lejos de constituir una sociedad regida por tales principios.

La infiltración de las redes mafiosas en las ciudades colombianas representa un desafío bastante complejo para los propósitos de las fuerzas democratizadoras en el país. Ya en las pequeñas ciudades y en los municipios controlados por guerrilla y autodefensas, la dinámica de la sociedad, lo que incluye el orden político, económico, social y hasta cultural, es moldeado por la visión y los intereses de facciones de guerreros. Y la expansión hacia los espacios y transacciones estratégicas en las ciudades, es tanto un proyecto de ampliación de su influencia sobre la sociedad como una condición necesaria para su supervivencia.

El fenómeno de los señores de la guerra no debe ser interpretado, ni mucho menos subestimado, como un suceso pasajero, cuando en realidad responde a un proceso sólido de construcción de Estados alternos en determinadas comunidades semiurbanas y rurales del país. Duffield sugiere que las formas neomedievales de organización del estado son una respuesta coherente de áreas atrasadas para insertarse en las redes globales de comercio, ante la ausencia de perspectivas en estados débiles y con economías poco competitivas. A la violencia en estas sociedades no la considera como una anomalía en un curso histórico predeterminado hacia el logro de sociedades liberal-democráticas. Por el contrario, el conflicto en sí mismo es un estado de orden local que imponen los señores de la guerra y las redes mafiosas como proyecto político de largo plazo.

La idea de la guerra interna o intra-estatal es desorientadora. Está atada conceptualmente a una visión tradicional y anticuada del Estado-Nación. Existe una tendencia a mirar la actual fase de la inestabilidad política en el Sur como una aberración temporal. Necesitamos movernos más allá de esta perspectiva, si deseamos escapar a sus limitaciones analíticas y morales [...] Es decir, la aparición de proyectos políticos de largo plazo que no necesitan en el horizonte lejano consolidar su autoridad política en estructuras convencionales de territorios, burocracias o consensos.<sup>104</sup>

La solución del conflicto para el Estado implica entonces algo que va mucho más allá de la supresión de acciones violentas que determinados grupos de la sociedad adelantan para cambiar el orden de las cosas. Se trata de la supresión de

---

<sup>104</sup> Duffield (1998). Op. Cit. Pp-97. Traducción de: "The idea of internal or intra-state war is misleading. It is conceptually tied to a traditional and outmoded view of the nation-state. There is a corresponding tendency to regard the present phase of political instability in the South as a temporary aberration. We need to move beyond this perspective if we are to escape its analytical and moral limitations. [...] That is, the emergence of long term political projects that no longer need to anchor political authority in conventional territorial, bureaucratic or consent based structures."

un modelo de sociedad violenta implementado por actores armados antagonistas de los propósitos políticos de las democracias liberales. Y todo parece indicar que hasta ahora guerrillas y autodefensas han triunfado en su objetivo de construir sociedades donde el poder y la economía están basados en la capacidad de producir violencia y de insertarse en las redes criminales del comercio global.

Dado que el fenómeno de los señores de la guerra, y su correspondiente expansión mafiosa hacia las ciudades, es un hecho histórico vigente y todavía inacabado, resulta un tanto especulativo analizar su impacto de largo plazo en la historia del país. Sin embargo, ciertos efectos negativos sobre el desarrollo de la sociedad hacia la consecución de formas de organización propia de las democracias liberales ya son observables, o al menos pueden intuirse de la experiencia de África y Europa del Este.

En cuanto los efectos políticos, es palpable que las reformas orientadas a la modernización del sistema de participación y administración pública, que buscaban agotar la mediación clientelista entre los políticos profesionales y sectores de la población dependientes del gasto social del Estado, fracasaron al blindarse la lealtad de las clientelas mediante la intimidación armada. Del clientelismo de comisión se pasó al clientelismo armado en las áreas rurales, y al 'clientelismo mafioso' en las ciudades.

El clientelismo mafioso se diferencia del clientelismo armado en que la intimidación sólo se da hacia una de las partes de la relación de intercambio entre patronos y clientelas: los miembros de la clase política. En las ciudades las redes mafiosas están en capacidad de intimidar únicamente a los políticos profesionales, los contratistas del Estado y la burocracia que ocupa los cargos. A la población civil que compone la clientela de otros competidores resulta muy complejo amenazarla. Realizar una masacre con propósitos electorales en el barrio de una gran ciudad<sup>105</sup> sería intolerable para las autoridades y deterioraría la estructura de alianzas que soporta la invulnerabilidad urbana de las redes mafiosas. Lo opuesto sucede en los municipios y zonas campesinas donde predomina la relación de clientelismo armado, en que ambos, patronos y clientes, son intimidados, y además de pagar comisiones a los señores de la guerra para acceder a los recursos del Estado están obligados a votar por candidatos prefijados.

Aparte de la pérdida de recursos por el costo de oportunidad de un gasto social mal invertido, está la imposibilidad que se adelanten mejoras en el sistema político por iniciativa de movimientos honestos o de agentes burocráticos eficientes. En las ciudades, antes que la llegada de las redes mafiosas remplazara al clientelismo de comisión tradicional, no era tan común el uso de la violencia en las disputas electorales entre políticos profesionales contra otros políticos o contra candidatos con iniciativas modernizadoras del sistema. En contraste, durante los últimos cinco años en el país se ha vuelto común no sólo el asesinato de candidatos a cargos públicos, sino también de veedores, periodistas y miembros del aparato de justicia.

---

<sup>105</sup> Aún así han sucedido masacres en las comunas de Medellín y en diferentes barrios de Barrancabermeja, pero su objetivo directo no es incidir en los resultados de unas elecciones. El efecto de asesinatos y el terror en las ciudades no es comparable a las amenazas a candidatos rivales o la financiación de la clientela propia.

El sistema político se ha criminalizado donde las redes mafiosas han alcanzado a controlar las instituciones de gobierno. Ninguna organización política puede aspirar a tener éxito si no cuenta con un respaldo armado, de modo que cualquier legitimidad del Estado central se halla distorsionada por actores locales con ideas y visiones muy diferentes sobre lo que debe ser un Estado de derecho democrático.

En ese contexto resulta imposible para los actores de la sociedad civil adelantar sus funciones de vigilancia sin que ello implique una movilización contundente y masiva contra la violencia del nuevo poder político, situación que poco se ha apreciado desde las marchas contra el terrorismo del período de guerra contra Pablo Escobar y de las marchas por la paz en 1999, marchas que entre otras cosas no podrían ser interpretadas como una protesta directa contra la infiltración mafiosa de la sociedad. Es muy probable que la pasividad de la ciudadanía ante la suplantación de la clase política por células involucradas con la mafia se deba a la crónica ineficiencia del gasto social. La población en su conjunto no percibe cambios en la calidad de la administración pública, tampoco es consciente de las transformaciones políticas por las alteraciones de poder, ni sus implicaciones en el largo plazo. Por lo que no se producen grandes movilizaciones de apoyo a la clase política que es despojada del poder. De hecho, se puede interpretar el sometimiento de las élites políticas tradicionales a las células de las redes mafiosas como un castigo por los excesos en los robos y en la incompetencia en la administración de las transferencias del presupuesto central.

Pero de todos los efectos políticos que ha tenido la irrupción de los señores de la guerra, el que se adivina con mayor trascendencia es la revolución en la estructura de poder que causó la narcotización de las élites rurales, su apropiación de las mayorías en el Congreso y el control de los cargos públicos locales. La histórica disputa entre fragmentaciones regionales de poder que caracterizó al país antes del Frente Nacional y que parecía que iba a ser zanjada con su urbanización, adquirió una nueva forma bajo el liderazgo de ejércitos rurales que, soportados en una estructura vertical que influye hasta a las altas instancias de gobierno, moldean las decisiones políticas nacionales de acuerdo al interés económico de una clase que se ha especializado en el tráfico de drogas y la captura de excedentes mediante la mecánica de 'coerción y protección'. El sello de la historia política en el momento actual es la tensión entre las fuerzas de las ciudades que quieren orientar la estructura de poder político hacia la construcción de una democracia y un capitalismo moderno *versus* las fuerzas del campo que quieren dispersar el poder del Estado para construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales. La infiltración urbana a través de redes mafiosas y la forma como se ha descentralizado la administración del gasto social -sin rendición de cuentas desde lo local-, son quizá una señal del triunfo parcial de los guerreros del campo en la definición del tipo de Estado que tendrá Colombia durante su entrada a la globalización.

Por la tensión entre el campo y la ciudad, hoy más que nunca entra en contradicción la convivencia de dos sistemas económicos opuestos, el de un sector productivo moderno con sus correspondientes mercados abiertos e impersonales y el de un capitalismo político que distribuye sus ganancias según el balance de armas, dinero y votos. La globalización los ha convertido en sistemas excluyentes entre sí.



El capitalismo racional necesita de reglas del juego claras, una justicia independiente, mercados dinámicos, disponibilidad de capitales, y libertad en el acceso y la competencia. Condiciones que no tienen cabida en las sociedades que controlan los señores de la guerra, que centran su sistema económico en la ausencia de la justicia, la acumulación patrimonial, la especulación violenta con los capitales, la creación de mercados aislados con baja capacidad de consumo, y la imposición de monopolios. Tiene razón Ocampo (2004) cuando afirma que la historia de Colombia es la conjunción de dos sistemas, el formal y el informal. A este último lo califica de violento y mafioso “que en distintos momentos ha logrado expandirse hasta predominar en distintas partes de su compleja geografía y estructura social”,<sup>106</sup> y que de diferentes maneras:

Ha sido funcional al formal. En efecto, la colonización que ha dado lugar a los fenómenos más importantes de informalidad, ha sido la válvula de escape para la exclusión social que caracteriza el sistema formal, y los mecanismos de control social que caracterizan el sistema informal han sido utilizados con frecuencia por la gran propiedad rural o el sistema político para garantizar su dominio en ciertas partes del territorio. Ello no significa, sin embargo, que el segundo exista fundamentalmente por la funcionalidad que ofrece al primero. De hecho, más bien puede decirse que el sistema informal es esencialmente disfuncional al formal, pero esto sólo ha sido reconocido en coyunturas extremas (como las de violencia de mediados y fines del siglo XX) debido a la tendencia del sistema formal a la desconcentración del poder y a evitar el conflicto abierto, tanto en su interior como en su relación con el sistema informal.<sup>107</sup>

La exclusión de los dos sistemas se produce por el excesivo poder a escala nacional que han concentrado los señores de la guerra en el Congreso y demás instituciones públicas, desplazando la ascendencia política del sector formal, y por el paso hacia las ciudades a partir de las redes mafiosas. La expansión hacia los espacios urbanos ha conllevado cambios en un aspecto fundamental del sistema económico, la acumulación patrimonial a través de las ‘empresas de la protección’ y del tráfico de narcóticos. La inversión de las redes mafiosas en negocios lícitos indirectamente genera restricciones a la competencia en el mercado de los bienes y servicios que producen las empresas infiltradas, o por lo menos un reajuste en las características de los actores capaces de competir. El efecto distorsionador que tiene la competencia con firmas que venden a precios más bajos y soportan costos más altos, porque su utilidad está soportada en la legalización de ingresos, incide en pérdidas de la eficiencia productiva de la sociedad. Aunque las ciudades puedan no ser tan dependientes del dinero de las drogas, la apropiación violenta que las redes mafiosas han hecho y amplíen en el futuro de ciertas transacciones, alterará sustancialmente la manera capitalista de construir riqueza. El potencial de coerción de las redes es un potente disuasivo de los inversionistas que sólo apostarían a emprender negocios en el contexto de un sistema de contratos y derechos de propiedad regulados por instituciones confiables. El crecimiento, el empleo, los salarios, y demás variables de bienestar, se verían entonces limitados por la amenaza de la extorsión a la producción privada legal. El dinamismo de la economía

---

<sup>106</sup> José A. Ocampo, (2004). *Op. Cit.* Pp- 82.

<sup>107</sup> Ocampo, (2004). *Íbdm.* Pp- 83.

podría volverse dependiente de las actividades criminales, que en los municipios y áreas rurales actualmente constituyen un rubro de ingreso significativo en comparación del potencial productivo de las actividades lícitas, pero que en las grandes ciudades producirían mayores costos en la estructura global de la producción que los capitales que generan los negocios relacionados con drogas y el resto de delitos.

A pesar que puedan darse casos de capitalización mafiosa de ciertas empresas y sectores de la economía bajo un entorno de producción competitivo, como sucedió en México cuando las élites económicas acudieron a los narcotraficantes para salvar de la quiebra a sus industrias,<sup>108</sup> no hay evidencia que esto suceda en Colombia. La visión y la aspiración de los señores de la guerra y de las redes mafiosas no son afines a hacerse a un espacio en los sectores modernos de la economía. La historia de las inversiones de los narcotraficantes en lo legal muestra que poco se han enfocado hacia los sectores dinámicos, más bien sus recursos se destinan a compras de propiedades rurales y bienes conspicuos. La modernización de los capitales mafiosos también está sujeta a la disponibilidad de factores como el capital humano, el acceso a mercados en sus zonas de influencia y la aceptación de la élite de empresarios legales. Los cuales no parecen muy inclinados a asociarse de manera directa con capitales vetados internacionalmente. Rocha (1999) afirma que: “La propiedad de muchos sectores –el manufacturero, el financiero, el de la construcción, el del comercio, y el de las comunicaciones-, se encuentra altamente concentrada en manos de una docena de conglomerados empresariales. De tal forma que es muy difícil la adquisición de estas empresas por parte de terceros, incluyendo al narcotráfico. En estos conglomerados se encuentra cerca de la mitad del PIB del sector privado. En cambio, en las actividades rurales, en particular la ganadería, el narcotráfico ha encontrado muchas oportunidades de inversión.”<sup>109</sup> La explicación de Rocha es coherente con los hallazgos de los efectos macroeconómicos del narcotráfico en Colombia de Sarmiento (1995):

El impacto de la droga sobre la economía depende de la forma como se distribuye el ingreso entre inversión y consumo. Los recursos se comprometen en la adquisición de propiedades existentes, que no parecen representar una parte importante del acervo de capital de la economía, el efecto final sobre la inversión es muy reducido. Las cifras históricas no controvierten el resultado. Si una parte importante de divisas se destinara a la inversión, ésta se habría elevado en 1 ó 2 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, la información agregada constituye una seria presunción de que ello no ha ocurrido. Curiosamente, la época de mayor auge del narcotráfico coincidió con un debilitamiento del ahorro y la inversión.<sup>110</sup>

Las consecuencias de la evolución de la mafia de asociaciones que competían por el narcotráfico a ‘empresarios de la protección’, también se han reflejado sobre la

---

<sup>108</sup> Jean- François Bayer, 2001. “La guerra perdida contra las drogas. Narcodependencia del mundo actual”. Ver p-152-156 La sección titulada el Pacto entre los narcos y el Estado mexicano y entre p-156-159, La sección *Narcobusiness* y lavado de dinero. Editorial Grijalbo. México.

<sup>109</sup> Ricardo Rocha García, (1999). Op. Cit. P-121

<sup>110</sup> Eduardo Sarmiento. *Economía del narcotráfico*. En: Carlos G. Arrieta, Luis J. Orjuela, Eduardo Sarmiento, Juan G. Tokatlian. “Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales (1995). Bogotá. Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes. P-85

calidad del gasto social en las instituciones de gobierno. Los costos de intermediación clientelista de las transferencias del gobierno central destinadas a servicios como educación, salud y acueducto se han incrementado, al exigir las células políticas locales una mayor comisión en la contratación pública, y al intimidar cualquier intento de control cívico o administración eficiente del desarrollo de comunidades que dependen del Estado para acceder a servicios sociales.<sup>111</sup> A su vez, los ingresos tributarios del Estado se han reducido en el mediano plazo por el desincentivo a la inversión de empresarios honestos, lo que afecta los recursos disponibles vía tributos para el gasto social. Eso sin mencionar la evasión de impuesto que se propicia desde negocios como los *Sanandresitos*, los mercados de abastos y los juegos de azar, y desde agencias públicas como las oficinas de recaudación tributaria de los gobiernos locales.

Ante la crisis institucional propiciada por la expansión de los señores de la guerra y sus redes mafiosas, la destrucción del tejido social y el retroceso en la provisión de servicios públicos en los barrios marginales de las ciudades han sido notables. Los programas de inclusión de los gobiernos nacionales y locales no han resultado ser viables en comunidades amenazadas por pandillas, milicianos de la guerrilla o frentes urbanos de autodefensas que se hacen a un dominio violento del territorio. La situación es tan crítica que:

Algunas ciudades capitales o centros urbanos regionales de importancia, antes consideradas fundamentalmente receptoras, son hoy grandes expulsoras de población. Esto obedece, entre otras cosas, a la fuerte presencia y copamiento de los grupos paramilitares de las áreas urbanas y a la confrontación entre milicias pertenecientes a grupos insurgentes y paramilitares. Un ejemplo de esta situación es la ciudad de Barrancabermeja, que a lo largo del año ha expulsado más de 180 familias hacia otros lugares del país. Sin embargo, estos desplazamientos no siempre ocurren hacia otras ciudades; se ha evidenciado una tendencia en materia de movilidad humana dentro de los perímetros urbanos (desplazamientos intraurbanos) en la misma Barrancabermeja y en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Santa Marta, entre otras ciudades.<sup>112</sup>

Además de la destrucción del tejido social y de la legitimidad del Estado en las comunidades marginadas, muchas de ellas compuestas por desplazados rurales de la violencia, es preocupante en un futuro cercano la propensión de toda una generación de jóvenes, sin otra alternativa de movilidad económica, a dedicarse a actividades criminales de alta peligrosidad. La disponibilidad de conocimientos y tecnologías criminales que proveen las redes mafiosas tendrá un efecto cultural importante en las nuevas generaciones que pertenecen a hogares expuestos a la delincuencia como una opción laboral. En el imaginario de jóvenes y niños de estas comunidades sus aspiraciones de éxito personal van a estar filtradas por la

---

<sup>111</sup> A partir de entrevistas a terceros el autor ha podido conocer unos pocos casos de señores de la guerra que tienen su conciencia particular sobre la importancia de ayuda a las comunidades más pobres, y exigen a la burocracia pública que adelante campañas de salud, nutrición, entrega de materiales de vivienda y demás. Pero todo dentro de un entorno paternalista y tan limitado que no tiene menor incidencia en el conjunto del desarrollo social.

<sup>112</sup> ¿Hasta cuándo? Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogotá, Colombia, 17 de abril de 2001. Pp. 313.

alternativa de hacerse a riqueza, prestigio y poder, que demuestran permanentemente los miembros de las redes.

## V. CONCLUSIONES.

Desde hace de más de dos décadas en Colombia, es difícil distinguir en qué momentos la historia se trata de guerra o de política. Más difícil aún es precisar el sentido de causalidad de la máxima de Clausewitz, ¿es la guerra la continuación de la política? o ¿es la política la que sucede a la guerra?

Sin embargo, hasta hace unos pocos años en las ciudades capitales de Colombia era posible distinguir con algún grado de certidumbre entre los actores sociales que apelaban a los medios políticos y entre quienes apelaban a los medios de guerra. Y eran más los actores políticos, así abusaron continuamente de las reglas del juego. La llegada de las redes mafiosas desde las áreas rurales trastocó este orden de las cosas. Paulatinamente, las nuevas élites del campo han llenado los espacios de poder urbano, al punto que no sólo son capaces de definir en las instituciones democráticas cuál es el tipo de Estado que debe regir en el país rural, sino que también han sometido a los gobiernos de muchas ciudades de acuerdo a sus intereses y su visión de la sociedad. En el modelo de Estado de los señores de la guerra la política está sesgada por el poder de las armas, de los excedentes del narcotráfico, la corrupción y la extorsión. En consecuencia no es posible diferenciar la política de la violencia en la forma de ser de un Estado.

Más que un fenómeno espontáneo, la aparición de los señores de la guerra y sus subsiguientes redes mafiosas responde a transformaciones propias de la estructura de poder político en Colombia. Durante el Frente Nacional el país había logrado establecer unos acuerdos básicos que permitieron reducir la histórica debilidad del Estado central con respecto al poder de facto que gobernaba en las regiones. Parecía que la tendencia a la disolución del Estado en poderes geográficamente fragmentados iba a ser revertida, a pesar que estaban latentes problemas irresueltos como los conflictos agrarios, los focos guerrilleros, la exclusión política, la dependencia del ejecutivo en las relaciones clientelistas para lograr gobernabilidad y el uso de la violencia para regular los derechos de propiedad que todavía eran prácticas usuales en muchas localidades.

A principios de los noventa cuando la nación se comprometió con una nueva constitución, el propósito de los miembros de la Asamblea Constituyente era que las regiones apartadas del centro político del país poseyeran suficiente autonomía y recursos para gestionar su desarrollo. Así mismo se pretendía modernizar la economía al integrar la producción nacional con los mercados internacionales. El objetivo era que los ajustes planteados condujeran a una inserción de Colombia en el contexto de los cambios de la globalización. En ese sentido eran reformas necesarias y en el corto plazo inaplazables ante las nuevas realidades del mundo.

Pero los resultados fueron bien distintos a los esperados. No porque Colombia no se haya insertado a la globalización, las cifras del comercio internacional, la movilización de población y la conexión a tecnologías de comunicación, desvirtúan esta hipótesis. Sino por el rumbo que ha tomado la configuración del Estado en el proceso de ajuste político y económico para hacerse un espacio en el mundo global. Varias de las políticas que han adquirido un estatus de condiciones indispensables para el crecimiento económico o el bienestar social en el nuevo contexto histórico del fin de la guerra fría, en Colombia tuvieron efectos diametralmente contrarios a los

deseados. La descentralización sin control fiscal, la desprotección arancelaria de productos estratégicos en sociedades que apenas estaban creando instituciones democráticas, y en general, la emancipación del Estado-Nación, aceleraron procesos de debilitamiento del Estado por la aparición de una nueva élite rural de señores de la guerra.

La tensión entre el campo y la ciudad de fines del período de la violencia clásica adquirió así, desde principios de los noventa, la forma de la tensión entre dos tendencias del Estado que han surgido de la globalización. Por un lado, las democracias liberales que ampliaron las libertades individuales, el respeto por la sociedad civil, un capitalismo dinámico y los modelos de economías de bienestar, que se pretende implantar desde las áreas más urbanizadas del país. Y por otro lado, las milicias, señores de la guerra y redes mafiosas que imponen un Estado basado en los intereses individuales de una clase armada que encontró en la criminalidad transnacional una alternativa de riqueza sin comparación en las áreas rurales atrasadas.

Dentro de esa lógica comparativa hay que reconocer que los señores de las autodefensas han sabido adaptarse mejor a los cambios históricos desde las posibilidades que encontraron en su núcleo geográfico. Han sido exitosos en su proyecto de Estado *neomedieval* y no hay razones para pensar que se inclinen por hacer concesiones en la ventaja que le llevan a las fuerzas democratizadoras. Sobre todo, si al dejar a un lado las consideraciones éticas y humanitarias de la violencia, se encuentra que las actuales élites rurales serían los grandes perdedores de cualquier tipo de reforma modernizadora que suceda en Colombia.

## **BIBLIOGRAFÍA:**

Aranguren, Mauricio. (2001) *Mi Confesión. Carlos Castaño Revela sus Secretos*, Editorial Oveja Negra, Bogotá.

Archer, Ronald P. *The Transition from Traditional to Broker Clientelism in Colombia: Political Stability and Social Unrest*. Working Paper No. 146, July 1998, Kellogg Institute for International Studies.

Arquilla, John y Ronfeldt David (editores). "*Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy*". Rand Corporation. 2001.

Atehortúa, Adolfo. (1995) *El poder y la sangre (Las historias de Trujillo (Valle))*. Cinep. Universidad Javeriana, Colombia.

Bayer, Jean- François 2001. "*La guerra perdida contra las drogas. Narcodependencia del mundo actual*". Editorial Grijalbo. México.

Bejarano, Jesús; Echandía, Camilo y Escobedo, Rodolfo. (1997) *Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales*, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- y Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Bernal, Fernando. *Crisis algodonera y violencia en el departamento del Cesar*. PNUD. 2004.

Betancourt, Darío. *Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos*. Ediciones Antropos. 1998.

Bowden, Mark. *Matar a Pablo Escobar*. Editorial INTEGRAL. 2002.

Bonilla, Juan; Duncan, Gustavo y Salóm Angie. *La descentralización en Colombia: hacia una reforma del modelo de transferencias*. FUNDESARROLLO. Fundación para el Desarrollo de la Costa Caribe. Julio de 2000.

Camacho Guisado, Álvaro "Narcotráfico, Coyuntura y Crisis: Sugerencias Para un Debate." En *El Siglo Pasado. Colombia: Economía, Política y Sociedad*, por Rafael Pardo (Compilador), Red Multibanca Colpatria, CEREC, Bogotá, Colombia, (2001).

Castells, Manuel. *La sociedad red*. Alianza Editorial, S. A., Madrid. 2000.

Dahl, Robert. *On democracy*. Yale University Press. 1998.

Dávila, Andrés (1998). *El juego del poder. Historia, armas y votos*, Uniandes-CEREC, Bogotá.

Duarte, Jesús *Educación pública y clientelismo en Colombia*. Editorial Universidad de Antioquia.

Duffield, Mark. *War as a network enterprise: the new security terrain and its implications*. En *Cultural Values*, Vol. 6, Nos. 1 & 2, 2002, 153-165.

\_\_\_\_\_, *Post-modern Conflict: Warlords, Post-adjustment States and Private Protection*, *Journal of Civil Wars*, Vol.1, No. 1, Spring 1998. Published by Frank Cass, London, pp. 65-102

Gaitán Fernando. *Una Indagación sobre las Causas de la violencia en Colombia*. En Malcolm Deas y Fernando Gaitán, *Dos Ensayos Especulativos sobre la Violencia en Colombia*, (Bogotá, 1995).

Gambetta, Diego (2000) 'Mafia: The Price of Distrust', En Gambetta, Diego (ed.) *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Departamento de Sociología, University of Oxford, chapter 10, pp. 158-175.

González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vázquez, Teófilo. *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá, CINEP. 2002.

Gouëset, Vicent (1998) *Bogotá, Nacimiento de una Metrópoli*. Tercer Mundo Editores. Bogota.

Guillén Martínez, Fernando. 1996. *El poder político en Colombia*. Editorial Planeta, Colombiana S.A., Bogotá, Colombia.

Gutiérrez Sanín, Francisco. Fragmentación electoral y política tradicional en Colombia – piezas para un rompecabezas en muchas dimensiones. Programa de Estados en Crisis. Documentos de Trabajo # 24. Marzo de 2003.

Hills, Alice. *Warlords, militia and conflict in contemporary Africa: a re-examination of terms*. In *Small Wars and Insurgencies*, Vol. 8, No. 1, 1997. Pp-35. FRANK CASS, London.

Hobsbawm, Eric J. (2001). *Rebeldes Primitivos*. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Libros de historia. Barcelona, España. Crítica.

Isacson, Adam. "Los Nuevos Dueños de Barranca". Reporte del viaje de CIP a Barrancabermeja, Colombia, 6-8 de marzo del 2001. Center for International Policy. Junio del 2001.

Kobrin, Stephen J.. *Back to the future: neomedievalism and the postmodern digital world economy*. The Wharton School. The University of Pennsylvania. 1998.



Leal, Francisco y Dávila, Andrés. *Clientelismo. El sistema político y su expresión regional*. Tercer Mundo Editores. IEPRI. 1990.

Leander, Anna (2002) *Wars and the Un-Making of States: Taking Tilly seriously in the Contemporary World*. In Stefano Guzzini and Dietrich Jung, Eds. Copenhagen Peace Research: Conceptual innovations and Contemporary Security Analysis. London and New York: Routledge.

López Andrés y Camacho Guizado, Álvaro. *From smugglers to drug-lords to "traquetos": changes in the Colombian illicit drugs organizations*. Downloaded from: <http://www.nd.edu/~kellogg/pdfs/LopeCama.pdf>.

Major T.P. Robinson. "Twenty -First Century Warlords: Diagnosis and Treatment?" *Defense Studies*, Vol.1, No.1, Spring 2001, pp.121-145.

Mason, Ann. *La crisis de seguridad en Colombia: causas y consecuencias internacionales de un Estado en vía de fracaso*. REVISTA COLOMBIA INTERNACIONAL (número 49/50). Universidad de los Andes. 2000.

Ocampo, José Antonio (2004). *Entre las reformas y el conflicto. Economía y Política en Colombia*. Grupo Editorial Norma, Bogotá.

Palacios, Marco. 'La Solución Política al Conflicto Armado, 1982-1997'. En *El Siglo Pasado. Colombia: Economía, Política y Sociedad*, compilación de Rafael Pardo. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 2001

Pécaut, Daniel (2001), *Guerra Contra la Sociedad*. Editorial Planeta Colombiana, S.A.

Pizarro, Leongómez, Eduardo. *La Atomización Partidista en Colombia: el Fenómeno de las Micro-empresas Electorales*. Working Paper #292 – January 2002.

Ramsey, Russel W. (2000) *Guerrilleros y Soldados*, Tercer Mundo Editores (2a. Ed.), Bogotá.

Rangel, Alfredo (1999) *Colombia: Guerra en el Fin de Siglo*, Tercer Mundo Editores, Bogotá.

Reno, William (2000). *Shadow States and the Political Economy of Civil Wars*. Published in *Greed and Grievance - Economic Agendas in Civil Wars*. Edited by Mats Berdal and David Malone. IDRC/Rienner.

Restrepo, Elvira María y Martínez Cuellar, Mariana. *Impunidad penal: mitos y realidades*. Documento CEDE 2004-24.

Revéz, Edgar. *El Estado como mercado*. FONADE. Carlos Valencia Editores. 1997.

Reyes, Alejandro. *Compra de tierras por narcotraficantes*. En *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*. Editado por Ariel, PNUD y DNE. 1997.

Richani, Nazih. (2003). *Sistemas de guerra*. Editorial Planeta, Bogotá.

Rocha, Ricardo. 2000. *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico*. Santa Fe de Bogotá. Siglo del Hombre Editores, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas – UNDCP-.

Roldan, Mary. 2003. *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 1946-1953*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología.

Salazar, Boris y Castillo, María del Pilar. 2001. *La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*. Colección Sociedad y economía No.1 Centro de Estudios de la Realidad Colombiana – CEREC- y Facultad de Ciencias Económicas y Sociales –CIDSE- Universidad del Valle.

Sánchez, Gonzalo y Meertens, Donny. (1983), *Bandoleros, Gamonales y Campesinos. El Caso de la Violencia en Colombia*, El Angora Editores, Bogotá, Colombia.

Sarmiento, Eduardo. *Economía del narcotráfico*. En: Carlos G. Arrieta, Luis J. Orjuela, Eduardo Sarmiento, Juan G. Tokatlian. “Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales (1995). Bogotá. Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes.

Steiner, Roberto y Corchuelo, Alejandra (1999). *Economic and institutional repercussions of the drug trade in Colombia*. CEDE- Universidad de los Andes).

Swedberg, Richard. *Max Weber and the idea of economic sociology*. Princenton University Press. 1998.

Weber, Max (1997). *Economía y sociedad*. Bogotá. FCE.

Williams, Phil. *Transnational criminal networks*. Publicado en *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy*. John Arquilla, David Ronfeldt (editors) Rand Corporation. 2001.